

Leonardo Bracamonte

**EL DECLIVE DE LA DEMOCRACIA LIBERAL
DE PARTIDOS EN VENEZUELA
(1974-2001)**



El declive de la democracia liberal de partidos en Venezuela

(1974-2001)

Caracas-Venezuela

El declive de la democracia liberal de partidos en Venezuela (1974-2001)

Leonardo Bracamonte

Fundación Celarg

Colección Nuestra América

El declive de la democracia liberal de partidos en Venezuela (1974-2001)
Leonardo Bracamonte

Cuidado de la edición

María Riera

Corrección

Anabell Daher

Solangel Díaz

Diseño de portada y tripa

Clementina Cortés

Imagen de portada

Juan Calzadilla (Venezuela) *Sin título*, 1965.

Tinta /papel. Imagen: 58 x 41 cm

© Leonardo Bracamonte, 2015

© Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, 2015

Hecho el Depósito de Ley

Depósito legal lf163201590021

ISBN 978-980-399-057-2

Casa de Rómulo Gallegos

Av. Luis Roche, cruce con Tercera Transversal,

Altamira. Caracas 1062/ Venezuela

Teléfonos: (0212) 285-2990/ 285-2644

Fax: (0212) 286-9940

Página web: <http://www.celarg.gob.ve>

Correos electrónicos: publicaciones@celarg.gob.ve, publicacionescelarg@gmail.com

Impreso en la República Bolivariana de Venezuela

*No hay motivo para el optimismo ni para el pesimismo
Todo es posible, pero todo es incierto*

Immanuel Wallerstein
Después del liberalismo

Introducción

El período que se va a examinar contiene una parte importante de las transformaciones operadas a finales del siglo xx venezolano¹. Se ha querido detectar los momentos a través de los cuales la democracia de partidos gozó de más apoyo popular, seguramente durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez (1974-1978), y el desenlace del sistema gestado desde 1958, cuyos instantes decisivos se materializaron entre la asunción del chavismo al poder desde 1999, y las confrontaciones que presencié el país a partir de la aprobación de las leyes habilitantes del año 2000, cuando se empieza a consolidar la orientación popular del proceso bolivariano.

La disertación aborda los aspectos más definitivos y fundamentales de la democracia puntofijista en el momento cuando se detiene en el examen sobre los componentes que desembocaron en el agotamiento del modelo liberal y el surgimiento del chavismo, convertido en una alternativa potencialmente revolucionaria. Para los estudiosos que contemplaban la peculiar evolución política venezolana a finales de los años sesenta y principios de los setenta –cuyos rasgos más destacables se expresaban en la estabilidad social y política finalmente lograda luego de la

1 Quiero agradecer las contribuciones de Miguel Ángel Contreras Natera y de Lionel Muñoz Paz, quienes tuvieron el compromiso de leer algunos de los escritos reunidos en este libro y realizaron varias observaciones y sugerencias que en buena medida incorporé. Los errores y omisiones que contenga esta investigación son exclusivamente mis errores y mis omisiones. Agradezco, de igual modo, la colaboración de Wilmer Parra y Miguel Dorta, quienes gentilmente ubicaron parte de las fuentes que me permitieron sustentar algunas de las ideas expuestas.

derrota militar de las guerrillas izquierdistas—, las escenas de las pobladas de febrero de 1989 saqueando los comercios en Caracas, pero también en otras ciudades del país, pudo generar sorpresa. A partir de aquellos acontecimientos inolvidables ocurrió la incubación de lo que en breve sería el colapso del modelo. Sin embargo, este acontecimiento sorprendió a los representantes de los partidos modernos, en la mayoría de los casos, sin una idea clara de lo que en verdad estaba ocurriendo.

De esta forma, esta investigación propone hacer énfasis en comprender una etapa previa al chavismo, cuyas mudanzas serán determinantes en lo sucesivo; en virtud de que las transformaciones operadas en el despliegue de la revolución bolivariana ya han sido repasadas en otros estudios. Tampoco se plantea relatar una historia que contemple los pormenores de “lo que en verdad ocurrió” en la última etapa del régimen de partidos, a manera de conducir la investigación acotada a una epistemología ideográfica. El esfuerzo está puesto en la captación de las tendencias más fundamentales que aceleraron el fin del *puntofijismo*.

En todo caso, más allá del ámbito de la nación, procesos estructurales que remiten al propio funcionamiento del *moderno sistema mundial* advertidos en la *larga duración* tendrán una incidencia definitiva en el curso del período que abarca esta investigación. En otras palabras, se sostiene que el carácter específico y temporalmente situado de las transformaciones en Venezuela, al menos una parte importante de ellas, encuentran su escenario de comprensión causal más allá de los límites de la nación. De ahí que el análisis debe orientarse en primer lugar hacia el intento por develar desplazamientos geopolíticos y geoculturales que hacen parte del funcionamiento crítico del capitalismo histórico². Aquí se mencionan brevemente.

2 La perspectiva con la cual inscribo el proceso histórico venezolano en las coordenadas sistémicas del capitalismo mundial, la tomo del fundador del análisis de sistemas-mundo, Immanuel Wallerstein. Un texto introductorio para tener una idea de la propuesta wallersteiniana: *Análisis de sistemas-mundo. Una introducción* (2010).

Uno de los acontecimientos fundamentales llamado a determinar desarrollos posteriores en Venezuela y en el mundo fue, en primer lugar, el fin del llamado “socialismo real”. Este evento, que vino a profundizar, ciertamente, la desorientación en el campo de la izquierda impuesta desde su derrota política y militar a finales de los años sesenta, no sólo será importante por sí mismo, sino porque tiene implicaciones a mediano y largo plazo. Desaparecido el contradictor fundamental de las democracias liberales, el bloque de Estados comandados por partidos comunistas, la democracia liberal y en consecuencia el liberalismo, visto como geocultura hegemónica mundial del capitalismo histórico, ha mostrado sus rígidas limitaciones. Un producto de estos hechos es cultural; el optimismo por un progreso incesante ha desaparecido del imaginario de las mayorías postergadas. En palabras de Immanuel Wallerstein:

El verdadero significado de la caída de los comunismos es el derrumbe final del liberalismo como ideología hegemónica. Los últimos que creyeron seriamente en la promesa del liberalismo fueron los partidos comunistas del ex bloque comunista. Sin ellos que continúen defendiendo la promesa, las capas dominantes del mundo han perdido toda posibilidad de controlar a las clases trabajadoras del mundo a no ser por la fuerza. El consentimiento se ha desvanecido porque el soborno se ha desvanecido (2001, p. 241).

Es decir, este optimismo acendrado en el centro de la geocultura del sistema mundial capitalista fue, efectivamente, extenso y compartido por todas las ideologías que encarnaron el cambio social a partir de la Revolución Francesa en 1789, pero a mediano plazo representó un motivo desmovilizador cuando las clases trabajadoras sucumbieron a la romántica idea de que el futuro les pertenecía.

En segundo lugar, el estallido de la crisis de la deuda externa de los llamados para entonces países del Tercer Mundo y la puesta al día de las condiciones ideales para las instituciones financieras internacionales, orientadas a presionar a los estados deudores

para que empezaran a aplicar políticas de ajuste macroeconómico, también determinaron procesos posteriores en Venezuela y en el mundo. Es decir, el neoliberalismo como estrategia global de las clases privilegiadas fue aplicado también en las zonas deprimidas del mundo.

El tercer factor, a la sazón determinante pero igualmente progresivo, fue el debilitamiento del poder hegemónico de Estados Unidos como super potencia, cuyo despliegue imperialista llegó a configurar la arquitectura geopolítica mundial, sobre todo a partir de 1945, al final de la segunda guerra europea. Este suceso implicó de facto la posibilidad de que formaciones de izquierda pudieran buscar y en efecto conquistaran el poder del Estado a través de mecanismos legales, al menos en América Latina³.

En cuarto lugar, la crisis de la democracia ha tenido consecuencias decisivas para la región latinoamericana, vinculadas a los efectos que acarrearón como resultado la aplicación del neoliberalismo y la consiguiente debilidad de los estados nacionales latinoamericanos. Esto produjo un descontento general hacia los estados y hacia los sectores políticos tradicionales que provocó la emergencia de gobiernos de izquierda y de centro izquierda, y en general la vitalidad de los movimientos antisistémicos en la región. En síntesis, lo que ha estado ocurriendo, relacionando

3 El problema de la deuda externa, cuyo impacto conmovió a los países del para entonces llamado Tercer Mundo, y la decadencia del poderío norteamericano a nivel mundial son expresión a su vez del fin del orden de Bretton Woods, creado bajo el liderazgo de Estados Unidos. Pedro Castro pone en contexto estos acontecimientos: «Desde la abolición del orden de Bretton Woods a finales de la década de los sesenta y comienzo de los setenta se abren en el Orden Mundial un conjunto de transformaciones que son el resultado del abandono de las regulaciones del orden internacional de la segunda posguerra, y del desarrollo acelerado de nuevas tendencias que se generaron en el interior del mismo. De las primeras, surge un Sistema Monetario Internacional y de Comercio, caracterizado por una alta incertidumbre; de las segundas surgen, por una parte, la profundización del proceso secular de globalización del capitalismo, y por otra, la aparición de una nueva ola de revolución tecnológica, que pone en crisis el modelo productivo Taylor-fordista de producción en serie» (2000, p. 59).

estos acontecimientos e inscribiéndolos en la *larga duración* y en las coordenadas de nuestro moderno sistema mundial, es que asistimos a una crisis estructural del capitalismo histórico. Estos cuatro factores se fraguan y toman un carácter condicionante en la crisis que sacude a Venezuela a finales del siglo xx.

La alusión a una crisis del capitalismo histórico, visto como escenario estructural sin el cual no se puede explicar lo que ocurre en la Venezuela de finales del siglo xx, tiene otras implicaciones que conviene ubicar en el presente para el logro de un análisis más complejo. Se trata de incursionar en el tratamiento de una variable estructural desdeñada por las ciencias sociales convencionales: el tiempo. Desde una perspectiva aún hegemónica de las estructuras modernas del conocimiento, el tiempo y el espacio no han sido realidades dignas de consideración teórica. Se tiene la idea de que el sistema social en el cual aún vivimos hace parte de una realidad, digamos, permanente. Su presencia ha sido entonces naturalizada como consustancial a la propia existencia del universo. Así, el tiempo se ha constituido como una realidad objetiva, externa al individuo y al tratamiento social de la realidad.

La dimensión tiempo-espacio en la tradición newtoniana de la ciencia se ha constituido como un paradigma cuya noción básica con frecuencia no se problematiza, porque se considera que hace parte del propio funcionamiento “eterno” del universo. Este presupuesto teórico se trasladó a las ciencias sociales. En consecuencia, se desestimó *la construcción social del tiempo*. En los términos planteados por Norbert Elías, referidos a la fragua del tiempo como principio elemental de los grupos humanos organizados socialmente: «la experiencia humana de lo que ahora se llama “tiempo” ha cambiado en el pasado y sigue cambiando en el presente, no sólo de manera histórica y accidental, sino estructurada y dirigida, y puede ser explicada» (2000, p. 48).

Wallerstein ha advertido esta falencia en la tradición dominante de las estructuras modernas del conocimiento. De este modo, el principio se convirtió entonces en soporte de la validez

universal de las formulaciones de la ciencia social, pero provenía de las ciencias de la naturaleza; no importaba dónde ni cuándo se analizaran los fenómenos y los procesos, porque la realidad funcionaba delimitada en las lógicas de un presente eterno (Wallerstein 1996). El fundador de la perspectiva de sistemas-mundo ha tratado de darle respuesta a esta situación pensando las variables de tiempo y espacio como una unidad conceptual que estarían “irrevocablemente vinculadas”:

TiempoEspacio. Un concepto de reciente invención. El uso de mayúsculas y aglutinación de los dos términos refleja la idea de que para cada tipo de TIEMPO SOCIAL existe un tipo particular de espacio social. Por ende, el tiempo y el espacio en las ciencias sociales no deberían pensarse por separado o medirse por separado, sino como irrevocablemente vinculados en un limitado número de combinaciones (Wallerstein 1997, pp. 137-138).

En tal sentido, Wallerstein ha detectado dos tipos de *TiempoEspacio* en la cultura epistemológica de la ciencia social, el *TiempoEspacio Episódico* o *Geopolítico* y el *TiempoEspacio Eterno* (1997). No es el objetivo de la investigación detenerse en la definición de cada uno de ellos, basta con mencionar que ambas nociones pertenecen a las tradiciones epistemológicas en las que ha permanecido dividido el saber social: idiográfico y nomotético. A las limitaciones de estas dos concepciones del TiempoEspacio el autor propone tres: el *TiempoEspacio Cíclico Ideológico*, el *TiempoEspacio Estructural* y el *TiempoEspacio Transformativo* (ibíd., p. 24).

La perspectiva de los diferentes *TiempoEspacios* se comprende mejor si se les ubica como construcciones sociales inmanentes a la existencia de un sistema histórico que en este caso particular se trata del sistema-mundo capitalista. Así, por ejemplo, el TiempoEspacio Cíclico Ideológico no funciona en la ocurrencia de ciclos desplegados en un tiempo eterno, se constituyen como ciclos que se detectan a lo interno del funcionamiento del sistema mundial, y se conciben como *los mecanismos que regulan estos sistemas* (ídem).

Un ejemplo de lo que se trata de demostrar son los ciclos de Kondratieff, que determinan la expansión o la contracción de la economía mundo y que ocurren cada cincuenta o sesenta años. Se podría hacer la analogía de que tales ciclos operan como las respiraciones dentro del cuerpo de los mamíferos. Como se puede ver, para el caso de los ciclos de expansión y retraimiento de la economía-mundo, el estudio de sus regularidades y la verificación de que en efecto ocurren, tiene múltiples implicaciones sociales, políticas e incluso morales. La dimensión ideológica de esta categoría del TiempoEspacio se muestra en que las nociones espaciales tienden a develar o a expresarse delimitadas por *normas geoculturales del sistema histórico* (ibíd., p. 14).

Es decir, la concepción remite al sistema-mundo concebido por etapas interpretadas así, producto de disputas ideológicas específicas. Un ejemplo está en las distintas concepciones de capitalismo preindustrial, industrial, sociedad posindustrial. Otro ejemplo revelador fue la división del mundo en dos bloques ideológicos enfrentados que tuvo lugar a partir de 1945 hasta 1991, o en la presencia geopolítica del llamado Tercer Mundo. Aunque los analistas comúnmente proceden como si esta realidad fuera en verdad permanente, y los cambios operados dentro del TiempoEspacio Cíclico Ideológico se tomen como trascendentales, en realidad sus transformaciones no suelen ser cualitativas, entre otras cosas, porque no remiten a un escenario estructural sistémico. Lo que sí ocurre es que estos ciclos considerados a la luz de la larga duración empujan inevitablemente hacia cambios estructurales que comprometen seriamente la vida del sistema histórico.

El TiempoEspacio Estructural es, digamos, el tiempo más fundamental, entre otras cosas porque describe o representa el manejo de la unidad de análisis de los sistemas históricos, tal como lo señala Wallerstein:

Nada nos acerca tanto a la historia del devenir humano y de la evolución humana como el comprender qué clases de sistemas históricos hemos construido, cuáles son sus parámetros y límites, y por qué su existencia es necesariamente limitada. El

TiempoEspacio estructural se refiere a lo que podemos cambiar (el sistema a corto plazo), qué cambiará de manera segura (el sistema a largo plazo), por qué el sistema no cambia a corto plazo realmente (los ritmos cíclicos) y por qué en efecto cambia a largo plazo (las tendencias seculares, que se alejan del equilibrio) (ibíd., p. 8).

La última mención de la cita de Wallerstein nos coloca en la noción tiempo-espacial que queremos proponer como el marco de esta investigación. El *TiempoEspacio Transformacional* remite entonces a la crisis estructural del capitalismo histórico. Es un tiempo signado por la incertidumbre en la medida que, a pesar de los variados llamados políticos que anuncian la seguridad de un escenario cualitativamente distinto, los analistas del sistema-mundo no pueden prever qué tipo de sistema mundial sustituirá al capitalismo histórico. En todo caso, este instante en la vida de un sistema histórico abre escenarios de intervención humana que no estaban previstos en los tiempos de estabilidad sistémica relativa. La incursión de la creatividad humana en el curso de una historia que está abierta, supone la articulación eventual de nuevos sentidos de futuro que deben revitalizar los discursos, la política y la emergencia por experimentar en el campo del conocimiento.

De momento, las certezas se reducen a la presencia de una crisis estructural y al anuncio de graves trastornos sistémicos en desarrollo, cuyo alcance tampoco se puede prever aún. Los referentes más emblemáticos, las instituciones históricas de la modernidad capitalista, las ciencias sociales, las ideologías y los movimientos antisistémicos se muestran particularmente conmovidos. Es lo que hemos escuchado durante estos años sobre la crisis de la política, de las ideologías y del conocimiento sistémico. En cada uno de estos campos, cuyas dinámicas han funcionado históricamente de forma interdependiente, se presentan luchas encarnizadas por construir nuevas hegemonías. Una porción de estos grupos hacen esfuerzos para lograr conducir la crisis estructural hacia escenarios más racionales y sensible-

mente más democráticos. En este contexto de búsquedas se ha querido inscribir este trabajo.

El primer capítulo «El contenido sustantivo del Pacto de Punto Fijo: el acuerdo como fetiche», trata de dar cuenta de los contenidos subyacentes de aquella alianza política, entre otras cosas porque ese momento inauguró unas formas específicas de hacer política, predominantes durante todo el período que ocupa la investigación. En esta primera parte, el proyecto histórico político desplegado particularmente por el partido Acción Democrática (AD) se hace cada vez más hegemónico, es decir, legítimo. Guardarán mucha importancia en lo sucesivo las implicaciones que trajo el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, los lineamientos más sobresalientes lo determinan la subida de los precios del petróleo y las repercusiones que produjo en aquella sociedad. Se incluye, por último, un análisis general sobre la situación de *las izquierdas*, especialmente el experimento del Movimiento al Socialismo, MAS. Esta etapa es importante para la evaluación del resto del período considerado. El crecimiento de los precios internacionales del petróleo tuvo una incidencia en la conformación de un determinado imaginario nacional.

El segundo capítulo, «La conquista de un orden específico», muestra la consolidación del “orden”, una vez que los desafíos al *modelo de partidos* han sido superados. En estos años las expresiones de apoyo electoral para las formaciones de izquierda resultan muy pobres. Más bien el país asiste a una progresiva fragmentación de las alternativas “progresistas”. En este período se estructuran los partidos casi como las únicas instancias de participación; de esta forma se constituyen como aparatos burocráticos cada vez más corruptos, clientelares, autoritarios y excluyentes. Esta sección termina con la incorporación de algunas de las implicaciones que tuvo el *Viernes Negro* de 1983, visto como el primer síntoma de la transición política que más adelante se va a presentar.

El tercer capítulo, «La expansión neoliberal», incluye reflexiones sobre el carácter de este proyecto mundial que entrañaba la revitalización del capitalismo; el momento de su surgimiento en

el seno de círculos de intelectuales europeos preocupados por la expansión de la democracia y los Estados benefactores en el mundo. Como una respuesta esperable al avance de las reformas macroeconómicas, el crecimiento de protestas populares y la llamada masacre de El Amparo de 1988 son incluidas en el análisis. Estos acontecimientos son vistos aquí, y en general en varios estudios que abordan el período, como hechos que anuncian la gestación de un malestar social mayor, que se contextualiza bien con una acusada desinstitucionalización general.

El cuarto capítulo, «La fase final del puntofijismo» analiza sumariamente el programa de ajuste macroeconómico presentado por el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y las diversas respuestas que generó la sociedad por oponérsele, al tiempo en que el desprestigio del modelo político de partidos tocaba fondo.

El último capítulo, *El chavismo*, sugiere la idea según la cual el proceso bolivariano encarnado en el chavismo plantea el inicio de un proyecto cuya característica más notable es su naturaleza poco estructurada. Es probable que esta particularidad haya sido la alternativa lógica para convocar a las mayorías a la participación en la edificación, en una primera etapa, de un nuevo sistema político. Contiene esta sección aspectos que destacan la formación del movimiento bolivariano, las elecciones de diciembre de 1998, el proceso constituyente, la *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela* de 1999, y las polémicas 49 leyes habilitantes, cuyo contenido desató la intransigencia de los factores de oposición y del gobierno norteamericano, insuflados además por el ambiente reaccionario que generó el ataque de grupos anti-estadounidenses a la infraestructura financiera y de seguridad dentro del territorio de Estados Unidos aquel 11 de septiembre de 2001.

De tal modo, como podrá apreciar el lector, esta investigación ubica el fin de la hegemonía puntofijista no en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998, cuando la candidatura de Hugo Chávez y del Polo Patriótico acumuló una mayor cantidad de votos que sus contrarios. El final de ese período de la democracia de partidos tampoco se establece en esta investigación durante

la asunción de Hugo Chávez a la presidencia de la república en febrero de 1999. Es decir, no se ha querido contemplar un suceso que anuncie con precisión el fin de una época y el comienzo de otra. La razón es sencilla: en realidad en la mayoría de las ocasiones no son los gobiernos, ni los estados, ni el inicio del ejercicio de la presidencia ni el fin de un período presidencial, los que fijan la conclusión de un período histórico.

Estos procesos que involucran la inminencia de una transición histórica no los determina tampoco la decisión de alguna personalidad relevante por más socialmente influyente que pueda ser. Estos son procesos más impersonales que, en este caso particular, se explican concentrando el análisis en el funcionamiento histórico del modelo de partidos establecido desde enero de 1958. Aquí la acción colectiva y los liderazgos carismáticos son obviamente definitorios, pero el escenario en que les ha tocado intervenir no es producto de decisiones individuales.

Por eso, el declive de la democracia liberal de partidos lo colocamos (al menos no fijado con precisión en un suceso) entre la victoria electoral del candidato del Polo Patriótico y las tensiones que comienzan a suscitarse en el desarrollo del proceso constituyente, la aprobación de la nueva *Constitución Bolivariana*, el diseño de las leyes habilitantes y el continuo incremento de las confrontaciones políticas y sociales. En este tramo del proceso, y también por voluntad de las mayorías de la población, el punto-fijismo desaparece para siempre como posibilidad de constituirse en base o fundamento del orden social.

Caracas, abril de 2011

El contenido sustantivo del Pacto de Punto Fijo: el acuerdo como fetiche

El modelo democrático que se empezó a implantar en Venezuela desde 1958 contenía especificidades que en parte diferenciaban este ensayo del resto de las experiencias llevadas adelante en América Latina⁴. En principio, como se sabe, en el año 1958 fue derrotada por una coalición de organizaciones políticas, empresarios descontentos, grupos de las Fuerzas Armadas, algunas personalidades de la Iglesia católica y sectores civiles organizados, la última dictadura que gobernara en nombre de la institución militar. Por lo que de suyo se asignaba impedir, a través de la negociación, que otro sector militar se adueñara del poder y frustrara en consecuencia la viabilidad de algún proyecto democrático.

Los acuerdos establecidos, en principio, entre los partidos políticos para asegurar la sobrevivencia de la naciente democracia, y por consiguiente de esos mismos partidos que los suscribieron,

⁴ En rigor, más allá de los límites de este trabajo, la democracia liberal comienza a gestarse desde 1936. Una perspectiva de largo plazo aportada por el historiador Alberto Navas Blanco (2012) ubica el inicio, despliegue y crisis de la democracia liberal entre 1936 y 1989. Esta fase más amplia de la Historia de Venezuela la denomina como *el prolongado y conflictivo proceso de democratización liberal representativo*.

encontraron expresión en un documento conocido en lo adelante como *Pacto de Punto Fijo*⁵. Reduciendo el relato a la descripción puntual de lo que aconteció, el documento se firmó el 31 de octubre de 1958 en la residencia del dirigente socialcristiano, Rafael Caldera, en Caracas, llamada precisamente Punto Fijo. Los convocados para la cita fueron los partidos Acción Democrática, Unión Republicana Democrática y Copei.

El documento taxativamente establecía varios puntos que los involucrados se debían comprometer a acatar. El primer punto correspondía al respeto constitucional según el cual todas las fuerzas políticas debían guardar al resultado de las elecciones presidenciales, y al apoyo que se obligaban brindar al ganador de la contienda electoral. El otro aspecto contentivo en el documento se reduce al establecimiento, por parte del partido ganador, de un gobierno de unidad nacional, lo que suponía de entrada que los partidos signatarios del pacto debían tener alguna representación en el gabinete y en el resto de los altos cargos del Estado. Pero al mismo tiempo establecía la imposibilidad de que ninguno de los partidos asumiera una hegemonía que representara un peligro para la continuidad de la entonces débil democracia. Y el último precepto estaba referido a la necesidad de presentar un programa mínimo común de gobierno para las elecciones que iban a ocurrir en breve.

Aunque el acatamiento puntual de lo que ahí se acordó es discutible, en este caso no importa tanto referirnos a la fidelidad prestada por las organizaciones que intentaban controlar el proceso democrático. Pero en definitiva, ¿por qué se trae a colación para el estudio de este período que transcurre entre 1974 y 2001, un documento firmado en las primeras horas de la democracia representativa, en 1958? Lo que se quiere sostener aquí es que el pacto, visto más bien desde la perspectiva de los valores implícitos, o del conjunto de ideas que subyacen y dan fundamento al compromiso, fue lo que en verdad trascendió al punto de que se

5 El documento se encuentra en la dirección web de la revista digital *Venezuela Analítica* (2013).

puede hablar entonces de la *democracia de Punto Fijo* como un sistema político de partidos específico en el cual el establecimiento de pactos entre los distintos liderazgos funcionales al sistema, marcan la pauta de una conducta política históricamente recurrente. De este modo lo plantea Rey cuando alude a la gestación de prácticas típicamente “puntofijistas”, para tratar de dar con una definición distintiva de la democracia liberal en Venezuela:

El Pacto de Punto Fijo consagró formalmente, por escrito y expresamente esta regla de los tres partidos políticos (AD, Copei y URD); pero simultáneamente se desarrolló, durante la presidencia de Rómulo Betancourt, un sistema no escrito, que incluía la consulta para las decisiones fundamentales a la Iglesia católica a través de su más alta jerarquía; a las Fuerzas Armadas a través del Alto Mando Militar; a los trabajadores a través de la CTV; y al empresariado a través de Fedecámaras (2009, pp. 122-123).

Rey denomina al orden político puntofijista como un “sistema populista de conciliación de élites”:

Lo que he llamado sistema populista de conciliación de élites estaba constituido por un complejo sistema de negociación y acomodación de intereses heterogéneos en el que los mecanismos de tipo utilitario iban a jugar un papel central en la generación de apoyos al régimen y, por consiguiente, en el mantenimiento del mismo (ibíd., p. 123).

Es decir, la centralidad de la negociación entre las élites partidistas, ampliadas en lo sucesivo hasta las empresariales, militares, jerarquía católica y “aristocracia sindical” permiten sostener la prolongación del régimen. De esta forma se neutralizaba por medio de la negociación algunos posibles focos de conflicto. Con el paso del tiempo, los acuerdos se convierten en conducta corriente, en procedimientos institucionalizados que irían fundando un orden político particularmente puntofijista. Aunque esto no quiere decir que a lo interno de los grupos dominantes no se suscitasen controversias de distinta naturaleza. A finales de los años

ochenta, cuando las élites y el conjunto del sistema político se deslegitima progresivamente, esta concepción de hacer política desde las cúpulas estará en el centro del cuestionamiento de los sectores descontentos.

Más adelante se incluirán en la continuación del análisis otros aspectos que legitimaron el modelo, aquí apenas se mencionan algunos factores que completan el ejercicio de caracterización. En primer lugar, se ubica la promesa en la distribución del petróleo como expresión material de la democracia y de la justicia social.

El sistema político no funcionaba como en otras experiencias en la acción de distribuir a cada sector de la vida nacional que participa en el proceso productivo, una porción de la plusvalía originada. La peculiaridad del caso venezolano se fundamenta en la repartición de los recursos generados por la economía de extracción petrolera (Coronil 2002). La distinción no es sólo nominal, conlleva diferencias cuyas consecuencias se proyectaron con los años a toda la sociedad como parte de una particular subjetividad social que determina, entre otras cosas, la relación entre los venezolanos y el Estado. Por consiguiente, cada sector va a esforzarse por capturar alguna porción de la renta petrolera esparcida incluso a través de formas clientelares por un petro-Estado.

Esto trae como consecuencia, además, el peligro de recurrir a mecanismos “heterodoxos”, esto es, el ejercicio habitual de la corrupción, según el cual el personal político en alianza con sectores empresariales se ven tentados a sucumbir en cada gobierno. Esta conducta se ve potenciada por el acontecimiento regular del alza de los precios del petróleo, y del debilitamiento en consecuencia de los mecanismos institucionales de control y supervisión. Coronil ha examinado esta especial relación para explicar el impulso de la democracia de Punto Fijo, pero también como punto de partida para comprender la especificidad del capitalismo en Venezuela:

El caso venezolano no exhibe el desarrollo histórico de la “espontaneidad” de mercado clásica, sino una segunda natura-

leza diferente: el reconocimiento “espontáneo” de la necesidad de controlar la intervención estatal como resultado de la formación de una sociedad capitalista cuya fuente fundamental de riqueza monetaria no es la producción local de plusvalía, sino la captación internacional de renta del suelo. En lugar de entender este caso como una anomalía, lo que es necesario analizar en ambos es la naturaleza histórica de un comportamiento político aparentemente espontáneo (ibíd., p. 256).

La sedimentación histórica de estas prácticas pronto derivó en la idea íntimamente asociada, según la cual asumir el poder u ocupar cargos de responsabilidad en la estructura del Estado era el comienzo de un proceso lógico y casi natural para acumular grandes cantidades de dinero. Para ello se contaba con el auspicio, la protección, o en todo caso la complicidad del entorno políticamente cercano. En este sentido, la cultura de los pactos implícitos y subyacentes se extendía como un manto que amparaba el asalto a los dineros públicos.

Otro aspecto fue la represión, practicada de forma sistemática contra quienes estaban fuera del sistema de partidos, o encarnaban propuestas que apuntaban a redimensionar o trascender los supuestos políticos e ideológicos de la llamada democracia representativa.

Es probable que esa forma de concebir el acuerdo como un fetiche establecido por las organizaciones del conglomerado dominante, y más adelante por los distintos factores de poder que presidieron la democracia de partidos, se introdujera como un componente importante en las convenciones culturales de las élites venezolanas, producto del “trauma” que significó todo el desarrollo del trienio “octubrista” de Acción Democrática entre 1945 y 1948. Los jerarcas de Copei y URD, por ejemplo, para aquellos años cuarenta habían conspirado contra AD para desalojar del poder a un experimento que amenazaba (sostenían los sectores complotados), los fundamentos del orden social. Un hecho que ilustra la fragilidad con la que se iniciaba el puntofijismo, y en general los experimentos de gobiernos civiles en la Historia de

Venezuela hasta entonces, fue el júbilo expresado por el gobierno de Rómulo Betancourt en enero de 1960, cuando se cumplía su primer año en el poder. El tono celebratorio se debía a que por primera vez en la historia del país un gobierno elegido, producto del ejercicio del voto universal, directo y secreto, lograba mantenerse en el poder por un año cumplido (Rey 2009).

Los antecedentes estaban claramente inscritos en la memoria de Rómulo Betancourt, dirigente principal de AD en 1958. De ahí, un compromiso que supo materializar bien su organización: el de no volver a adelantar reformas vistas como radicales o revolucionarias por parte de los grupos dominantes, no movilizar al pueblo más allá de las regulares campañas electorales, reducir los mensajes *nacionalistas*, gobernar con formaciones políticas cuyas diferencias ideológicas no representen cambios estructurales al modelo liberal, marginar a los sectores a la izquierda del ensayo de élites, incorporar a los militares y a la jerarquía de la Iglesia católica al condominio puntofijista, fortalecer las estructuras partidistas y siempre pactar, negociar y volver a pactar en las diferentes instancias de decisión. De esta forma, se estructuraba desde el principio el modelo de una democracia formal, cuyas formas regulares de establecer acuerdos en la cúpula se traducían posteriormente en una voluntad por excluir a las mayorías.

El compromiso tuvo varias implicaciones que fungen también como punto de partida de estrategias políticas fraguadas sobre el escenario geopolítico. En primer lugar, la celebración del Pacto de Punto Fijo necesariamente estaba destinada a excluir a otros factores fundamentales en la vida nacional del momento, como el Partido Comunista de Venezuela, que particularmente había trabajado por la unidad de las fuerzas democráticas en los duros años de la clandestinidad. Con esta exclusión, la naciente democracia estaba exponiendo sus básicas orientaciones ideológicas, arregladas según los preceptos convencionales de los países identificados con el llamado “mundo libre”.

En segundo lugar, de esta manera Venezuela se circunscribía a las coordenadas de las *democracias occidentales*, patrocinadas en la región por Estados Unidos. De tal forma, el sistema bien pronto

tuvo la oportunidad de mostrar su lealtad a las directrices de las políticas norteamericanas, cuando los gobiernos de Punto Fijo asumieron una participación estelar en la represión de los movimientos insurreccionales de izquierdas en la región, así como la política de aislamiento que mantuvieron en un primer momento contra la Revolución Cubana.

Reconocer los contenidos que históricamente llegó a mostrar la democracia instaurada en 1958, aquella que ciertamente logró superar varios obstáculos de entidad sobre todo en sus primeros años, parte de dar cuenta de las motivaciones más visibles del Pacto de Punto Fijo, es decir, lo que efectivamente dice el documento. Pero también conviene analizar las razones, acaso más profundas, que subyacen en un contexto más bien cultural que fue fraguando una lógica y un sentido común referido a las pautas convencionales con las que comúnmente se hacía política en los años de la democracia representativa.

Este trabajo tiene el objetivo de brindar una versión de la historia que concentra el examen en el período que abarca desde 1974 hasta 2001. Se toma este período porque el análisis de conjunto permite detectar la naturaleza del sistema político que acompañó la vida de muchos venezolanos y venezolanas durante más de cuarenta años. Allí están expuestos para el observador el momento donde el proyecto tuvo más aceptación social, sin embargo, mientras esto sucedía, al menos para la percepción “general”, comenzaba en verdad la decadencia del sistema. La llegada de una bonanza petrolera a mediados de la década del setenta, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, contribuyó a instaurar prácticas ligadas a la corrupción en los funcionarios del Estado, pero también en sectores emergentes de la burguesía aliada a los políticos de entonces.

Sobre estos temas versan fundamentalmente las ideas introductorias que sostienen el primer capítulo. En este contexto donde prima, digamos, cierto consenso social sobre la viabilidad de la democracia puntofijista, el papel de la izquierda revolucionaria es bastante limitado en términos del alcance de sus mensajes. En concreto, el conjunto de las formaciones de izquierdas

todavía se lamían las heridas infringidas luego de intentar tomar el poder del Estado a través del golpe militar, primero, y luego ensayando una guerra irregular que dejó a los sectores revolucionarios y a sus bases diezmadas y desmoralizadas. Aunque como se verá aún quedaban formaciones guerrilleras tratando de revitalizar el proyecto insurgente. No obstante, el panorama de división, aislamiento, desmoralización y enfrentamientos internos dejó algunos espacios para la inventiva e intentos de renovación políticos e ideológicos que se concretaron en el debate sobre “la vía venezolana al socialismo”. De estos asuntos discurre la última parte de este primer capítulo.

El primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, la *Gran Venezuela*

El primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) comenzó en medio de cierto optimismo, motivado al auge de los precios del petróleo y al éxito parcial que había conseguido el gobierno saliente de Rafael Caldera (1969-1974), en la implementación de la política de pacificación de una importante porción de los grupos que trataron de llegar al poder a través de la insurrección armada. En aquel proceso electoral de 1973 participaron Lorenzo Fernández por Copei, Jesús Ángel Paz Galarraga por el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), una división de Acción Democrática, José Vicente Rangel por el Movimiento al Socialismo (MAS) y Jóvito Villalba por la Unión Republicana Democrática (URD). De esta forma, el candidato de AD fue electo con 2.142.427 votos, representando de esta forma el 48,70% del universo de votantes.

Varias implicaciones para el futuro inmediato tuvieron estas jornadas electorales. En primer lugar se profundizaron procesos de desgaste de organizaciones como URD. El caso del MEP reviste cierta paradoja al momento de su fundación, y sobre todo en la campaña electoral de 1968 su participación fue muy destacada. Para las elecciones comentadas aquí, los resultados estuvieron muy por debajo de lo esperado, apenas obtuvo 221.864 votos,

que representaban 5,09% del universo electoral. En segundo lugar, los resultados parecieron arrojar la consolidación del modelo bipartidista (entre AD y Copei se repartieron 85% de los votos para presidente y 75% de los votos para el parlamento). Este modelo, tan apreciado por algunos analistas, consiste en que dos formaciones políticas institucionalizadas se disputan la mayoría del electorado y se turnan en el poder por un considerable período. En este caso, el precio de la persistencia institucional es la perpetuación del statu quo encarnado principalmente en dos partidos que estarían “condenados” a vaciarse de sus particularidades programáticas en nombre de la estabilidad lograda.

El gobierno que comenzaba sucede en medio de transformaciones estructurales cruciales que moldearon la imagen de una Venezuela cuya cultura ya era predominantemente urbana. En los años siguientes las implicaciones de esta versión como otras que se empiezan a construir en esta etapa serán severamente cuestionadas por los investigadores sociales. En todo caso, importa registrar estos cambios urbanísticos para 1971, cuando la población urbana se componía de 6.994.721 personas en una población nacional de 10.721.522 habitantes, según el censo para la época. La población urbana ya representaba 65,4%. Pocos años después, en 1981, culminado el primer gobierno de Pérez, la concentración poblacional en ámbitos urbanos había crecido hasta 10.524.633 personas de los 14.516.735 habitantes que testificaba el censo. Esto suponía que la población en las ciudades había ascendido hasta representar 72,50% (Baptista 2006).

Las consecuencias que parecían advertirse de estos movimientos eran la secularización de la sociedad venezolana en desmedro de formas tradicionales de asociación, las cuales primaban en comunidades rurales. Pero en todo caso, la secularización que pudo gestarse implicó la generación de otras mistificaciones que enriquecerían un imaginario *ciudadino* como la cultura relacionada con la riqueza fácil o el consumo de determinados productos, coherente con la procura de un prestigio social pertrechado en la supuesta virtud de la episódica y ocurrente *viveza criolla*. Así mismo otros rasgos cercanos a los cultos religiosos se han remozado con personajes popularmente relevantes para

la historia del país en un proceso dinámico muy distante de la construcción ideológica de una ciudadanía liberal acoplada al rigor de la urbanidad.

Esa cultura del consumo fue transversal a todas las capas sociales. Muy pronto la televisión se convirtió en la más espectacular herramienta que llegó a moldear aspiraciones, gustos, sensibilidades, nociones de bienestar, de felicidad, patrones de conducta, que hacían parte de un proceso que expresaba una clara garantía para la reproducción y el reforzamiento del orden social jerárquico y excluyente. Con todo, también se ha podido detectar la permanencia, en muchos casos agazapada en el ámbito con frecuencia privado, con frecuencia propio de las familias rurales que emigraron a Caracas, de concepciones de vida y formas de conducta que privilegiaban el carácter colectivo y solidario de las relaciones humanas, expandidas mayormente en los barrios y en general en los sectores populares urbanos.

Muchas de estas oleadas de venezolanos que llegaban a las ciudades centrales, o de emigrantes provenientes de otros países de América del Sur en busca de satisfacer necesidades fundamentales, se agolparon en las periferias de las zonas urbanas. En Caracas conquistaron los cerros que bordean la ciudad para incrementar un proceso de ocupación espacial espontáneo que se venía produciendo con cierto impacto desde los años cuarenta.

Para estos sectores excluidos, la democracia representativa no ofreció salidas en términos de políticas claras que tuvieran alguna permanencia a través de la sucesión de gobiernos *puntofijistas*. En poco tiempo, sobre todo en la etapa de implementación de las políticas de ajuste neoliberal, como se verá, se incorporaron en masa a la eufemísticamente llamada “economía informal”, conformaron luego amplios sectores descontentos de la población en los años noventa, y a partir de 1999 hicieron parte de las bases sociales del chavismo más genuino.

En las barriadas constituidas y en los cerros viven aún hoy millones de personas de los más diversos orígenes, llevando el peso de necesidades de todo tipo, sometidas al rigor de las mafias del narcotráfico y de la violencia recrudescida de los últimos años.

En esos espacios las instituciones tienen una presencia episódica o regularmente clientelar. Al mismo tiempo, en los sectores populares se desarrollan intensos procesos de socialización que durante el período se han expresado en manifestaciones culturales que revelaban la existencia de una memoria histórica local insuflada por la fragua de tradiciones de luchas y organización popular. Ese proceso, en verdad complejo, tuvo uno de sus momentos decisivos durante el primer gobierno de Pérez.

Con todo, el alza de los precios del crudo había despertado en esta etapa la preocupación por parte de algunos de los países centrales del sistema capitalista, particularmente del gobierno norteamericano. Ya para el primer trimestre de 1973 los precios habían ascendido de \$ 2,68 a \$ 11,70 (Manzano 2009). Esto producía un enorme impacto en las economías de los países centrales en la medida en que se hacían evidentes las formas de “dependencia” que mantenían aquellos países con respecto al petróleo, y en particular a los países integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Para el momento en que Pérez accede al poder ya la OPEP está en capacidad de fijar los volúmenes de producción y en consecuencia determinar de forma clara los precios del crudo.

Esto hizo a su vez que el manejo de los Estados petroleros con respecto a su negocio máspreciado se replanteara, sobre todo en el trato con las compañías transnacionales del petróleo a partir de una nueva correlación de fuerzas en la que los Estados petroleros finalmente podían establecer *las condiciones en las que operarían* estas últimas (ídem). Si en 1960, los ingresos fiscales de Venezuela rondaban los 6.147 millones de bolívares, para 1975 alcanzaban la suma de 40.350 millones de bolívares.

Pronto los países consumidores industrializados se dieron a la tarea de organizarse para tratar de contrarrestar lo que se presentaba para sus economías internas como una crisis producto del alza de los precios. Estas iniciativas buscaban, en general, debilitar la fortaleza de la OPEP, al tiempo que se buscaban fuentes de energías alternativas. Fue así como en 1974, desde una instancia anterior, la Organización para la Cooperación y Desarrollo

Económico (OCDE), se formó la Agencia Internacional de Energía (AIE) (ídem).

Todo este panorama de contradicciones entre países exportadores de petróleo y países consumidores hizo que varias declaraciones del presidente electo, antes de asumir su cargo, tuvieran algunos registros “nacionalistas”. Es probable que estas actitudes, mantenidas además en el transcurso de su presidencia, le sirvieran en algo para lavar la imagen de aquel Ministro del Interior en el gobierno de Rómulo Betancourt, cuestionado por su política de represión implacable contra la izquierda arrojada a los márgenes del Pacto de Punto Fijo.

A propósito de una conferencia organizada por EE.UU ese mismo año, para presionar a los llamados entonces países en desarrollo, puntualizó Pérez:

Esta conferencia pone nuevamente de manifiesto la pretensión totalitaria de los grandes países desarrollados de imponer sus condiciones al mundo en vías de desarrollo. El problema del valor de los precios de la energía y el abastecimiento de los países desarrollados no se puede desvincular del costo de las manufacturas que deben importar los países en desarrollo y de una adecuada tecnología (13 de febrero de 1974).

El 12 de marzo de 1974 fue la toma de posesión del nuevo presidente. Distintos grupos empresariales y algunos gremios publicaron saluciones en la prensa. Es posible que la cantidad de reconocimientos del que había sido objeto el presidente entrante presagiara las relaciones estrechas que su gobierno alcanzaría con los grandes capitales nacionales e internacionales, así como con grupos burgueses emergentes que el propio Pérez y su entorno promovieron.

Su discurso de posesión pronunciado en el entonces Congreso Nacional anunciaba un programa de gobierno ambicioso. Un tema del que ya se venía hablando era la *nacionalización petrolera*, en su momento se le llamaba la *reversión petrolera*. Contemplaba también, entre otras medidas anunciadas, el aumento de los salarios, la elaboración de una política petrolera de defensa de los

precios, liderazgo regional, atención a la agricultura, desarrollo de la pequeña y mediana industria, auditoría a las empresas del Estado. Se trataba de un programa que hacía énfasis en la intervención estatal de la economía.

En ese discurso, publicado íntegro al día siguiente por el diario *El Nacional*, se pueden recoger las ideas con las cuales se iniciaba el tercer gobierno de AD durante la etapa de gobiernos de Punto Fijo. Desde el principio, la política internacional sustentada en los recursos que provenían de la explotación petrolera determinaba las aspiraciones por un liderazgo regional, al tiempo que representaba la oportunidad única de contar con el petróleo como la garantía para el desarrollo industrial y la realización plena de la democracia y la independencia; al menos estos eran los puntos centrales del discurso presidencial. Está de más decir que las muestras de autonomía reveladas a través de su acción de gobierno nunca significaron un desafío a la supremacía norteamericana en la región. No obstante, revela lo condicionado que ha estado al alcance de los liderazgos presidenciales en Venezuela a la suerte de los precios mundiales del crudo:

Venezuela tiene ahora la oportunidad de ofrecer a la América Latina, con el soporte del petróleo, colaboración eficaz para llevar adelante la lucha común por el desarrollo independiente, precios dignos para las materias primas y participación justa y de equilibrio económico en el comercio mundial (...) Vamos a realizar la vieja aspiración de nuestro pueblo de que el petróleo sea venezolano (ibíd., p. 8).

Es claro que el afán de grandeza del nuevo presidente estaba cimentado más que en el empeño político de largo aliento por lograr la independencia en el logro de ciertas condiciones estructurales que escapaban, en parte a las iniciativas de un presidente voluntarista que sólo aprovechaba la coyuntura. Más que un proceso de nacionalización petrolera, entonces lo que estaba planteado era la terminación de unas negociaciones entre el Estado y las empresas extranjeras ya debilitadas por las transformaciones del mercado petrolero a partir del fortalecimiento de la OPEP.

Colocado en la perspectiva de una visión de largo plazo, las tensiones que expresaban Venezuela y su presidente, así como otras naciones petroleras del Tercer Mundo, fueron reducidas a un episodio que no generó alternativas de desarrollo estructural en las áreas marginales del orbe. Es probable que el aumento de los precios del petróleo y sus implicaciones hayan sido incluso previstas y en consecuencia controladas a favor de los intereses de Estados Unidos, entre otras cosas porque el excedente mundial que provenía de los estados productores de petróleo fue canalizado hacia los bancos occidentales, especialmente los norteamericanos. Sin embargo, una parte sin duda quedó controlada por los estados petroleros. En adelante ese dinero fue enviado de vuelta a los países del Tercer Mundo y a los países del bloque soviético en forma de préstamos a esos estados, para que pudieran equilibrar sus presupuestos y continuar en consecuencia importando manufacturas provenientes de los países desarrollados (Wallerstein 2001). Como se sabe, en la década de los ochenta estallaría el conflicto de la deuda externa y Venezuela comenzaría entonces una etapa de desestabilización que terminaría inevitablemente en la crisis de finales de la década de los noventa.

Para el momento que nos ocupa era necesario que Pérez apareciera como el líder de los países en desarrollo que habían logrado, desde los esfuerzos que sellaron la independencia en el siglo XIX, la conclusión de un camino relacionado con la conquista de la autonomía nacional. El país estaba a punto de conquistar la plenitud republicana y podía entonces ayudar a otras naciones a transitar la misma ruta. Hay otras ideas que subyacen en aquellas intervenciones, la geocultura de la modernidad suponía la incorporación a un recorrido universal interiorizado como sentido común, inevitablemente progresivo, mediante el cual todas las naciones y regiones del mundo iban a avanzar hacia la ruta de un bienestar cada vez más general. Lo que impedía que aquella realidad “natural” no terminara de objetivarse era la existencia de unas relaciones internacionales irracionales e inequitativas, cuyas dificultades el país estaba a las puertas de superar a mediados de la década de los setenta. Estas ideas apuntaban a la

creación de una atmósfera de seguridades propias en un tiempo de abundancias. Al menos estas son las conclusiones cuando se examina el discurso de Pérez:

Ahora, por primera vez, se están alineando en nuestro mundo en desarrollo las fuerzas que harán posible que se cumplan estas esperanzas que nacen en lo más profundo de los anhelos que alumbraron la visión de nuestros libertadores (...) Todos los pueblos explotados en sus materias primas y en el esfuerzo mal pagado de su trabajo, maltratada o sojuzgada su soberanía económica, quieren paz que no sea regodeo de privilegiados, para que el desarrollo económico internacional no se reduzca al crecimiento de las grandes naciones (13 de marzo de 1974).

Las señales puestas de presente, en medio del optimismo fatuo con que comenzaba el nuevo gobierno, fueron avistadas por algunos, incluso a lo interno del propio bloque bipartidista. Si bien el discurso oficial prometía reiteradamente que ahora sí era posible la emancipación económica y política, los resultados serían muy distintos. El 15 de marzo, luego de la toma de posesión, comentaba Sanín en su columna «Palco de Sombra»: «El comienzo del nuevo gobierno, por su fasto de corte tropical y la abigarrada concurrencia diplomática, es digno de la Venezuela ennoblecida por el oro negro» (Tarre Murzi, 15 de marzo de 1974).

Una evaluación de las primeras medidas adoptadas, del conjunto de políticas que se emprendieron en su primer año, permite advertir la presencia de un proyecto que fundamentaba sus iniciativas en una bonanza repentina. La economía de extracción mineral permitió financiar unas políticas de protección que subsidiaba una amplia gama de productos del mercado, más baratos ahora que en cualquier mercado dinamizado por una economía menos regulada. Además, como se señalaba en líneas anteriores, la coyuntura internacional de alza de los precios del crudo y la crisis en la economía de los países centrales del sistema capitalista permitió cierta figuración internacional.

De modo que bien pronto el gobierno venezolano tomó la iniciativa de proponer una instancia organizativa hispanoamericana

y del Caribe, con la idea de plantear de forma conjunta problemas regionales y planteamientos varios sobre todo al gobierno de Estados Unidos. El 22 de marzo decretó la congelación de los precios de todos los bienes y servicios, una cantidad notable de productos pasaron a estar protegidos, en términos de su valor, con la idea de ampliar de forma significativa el consumo. El 10 de abril, Pérez participó en la Conferencia Mundial de Materias Primas, evento que instaló la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Allí cuestionó las iniquidades, inmersas en el comercio mundial, que favorecerían sistemáticamente a los países centrales del sistema capitalista (*Diccionario de la Historia de Venezuela*, 1997).

El 15 de ese mismo mes, el gobierno nacional dicta disposiciones tendientes a regular la presencia de las inversiones extranjeras en el país. Por iniciativa del Congreso Nacional, el 30 de mayo de 1974, el Poder Ejecutivo es investido con la capacidad de legislar en una amplia gama de esferas económicas y financieras.

Esta “habilitación” por medio de la cual el Poder Legislativo cede una porción de sus competencias constitucionales fue pausada para un año. Por iniciativa también del presidente Pérez, se crean el Fondo de Desarrollo Agropecuario y el Fondo de Desarrollo Industrial (ídem); instancias que le permitirán al presidente contar con recursos permanentes para llevar adelante proyectos en verdad ambiciosos, pero también inmersos en una atmósfera de fantasía irresponsable. En breve, los escándalos de corrupción apuntarían a sectores encumbrados, producto de su relación estrecha con el poder político. No era sólo Pérez el que incurría en la proyección de planes grandiosos. Una parte importante de la sociedad también alucinaba con la promesa de llegar muy rápido a la industrialización con sólo disponer de la renta petrolera.

En junio el gobierno establece relaciones con la República Popular China en un movimiento diplomático de cierta audacia, sobre todo si se tiene en cuenta que rompe con una línea política que habían tenido los gobiernos de AD, de confrontar a los regímenes comunistas, al tiempo en que se producía una alineación subordinada a los intereses de Estados Unidos. Esto no supuso de ninguna manera la salida de Venezuela de las áreas de influen-

cias del imperio norteamericano. Luego, en agosto, se establecen relaciones diplomáticas con Bulgaria. Un paso importante en el sentido de acercarse a las naciones del bloque socialista fue la reanudación de relaciones diplomáticas, el 29 de diciembre, con la República de Cuba.

También Venezuela aportó US \$ 30 millones para el Fondo de Emergencia de la ONU (ídem). El 10 de septiembre se crea por disposición del Poder Ejecutivo la Fundación Biblioteca Ayacucho, que pronto constituyó una colección de referencia en la tradición de este tipo de iniciativas, encargada de divulgar el pensamiento hispanoamericano.

El 1º de octubre se dispuso el aumento de los impuestos a las empresas petroleras en 3,5%. El 30 de octubre desde el Poder Ejecutivo se dicta una Ley del Banco Central de Venezuela. Por esos mismos días se publicó y se hizo ley el reglamento del puerto libre de la isla de Margarita. Y a pocos días de finalizar el año, el 12 de diciembre en Ciudad Guayana, se reunieron los presidentes de Centroamérica (ídem).

Con todo, el primer gobierno de Pérez se desarrolló en un ambiente de optimismo que permaneció durante algunos años más tarde. La visión que proyectaba la idea del país condenado a la prosperidad y a la riqueza fácil probablemente impidió la conformación de una mirada más crítica que pusiera de presente los peligros que comenzaban a estar latentes y que más adelante contribuirían a socavar las bases del proyecto *puntofijista*. En todo caso esta *prosperidad* igualmente tendrá sus límites. Amplias franjas de la población quedaron excluidas de la danza de los millones. De esto se hablará en la próxima sección.

Democracia con petróleo, la danza de los millones

Algunos analistas sostienen que el primer gobierno de Pérez representó un momento que impactó severamente en el posterior desarrollo del modelo de Punto Fijo. Una de las razones que sostiene con más fuerza esta aseveración es que al país entraron ingentes cantidades de dinero, eso produjo en las instituciones del

Estado y en la propia sociedad, en los sectores más vinculados al poder, la certeza de que el país estaba asistiendo a la expansión de prácticas de corrupción relativamente generalizadas.

El comienzo de esta situación se debe a la transformación sufrida por el Estado central que conllevó, por una parte, a la reorganización de los sectores dominantes asociados al poder. Pero más importante, con las nacionalizaciones de la industria del petróleo y del hierro entre 1975 y 1976, el rol que jugó el Estado se inscribió en un proceso de fortalecimiento de su capacidad de incidir en las variantes impuestas por el imperativo del desarrollo nacional. De esta forma, el Estado, que tenía como función principal el cobro de impuestos por la exportación de productos primarios e industriales, a partir de estos años se convierte en productor de bienes primarios e industriales (Coronil, ob. cit., p. 275).

Era lógico que de esta nueva realidad, que contemplaba la asignación de papeles fundamentales al Estado, su capacidad se haya visto ampliada sobre todo en términos del financiamiento, relacionado en principio con las empresas estatales. A la tarea de ser un actor relevante en los planes de sustitución de importaciones para la época se le asignó el objetivo de crear las bases para el impulso del desarrollo industrial en el marco de un diseño de carácter proteccionista. Se trataba de ensayar un modelo de desarrollo capitalista que contemplara la puesta en escena de una estructura industrial (ibíd., p. 56).

En este sentido, esto supone la promoción, el auspicio y, naturalmente, la protección de las relaciones entre sectores de la burguesía nacional e internacional y el estamento político, es decir, Acción Democrática. Figuras emblemáticas que representaron estos vínculos carnales fueron, como se sabe, Carmelo Lauría, ministro de Fomento, y Pedro Tinoco, conocido hombre de negocios. No se trata de que antes no ocurriera la mutua dependencia entre políticos y sectores de la burguesía, lo que se quiere subrayar es que esta vez estará planteada una *alianza* que devino en formas de complicidad muy claras.

Surgirían de esta forma importantes grupos económicos emergentes amparados por el Estado. Se crearon algunas contra-

dicciones entre esos mismos grupos empresariales, en la medida en que se disputaban el favor de los recursos provenientes del *poderoso* Estado, que a través de “intermediarios” podía disponer de fondos para financiar cualquier tipo de proyectos. Los grupos capitalistas que ascendieron al amparo del gobierno de Pérez intentaron con éxito relativo incursionar en ámbitos distintos al propiamente petrolero, como la producción y venta de cemento, de partes y piezas automotrices, del acero, de la metalmecánica, de los medios de comunicación, etc. Esto provocó el estallido de conflictos internos. Muchos de estos problemas trascendieron a la opinión pública y en alguna medida afectaron la imagen del gobierno. El análisis de varios casos emblemáticos de esta alianza político empresarial es trabajada por Fernando Coronil en su libro *El Estado mágico: naturaleza y dinero en Venezuela*.

Durante el gobierno de Pérez, a la sombra de la espectacular subida de los precios del petróleo, surgieron nuevos nombres que encarnaban la experiencia de la riqueza súbita asociada al poder político. Un ejemplo palmario fue la figura de Cecilia Matos, *la Segunda Dama*, llamada así por su entorno más cercano en referencia directa al tipo de relación que mantuvo con el presidente. Matos, antes de asociarse con el dirigente de AD, había trabajado en el Congreso Nacional de secretaria, provenía de una familia humilde de Valera, estado Trujillo. En todo caso, se fue instituyendo como la mediadora entre los sectores políticos, los empresarios, miembros del gabinete presidencial, medios de comunicación y el propio Presidente de la República.

Las pautas de conducta manejadas por estos sectores emergentes y su desdén por las formas más convencionales del trato entre las élites ya establecidas revelaban una cultura que desafiaba tales procedimientos de clase, al tiempo que querían expresar un poder sin límites aparentes. Sin embargo, el despliegue de estas formas de proceder en el propio campo de las élites, los ponía al descubierto en una posición que acaso ellos se esforzaban inútilmente por ocultar: su condición vergonzante de “nuevos ricos”. Aquí tener dinero se traducía, digamos, en una voluntad de “transgresión social”: «La informalidad era en parte expresión

del poder. Y lo que es más importante, era su forma social necesaria, coherente con la naturaleza que se expresaba a través de ella. Tener poder significaba poseer la capacidad para romper y redefinir las reglas» (ídem).

El lujo que detentaban era también una señal que proyectaba al resto de la sociedad cierta temeridad hecha “virtud” para este sector de reciente encumbramiento. Pretendían legitimarse a fuerza de reclamarse como el auténtico sentido común. Eran, así, gente que sí sabía operar de la única forma válida en un país que se presentaba como imprevistamente rico, feliz, desvergonzadamente efímero y “liberal democrático”.

La “nacionalización” petrolera, disimulos, rendijas y paradojas

El año en que se instaló el gobierno de Pérez ya había una opinión favorable dentro del ámbito de las fuerzas políticas con alguna representación en el Congreso, por lo pertinente que aparecía el planteamiento de la nacionalización de la industria petrolera. En una de las primeras sesiones del parlamento, el MEP presentó para la consideración del foro un proyecto de ley que abordaba la materia. En ese primer trimestre del año se creó una comisión denominada Comisión Presidencial de Reversión, la cual tenía la tarea de elaborar un informe que examinase el estado de la cuestión. La comisión estuvo integrada por expertos en la materia. Muchos de estos nombres luego serán decisivos en el diseño de la política petrolera, cuando el Estado recobre su papel protagonista después de las reformas neoliberales de los años noventa.

Algunos integrantes de la Comisión Presidencial de Reversión eran: Gastón Parra Luzardo, Álvaro Silva Calderón, Domingo Felipe Maza Zavala, Freddy Muñoz, Celestino Armas, Reinaldo Cervini, Rafael Tudela. En diciembre de 1974 le fueron presentados los resultados de las discusiones al Presidente. La idea de la *nacionalización* era precisamente adelantarse a la reversión de 80% de las concesiones que vencerían entre 1983 y 1984; el resto vencería en 1996 y 1997. Luego de varias revisiones al proyec-

to de ley, el Poder Ejecutivo decidió introducir un artículo que generó discordia, primero entre los especialistas en la materia y más adelante entre algunos dirigentes políticos. Se trataba del artículo 5º, que establecía puntualmente:

En casos especiales y cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional o los referidos entes podrán, en ejercicio de cualquiera de las señaladas actividades, celebrar convenios de asociación con entes privados, con una participación tal que garantice el control por parte del Estado y con una duración determinada (Lander 2006, p. 103).

Esto trajo consecuencias que en su momento fueron puestas sobre el debate en los distintos espacios públicos donde se planteó la controversia sobre la nacionalización de la industria. Se llegó a sostener que el documento resultaba un obstáculo en la defensa de la soberanía nacional en cuanto que aceptaba la suscripción de “convenios de asociación” con el capital privado internacional, lo que podía en un futuro condicionar el alcance de un desarrollo nacional independiente. No es el caso reproducir aquí lo debatido en aquellos años, basta con señalar como prueba del pobre apoyo que recibió la iniciativa entre las fuerzas que hacían vida en el parlamento, el hecho de que sólo Acción Democrática y la Cruzada Cívica Nacionalista votaron favorablemente el 21 de agosto de 1975, la Ley Orgánica que reserva al Estado, la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. El 29 del mismo mes el Presidente firmó el ejecútese. El polémico artículo 5º quedaba redactado de esta forma:

El Estado ejercerá las actividades señaladas en el artículo 1º de la presente Ley directamente por Ejecutivo Nacional o por medio de entes de su propiedad, pudiendo celebrar los convenios operativos necesarios para la mejor realización de sus funciones, sin que en ningún caso estas gestiones afecten la esencia misma de las actividades atribuidas.

En casos especiales y cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional o los referidos entes podrán, en el ejercicio

de cualquiera de las señaladas actividades, celebrar convenios de asociación con entes privados, con una participación tal que garantice el control por parte del Estado y con una duración determinada. Para la celebración de tales convenios se requerirá la previa autorización de las cámaras en sesión conjunta, dentro de las condiciones que fijen, una vez que hayan sido debidamente informadas por el Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias pertinentes (Ley Orgánica que reserva al Estado, la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos 1975).

Fue a partir de interpretaciones del artículo 5° cuando se llevó adelante, durante el segundo gobierno de Caldera (1994-1999), la llamada Apertura Petrolera. Esta iniciativa representó en su momento una regresión en la legislación y en la política de protección de la industria que había defendido el Estado. Resulta paradójico que quien en su momento cuestionó de forma reiterada la introducción del artículo 5° haya sido el entonces senador vitalicio Rafael Caldera, el mismo que aprovechándose de esa “rendija”, como él mismo calificó ese artículo al momento de discutirse la Ley de Reversión, adelantó la Apertura Petrolera en el transcurso de su segundo gobierno.

En su discurso en las instalaciones del Congreso con motivo del ejecútase, puesto a la Ley Orgánica en 1975, el presidente Pérez no desaprovechó la oportunidad para erigirse como el campeón de los pueblos del Tercer Mundo en su aspiración por materializar más independencia efectiva. No obstante, Pérez se cuidaba de darle a sus palabras un contenido político más trascendental, específicamente en términos de propiciar un proceso de carácter antiimperialista, esto ni siquiera se avizoraba en la perspectiva de los regímenes de Punto Fijo. Prefería hablar entonces de “totalitarismo económico” como si el problema de la dependencia de los países que se ubican en la periferia del sistema capitalista mundial se redujera sólo al ámbito de la economía, vista precisamente como un ámbito de la realidad sin relaciones determinantes con otras esferas de la vida. Esta vía “moderada” escogida, la calificaba Pérez como *serena responsabilidad*:

La Nación entera comparte este gran momento. Como jefe del Estado soy el afortunado intérprete y ejecutor de esta voluntad de todo el pueblo de Venezuela. América Latina y todos los países víctimas del totalitarismo económico de las grandes naciones industrializadas, nos acompañan y celebran con nosotros este paso de audacia y serena responsabilidad. Porque está enmarcado dentro de la coyuntura histórica de las reivindicaciones fundamentales del Tercer Mundo (1975).

Sin embargo, estaba fuera de dudas que el régimen de Punto Fijo utilizaba la ocasión sobre la reversión de la industria petrolera a manos del Estado como el acontecimiento que terminaba un proceso de largo aliento, que tenía que ver con la realización plena de la nacionalidad. Esto trajo efectos políticos que redundaron en una legitimidad mayor del orden vigente, que se solidificaba aún más cuando se tiene en cuenta que las formulaciones alternativas desde las izquierdas permanecían en un estado de desorientación, producto fundamentalmente de la derrota militar de los proyectos insurgentes.

En todo caso, el mismo desarrollo de la democracia en Venezuela siempre tuvo como condición, al menos para las organizaciones políticas fundamentales, dos aspectos asentados en sus historias: el primero era la aspiración del manejo independiente del recurso petrolero, y el segundo, su distribución *democrática*. Claro que frente al acontecimiento de la nacionalización se producían *interpretaciones de la realidad* que nada tenían que ver con lo que en efecto estaba sucediendo. Aseguraba Pérez: «Hemos renunciado a vivir de la fácil riqueza a que nos había acostumbrado el facilismo petrolero» (ídem).

Pero más allá de las celebraciones protocolares, el proceso que revertía la industria petrolera a manos del Estado, estaba plagado de vicios que desde un principio fueron denunciados. Sostienen algunos críticos que lo ocurrido con la promulgación, en 1975, de la Ley Orgánica que reserva al Estado, la Industria y el Comercio de Hidrocarburos –sobre todo el hecho puntual de adelantar la fase de reversión, en principio pautada para 1983–,

permitió la consumación de un proceso de nacionalización más bien frustrado. Entre otras cosas porque extendió la presencia transnacional en la industria petrolera al área sedimentaria del país que hasta ese momento constituía la reserva nacional venezolana más allá del ámbito de la concesión (Mendoza 2006). El otro señalamiento tiene que ver con la permanencia de una burocracia petrolera cuya conformación provenía de los tiempos previos a la reversión de 1976, y que frente al proceso de “nacionalización” sencillamente se acomodó, pero mantuvo en todo momento su condición de agente empresarial y, en consecuencia, conservó sus lealtades intactas hacia las transnacionales.

El proceso que se materializó el 1° de enero de 1976 conservó en mucho el tipo de relación subordinada entre la naciente empresa petrolera (Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA) y las ex concesionarias. Los intermediarios, como siempre, fueron funcionarios políticos que habían comprometido a la República en negocios que se efectuaron en nombre de una transición modelica y “racional”, según el experto petrolero Mendoza Potellá:

Estos contratos abarcaban a toda la producción, refinación y mercadeo de crudo y productos venezolanos, constituyeron el modelo inicial de lo que sería la base de un nuevo, deletéreo, inasible, ubicuo y eficaz sistema de mantenimiento de las relaciones dependientes del Estado venezolano con el capital transnacional (ibíd., p. 191).

Antes de la nacionalización, debido a presiones que provenían de instancias políticas locales, las concesionarias extranjeras ya contaban con personal venezolano, de manera que una vez que ocurre la nacionalización pasan a formar parte de la nómina de PDVSA. Para aquel entonces, las tres grandes concesionarias extranjeras establecidas en el país eran: Exxon, Shell y Gulf (Mommer 2003). La aceptación de la nacionalización por parte de la burocracia petrolera supuso entonces la tarea de controlar las instancias de decisión de PDVSA y comenzar una tarea de largo aliento, que tenía como objetivo alejar a la empresa del control que sobre ella debía tener el Ministerio de Energía y

Minas. Desde un principio era claro que la labor del alto funcionariado de Petróleos de Venezuela no era la maximización de los ingresos fiscales.

Luego del fracaso de la *Gran Venezuela* del primer gobierno de Pérez, y su promesa fundamental, la industrialización del país, financiada con dineros de la renta petrolera, la gerencia de PDVSA intentó con éxito limitar progresivamente sus propios ingresos fiscales. La lógica con que justificaban sus intenciones era aquella según la cual la recaudación de ingentes cantidades de recursos a manos de los políticos, invariablemente iba a generar despilfarros, corrupción e ineficiencia. Se trataba, por el contrario, de fortalecer el desarrollo del sector petrolero en términos de maximizar sus volúmenes, el flujo de caja y las ventas, sin que esto representase ganancias considerables al fisco nacional (ibíd., p. 65).

El resultado de este proceso de debilitamiento de la incidencia del Estado en PDVSA empalmó bien con el ambiente cultural neoliberal que cundió con fuerza en el país en los años noventa. En este aspecto, el caldo de cultivo debían ser los errores cometidos por la formación de un petro-Estado irresponsable e ineficiente. Urgía entonces la implementación de reformas que acometieran la tarea de racionalizar la vida para buscar un desarrollo “realista”.

Otros sectores colocados en las antípodas del sistema político venezolano de entonces también vieron con reservas el proceso de reversión. Un documento emitido por el Comité Central del Partido de la Revolución Venezolana (PRV) y la guerrilla de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) abunda sobre tópicos relativos a la coyuntura de la nacionalización. En principio, según el documento, la ley de reversión que fue presentada al Congreso es producto de algunas contradicciones que habitan entre los grupos de la burguesía nacional, sus organizaciones, sus partidos políticos, los cuales tenían representación en el Congreso, y el imperialismo, representado en las empresas petroleras extranjeras. Las diferencias se ventilan desde el momento en que los representantes de empresas petroleras atacan la iniciativa

legislativa como ilegal, anticonstitucional, “expropiatoria”, y que contrariaba la Ley de Hidrocarburos vigente para el momento.

Sostuvieron esas organizaciones, si bien se trata de un argumento demasiado general, que la burguesía nacional y sus representantes en el Congreso necesitan incrementar los recursos petroleros de forma tal que les permita financiar sus inversiones y el mantenimiento del poder interno. El Comité Central del PRV y las FALN tomaron posición ante el proceso de reversión petrolera en el país:

Se trata ahora de aumentar en forma indirecta la renta del suelo, formada por la regalía, los llamados “impuestos superficiales” y ventajas como la reversión de ciertas inversiones que las clases explotadoras toman para sí. Como cada uno de esos partidos tiene una representación mayor o menor en los órganos del aparato del Estado, y todos tienen aspiraciones de triunfo en los venideros procesos electorales, los intereses de esas clases explotadoras y de los partidos políticos que representan sus intereses coinciden en la necesidad de aprobar el instrumento legal. Por eso se explica que haya unanimidad con diferencias sólo de detalles⁶.

Acusaban a la burguesía de querer *apropiarse* de la industria petrolera y de sus empresas “satélite” como la petroquímica o la siderúrgica, que transitarían a manos privadas para entonces poder establecer negocios directamente con el capital internacional.

Pero la burguesía pretende dar el salto final. Se prepara para que la industria petrolera, hoy en actividad, al pasar a manos del Estado, sea entregada a la burguesía para asociarse nuevamente con el imperialismo bajo la forma de empresas mixtas y consolidar así en sus manos el imperio industrial venezolano (idem). Llama la atención el alcance de miras que el PRV le otorgaba a los sectores de la burguesía nacional.

6 Estos documentos están recopilados y resguardados en la Dirección de Investigación y Asesoría Histórica de la Asamblea Nacional.

Desconcierto y deslinde en la izquierda

Las perspectivas para las formaciones de izquierdas durante el gobierno de Pérez (1974-1979) no eran muy alentadoras. En particular, la izquierda venezolana venía de ensayar el camino de las armas para llegar al poder y transformar el país durante los años sesenta, pero el Partido Comunista de Venezuela (PCV), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), así como sus expresiones armadas habían sido debilitadas militarmente de manera severa, de forma que el grueso de sus cuadros y dirigentes desistieron durante un tiempo de propiciar la insurrección. Sólo persistían en esa idea algunas agrupaciones como el Partido de la Revolución Venezolana (PRV). Este escenario signado por dificultades para la izquierda no implicaba que el gobierno de AD y los aparatos de inteligencia se trazaran una política distinta o menos represiva, sobre todo con Pérez como presidente. En este contexto, el 25 de julio de 1976, luego de someterlo a diversas formas de tortura en las instalaciones de la policía política (Disip), fue asesinado el secretario general de la Liga Socialista, Jorge Rodríguez.

Era claro, además, que las políticas sociales de los gobiernos de Punto Fijo para el momento contaban con el apoyo de unas mayorías entusiasmadas, en parte, producto de la distribución petrolera que permitía experimentar ciertos niveles de bienestar social. En todo caso, los sectores que podrían ser refractarios a las políticas del gobierno de Pérez, como los sindicatos o una parte de estas formaciones, estaban dominados por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), una instancia organizativa con mayoría de miembros adscritos a Acción Democrática.

A mediados de 1974, el dirigente izquierdista Alfredo Manero tomaba nota de un país que se reunía y se sentía representado en AD:

Desde 1958 no se veía algo igual. Con exclusión de los ex gobernantes de entonces y de ahora, una complicidad, satisfacción y risueña unanimidad, ilustra la reconciliación entusiasta del país político. Toda la unidad que ayer logró la constitucionalidad, hoy se repite conmovedoramente con el presupuesto. De

la unidad en el espíritu del 23 de Enero a la unidad en los 45 millones. Sindicalistas y empresarios; nacionalizadores, socializadores, revertores [sic], indemnizadores... y ejecutivos de la Creole, ejecutivos de la Shell, ejecutivos de la Mobil; mayorías y minorías parlamentarias; gobernadores y gobernados; policías y detenidos; cobradores y deudores; iletrados y funcionarios del Inciba: todo el país político unido y unánime funciona a coro (1980a, p. 155).

Más aún, fuera del país, tampoco las cosas estaban muy claras para las izquierdas en general. Luego de la captura y posterior muerte del Che Guevara en Bolivia en octubre de 1967, la teoría del foco y las prácticas vanguardistas recibirían algunos reveses que permitían, en todo caso, sostener una evaluación pesimista sobre la idea de alcanzar en breve la liberación nacional y el socialismo a través de la guerra.

El Chile de la Unidad Popular, que había representado una forma peculiar de ensayar el camino al socialismo a través de las vías legales y constitucionales, fue liquidado, producto de un golpe militar el 11 de septiembre de 1973, apoyado por las capas medias chilenas, el empresariado, la Iglesia católica, los partidos de centro y de derecha, y el gobierno de Estados Unidos. Las confrontaciones entre los modelos chino y soviético daban cuenta de las tensiones internas en un mundo que se presentaba, ya con menos autoridad, como la alternativa a los rigores del capitalismo.

El modelo de Estado y de sociedad construido en la Unión Soviética así como en sus países de influencia, era cada vez más cuestionado desde las diversas corrientes que alentaban el cambio social. Ya para el momento, las formaciones nacionales inspiradas en los preceptos soviéticos ofrecían una versión de la revolución poco atractiva y altamente burocrática. Estas tradiciones presentaban una fusión partido-estado, que ahogaba los impulsos del contenido libertario de un socialismo *realmente postergado*. Pero además, estaba claro que el socialismo burocrático no aceptaba otros experimentos en su área de influencia: en 1968 los tanques del Pacto de Varsovia entraban a Checoslovaquia

para terminar con el proceso de renovación socialista que estaba presenciando aquel país.

Ya lo testimoniaban, además de las formulaciones hechas desde el campo propiamente intelectual, algunos movimientos contestatarios como el Mayo Francés de 1968 y el resto de los movimientos antisistémicos formados en circunstancias similares. Los discursos señalaban especialmente las desviaciones no sólo del capitalismo liberal, sino del socialismo burocrático. Estas tradiciones, el marxismo más ortodoxo y la democracia liberal burguesa, junto con el conservatismo, según algunos críticos intelectuales, convergían entonces en ser parte del gran legado de liberalismo que provenía particularmente de la Revolución Francesa, para constituirse como la ideología del sistema capitalista mundial (Wallerstein 2001).

Para volver a la coyuntura ofrecida desde finales de los años sesenta y la década de los setenta, tendencias luego identificadas con el eurocomunismo intentaban marchar hacia el socialismo, pero mostraban al mismo tiempo respeto hacia las formas liberales en sus contenidos programáticos, en su acción política y en sus discursos. En general, partían de la consideración de revalorizar el principio del pluralismo, al tiempo que creían en las vías pacíficas de transformación social. Argumentaban la necesidad de relacionarse de una forma distinta con los sindicatos. Buena parte de estas tendencias, lamentablemente, terminarían su capacidad inventiva en las aguas más apacibles de la socialdemocracia. Una conclusión algo sombría, visto el desarrollo de los movimientos revolucionarios en su conjunto, es aquella según la cual en la perspectiva de la larga duración, todos terminaron sirviendo como actores funcionales a la continuidad cambiante del sistema capitalista mundial.

Las líneas que siguen abordan específicamente el experimento del MAS, dado que varios de sus planteamientos expresaron en su momento alguna novedad en una época en que el país favorecía políticamente de forma clara las orientaciones que se hacían desde el establecimiento bipartidista, particularmente desde Acción Democrática.

Inventamos... y erramos

El título que encabeza esta idea merece alguna aclaratoria. No se trata de desmerecer las reflexiones que produjo la izquierda aún golpeada por el fracaso de los ensayos insurreccionales de los años sesenta, por el contrario, desde la perspectiva de la imaginación puesta al servicio del cambio social, que coincide con el aparente momento cumbre del modelo puntofijista, las innovaciones son dignas de destacar. Lo que trata de rescatar el título es que, paradójicamente para aquellos momentos, la actuación de la izquierda, desde el punto de vista de sus resultados electorales, fue de un fiasco indiscutible. Esto, sólo en el estrecho o polémico sentido según el cual llegar o no llegar al poder político, marca la diferencia entre conquistar la victoria o merecer la vergüenza. Pero en todo caso, la intención de estas líneas no es relatar las peripecias de quienes gobernaron este período de la historia, sino de ofrecer un punto de vista más amplio que también incluya a quienes estaban por voluntad propia al margen de los acomodos que se producían entre los sectores que participaban del régimen puntofijista.

En Venezuela, más allá del terreno ganado por AD en el gobierno de Pérez, la izquierda venía arrastrando contradicciones y molestias internas, particularmente generadas en algunos sectores del PCV. Estas discusiones se hicieron más públicas una vez que se evaluaron los pobres resultados que obtuvo el partido en 1968 con la participación electoral de su instancia legal la Unión para Avanzar (UPA). En ese proceso había ganado la presidencia por poco margen el candidato socialcristiano Rafael Caldera.

Los debates planteados en este período se concentraban en la viabilidad del socialismo, en el contenido específico de ese socialismo y en la sociedad que iba a servirle de contexto. En los errores emprendidos, una porción de los comunistas alegaba que una parte de la dirección del partido nunca estuvo convencida de la pertinencia de la guerra. A su vez, muchos camaradas mantenían que la práctica puesta en la formación de guerrillas urbanas y rurales para el combate contra una democracia que apenas estaba naciendo, si bien constituyó un episodio digno de

resaltar, por la entrega y la mística mostrada al principio de las confrontaciones, había hecho que el partido transitara por un camino demasiado costoso. Al final, militarmente derrotado, el partido se mostraba debilitado y aislado de las masas, precisamente una organización que había contado con un enorme prestigio popular y que eventualmente estaba, antes del abismo de la lucha armada, con posibilidades, acaso históricamente irrepetibles de asumir el poder⁷.

En todo caso, como muchas veces ocurre, es desde el desarraigo y la incertidumbre, los enfrentamientos internos, las acusaciones mutuas, las delaciones, la evidencia de un descalabro más trascendental que perder propiamente una oportunidad, cuando se producen reflexiones políticas importantes. Aunque este conjunto de reflexiones no culminaron en breve en la toma del poder ni en la transformación revolucionaria de la sociedad venezolana, sí constituyen un patrimonio poco valorado y en espera de estudios más sistemáticos y distanciados.

Resulta especialmente interesante el debate sobre el tipo de organización que se quería edificar, como la instancia organizativa por medio de la cual se llegaría al poder a la cabeza de un proceso revolucionario, o con el compromiso de impulsar un conjunto de reformas que se acercarían entonces a un diseño de sociedad propiamente socialista. Para ese momento, y particularmente en la década de los setenta, las distintas revisiones partían de considerar al partido comunista como incapaz de viabilizar una revolución.

En palabras de Alfredo Maneiro en entrevista hecha por Iván Loscher en «Escrito con la izquierda», para referirse al contexto político que dio origen a los experimentos de La Causa R y del MAS:

7 Para un análisis de la postura crítica que años después asumiría un dirigente histórico del partido, véase Alonso Ojeda (1999). Otra perspectiva la ofrece el historiador Óscar Battaglini (2011), sobre la lucha armada como parte de una evaluación más amplia del período de la democracia representativa.

Era la hora del descongelamiento y los partidos comunistas fueron sentados en el banquillo de los acusados; se le pasó una hoja de fiscalía al militante comunista, a su sentido, a la disciplina, a la verticalidad, al espíritu de secta, al partido como lugar de iniciados, y ese ingrediente no dejó de estar presente en la problemática de nuestro partido (1980b, p. 172).

Quienes propiciaron esos deslindes para alejarse del partido que los había cobijado, se definían, en la mayoría de los casos, como más marxistas que los integrantes del PCV. Para comandantes guerrilleros como Douglas Bravo, entrevistado en 1969, los comunistas estaban inmersos en un lamentable proceso de acercamiento a los enemigos representados por AD y Copei. Reclamaba entonces para su movimiento la condición de ser en verdad marxista-leninista; en consecuencia partía de la consideración de que su acción política era revolucionaria. Pero contrariamente, uno de los señalamientos era que la estructura del PCV, precisamente uno de los pilares donde descansa su carácter leninista, era inoperante para adelantar un proceso revolucionario. En todo caso, tampoco su organización planteó una estructura distinta a la leninista. Uno de los puntos que llama la atención de la entrevista, sobre todo porque décadas más tarde esta postura tuvo incidencia en otros ámbitos como en las entonces Fuerzas Armadas, era que su movimiento insurreccional se declaraba bolivariano:

En primer lugar, tenemos diferencias de carácter ideológico y de ellas parten el resto de las diferencias. Nosotros somos marxistas-leninistas y ellos no lo son. En segundo lugar, somos marxistas-leninistas-bolivarianos, es decir, compartimos plenamente la esencia de la filosofía política de Simón Bolívar, expresada en sus documentos y ejecutada en una práctica de veinte años en la época de lucha de la Liberación de América Latina contra la Colonia Española (*Revista de Revistas* 1969, s/p).

La palabra “bolivariano” la desagregaba Bravo sobre todo en el sentido internacionalista que le daba al término. Es decir, la

concepción bolivariana se definía mejor como una lucha continental, tal como lo habría planteado Bolívar, luego de considerar la existencia de profundas relaciones de interdependencias entre los nacientes proyectos nacionales latinoamericanos. Desde esta perspectiva, en las evaluaciones que se hagan de los procesos revolucionarios, habría que entenderlos como fenómenos que transcendían los marcos nacionales. En consecuencia, la revolución era continental y más globalmente estaba enmarcada y determinada por los peculiares escenarios del Tercer Mundo.

Al mismo tiempo, asumir una posición *bolivariana* consistía también en revalorizar las condiciones específicas de las sociedades latinoamericanas, especialmente frente a los países ya constituidos del bloque socialista, que aunque aportaban experiencias aprovechables desde el punto de vista político, debían entonces primar las condiciones locales en que se desarrollaba la lucha. Esto, claramente implicaba que los movimientos de liberación nacional no podían subordinarse a los intereses de estas naciones. Luego de reconocer los méritos de rigor a la URSS, declaraba en forma tajante:

Pero la URSS que clasifica a nuestros movimientos de liberación de aventureros, la URSS que ignora al Comandante Ernesto “Che” Guevara, la URSS que interviene en Checoslovaquia, la URSS que entra en la coexistencia pacífica con el imperialismo, la URSS revisionista, está completamente distanciada de nosotros (ídem).

Las contradicciones que se formulaban en el campo popular provenían de errores internos que se cometieron durante los años de la violencia revolucionaria. Pero de igual modo las tensiones entre las zonas “centrales” del campo socialista y los movimientos de liberación nacional del Tercer Mundo conservaban un nivel importante de incidencia en los procesos de la izquierda venezolana. Un caso de estudio que sirve para evaluar la situación general del progresismo lo constituye la fundación y las primeras iniciativas del MAS.

El instante del Movimiento al Socialismo (MAS)

Si bien el MAS fue fundado en 1971, su proyección histórica se escenifica en los años posteriores, sobre todo a los fines del aporte hacia la conformación de alternativas políticas originales, este partido vio sus mejores años, digamos, en la década del setenta y parte de los ochenta. Antes de que sucumbieran a la seducción socialdemócrata, los masistas desafiaron algunos de los esquemas convencionales de la izquierda venezolana⁸.

En primer lugar, esta organización nace del seno del movimiento comunista, es así como a su nombre conocido se le agregaba el de “Nueva Fuerza Comunista”. Probablemente, el apelativo “comunista” tenía que ver además con la necesidad de garantizarle la permanencia en las relaciones del partido con otras formaciones que bebían de las tradiciones comunistas en el ámbito internacional. Aunque los historiadores masistas, y en general el liderazgo del partido, han negado con cierta insistencia algunas de sus más importantes raíces históricas. Lo cierto es que el MAS fue la expresión de una época de búsquedas políticas e ideológicas que se correspondían deficientemente con sus muy pobres resultados electorales, al menos hasta la implementación del proceso de descentralización al principio de la década de los noventa. Pero para ese momento del novel MAS que se analiza acá quedaba muy poco.

Por otra parte, este fue un movimiento que en sus comienzos estaba integrado por cuadros que provenían de las capas medias, de la pequeña burguesía en algunos casos universitaria. Su visión estaba permeada por la experiencia que muchos jóvenes, entonces en el PCV, pero “exiliados” en Europa, habían tenido sobre algunos partidos comunistas que ensayaban lo que se llamaba para el momento: *eurocomunismo* (Ellner 1992).

Aún en enero de 1978, en una entrevista realizada para la revista *Momento*, Teodoro Petkoff, líder fundador del MAS, regis-

8 Para una revisión sobre la historia de esta organización, véase Moleiro 1993, Petkoff 1976, Giordani 1992 y Ellner 1992.

traba la “simpatía” que dentro de las filas del partido se observaba hacia las organizaciones europeas que se inclinaban por corrientes eurocomunistas:

El socialismo en Francia, Italia, Alemania, en España, en Inglaterra, obviamente no puede reproducir el modelo soviético. Con todo esto que te he dicho quiero decir que si nos separan unas ocho mil millas de Océano Atlántico nos vincula una común preocupación por responder de manera autónoma y nacional a los desafíos que nos plantea la especificidad de cada país. Nosotros frente al eurocomunismo tenemos un criterio de simpatía, aunque con relación a cualquier otro centro mundial de poder no nos sentimos subordinados (1978, p. 16).

En general, compartían algunos acuerdos básicos como el respeto o la preservación de las libertades que habían conquistado las democracias liberales y el cuestionamiento hacia las vanguardias “iluminadas”. Participaban, en consecuencia, de un camino gradualista para ocupar el poder, al tiempo que se alejaban de la inevitabilidad de una revolución necesariamente violenta. Para ellos el socialismo era el objetivo final de un proceso de aprendizaje popular en que las mayorías toman conciencia de su propio poder para la participación popular. Como se puede ver, el programa así expuesto se encuentra cercano a las primeras formulaciones socialdemócratas expuestas al final del siglo XIX.

Al mismo tiempo, al contrario de los comunistas, los masistas verán la potencialidad revolucionaria también en otras clases distintas al sujeto previamente escogido, el proletariado industrial. El MAS pensaba que la contribución de los pequeños empresarios podría ser crucial. Como se ve, algunas de estas propuestas estaban inscritas en una lectura relativa al capitalismo venezolano como suficientemente desarrollado y susceptible en consecuencia de transitar formas superiores de democracia; esto era para el MAS, socialismo.

Llama la atención esta premisa según la cual Venezuela podía estar preparada para el socialismo, cuando las lecturas más convencionales veían la evolución hacia un sistema más igualitario

como parte de un proceso que involucraba el anterior desarrollo de las fuerzas productivas, el fortalecimiento de la clase proletaria reunida en un partido, y el incremento de la conciencia de las mayorías. Algunos críticos de esta postura, como Alfredo Maneiro, sostuvieron que el MAS, sus dirigentes, habían vaciado la palabra socialismo de su contenido radical como la condición previa para, de un momento a otro, producto de un acto supremamente voluntarista, llegar a esa forma superior de democracia.

Esta concepción optimista que sostiene la viabilidad del socialismo como una posibilidad incluso a través del voto popular, tenía algunas implicaciones que en su momento hicieron parte del debate sobre las vías que se debían emplear para materializar la revolución. Mientras algunas posturas más o menos clásicas tendían a separar las luchas antiimperialistas, como una fase en que participarían amplios sectores de la sociedad, la lucha por el socialismo debía suponer una fase más adelante. Si bien los programas antiimperialistas podían recoger algunos objetivos propios del socialismo, se trataba fundamentalmente de momentos distintos. El MAS, por el contrario, mantenía que esas fases podían combinarse para hacer parte de un solo programa.

Estas líneas de acción que incorporaban algunos argumentos teóricos para la Venezuela de los años setenta no eran ya claramente separables. En las elecciones de 1973, el MAS tomó la determinación de no ensayar ninguna alianza con partidos de izquierda que tuvieran una concepción “etapista” de la revolución. Pero para ese momento, según Ellner (1992), formaciones revolucionarias como el PCV habían abandonado la idea de la gestación de una burguesía nacional que lograría una revolución democrático-burguesa como lapso anterior para logros históricos posteriores más ambiciosos. En parte, porque para el momento se tenía en cuenta que sectores de la burguesía estaban plenamente interrelacionados con el capital trasnacional. En consecuencia, la idea de lograr que la burguesía impulsara un modelo de industrialización en los marcos de un nacionalismo progresista ya no era posible. Estos hechos dejaban ver a los masistas como una organización bastante sectaria. El núcleo de su propuesta era al mismo tiempo temerario y bastante ingenuo,

visto a la luz del tiempo. La conquista del socialismo se propiciaba utilizando las herramientas que ofrecían las democracias liberales, como el parlamento, al tiempo en que se iban a propiciar varias experiencias de organización popular que progresivamente iban a desafiar las lógicas política y culturalmente hegemónicas del capitalismo.

Las elecciones presidenciales de 1973, la participación del MAS

Para las elecciones de 1973, la izquierda fue con dos candidaturas. El Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) propuso a Jesús Paz Galarraga. Esta propuesta fue secundada por el PCV. Por su parte, la alianza entre el MAS y el MIR presentó como su opción presidencial al periodista José Vicente Rangel, defensor de los derechos humanos. Rangel había militado con anterioridad en URD.

Inicialmente la plataforma electoral que la izquierda más moderada se había dispuesto a presentar estaba integrada por el MEP, URD y la Fuerza Democrática Popular (FDP), luego por diferencias internas URD se iría de la coalición y se incorporó el PCV.

La aparición de esta plataforma electoral, la *Nueva Fuerza*, estuvo signada por el discurso de la unidad de las formaciones progresistas cuyos planteamientos estaban ideológicamente cercanos a los experimentos unitarios que se estaban probando en Chile y Uruguay. La unidad de las izquierdas reunidas en torno a un programa socialista democrático fue una buena noticia para quienes intentaban impulsar reformas a través de vías pacíficas. También se materializaba en un período donde la frustración por el camino escogido de la insurrección estaba presente.

Varios dilemas se le presentaban al MAS en medio de esta coyuntura. El primero lo expresaba la necesidad de constituirse en una referencia para las fuerzas del cambio. La joven organización debía estar dispuesta a divulgar nacionalmente su mensaje y su programa político. En estas circunstancias, tomar parte entonces de la alianza de la *Nueva Fuerza* como una organización más,

representaba cierto peligro en cuanto que podía verse absorbida por las organizaciones de mayor trayectoria que ahí participaban.

Los masistas sostuvieron en su momento que las coaliciones como la representada por la *Nueva Fuerza* les conducirían inevitablemente al *reformismo*, entre otras cosas porque la unidad de esos partidos estaba signada por lógicas electorales que limitaban el alcance y el contenido de las reformas. En cambio, el Movimiento al Socialismo, de llegar al poder, estaría en condiciones de llevar adelante su programa socialista⁹. Aunque este último argumento era más bien débil, durante la campaña electoral la *Nueva Fuerza* propuso medidas que iban más allá de soluciones reformistas.

La presencia de la *Nueva Fuerza* en la campaña electoral de 1973 exigió a los masistas la articulación de un discurso pretendidamente anticapitalista, que se esforzaba por presentarse como la alternativa definitiva para trascender la democracia liberal. Incluso, en varios de sus discursos y declaraciones, así como en el propio programa del partido, se dejaba ver la eventual conquista del socialismo una vez que el MAS se posesiona del poder.

El partido veía el agotamiento del proceso de industrialización, el cual había estado severamente condicionado por su carácter de desarrollo dependiente de las fuerzas capitalistas. En el programa que ofrecieron a la sociedad hacen un diagnóstico que ilustra esa condición de país sujeto a la “dominación capitalista”:

El orden social dentro del cual vivimos hoy los venezolanos ya lo hemos definido como el de la dominación de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros en todas las esferas de la vida, y a ese fin concurren todas las reglas de su funcionamiento.

Dueños de los medios fundamentales de producción, los grandes millonarios explotan y dominan a la inmensa mayoría de Venezuela, viven del trabajo de ésta, se apropian de la mayor parte

9 *Hacia una victoria del Socialismo. Programa de Gobierno 1973*. Estos documentos están recopilados y resguardados en la Dirección de Investigación y Asesoría Histórica de la Asamblea Nacional.

de la riqueza que ella crea y que la naturaleza encierra (...) En el plano internacional, la llamada “democracia representativa” no es sino un gigantesco mecanismo para mantener como dueños del poder político a quienes son dueños de la economía, concediéndole al pueblo el “derecho” a elegir cada cinco años cuáles representantes de los poderosos lo van a gobernar (ibíd, p. 31).

Frente a la fabricación de una sociedad poscapitalista, el programa colocaba esa posibilidad no tanto en la maduración de las fuerzas productivas, más allá del fin de los tiempos, tampoco en la inevitabilidad de la revolución. Esta era una tarea que se debía emprender con prontitud:

La victoria del socialismo en Venezuela es una empresa de nuestro tiempo, no de un mañana tan remoto que ni siquiera la imaginación puede alcanzarlo. Pero no vendrá fatalmente. Ninguna revolución adviene de ese modo. Se necesita, y es decisiva, la intervención de un sujeto histórico revolucionario: impugnador de la realidad actual a partir de su conocimiento íntimo, agente de la conciencia revolucionaria y portador de un proyecto de sociedad alternativa (idem).

Llama la atención el acento puesto en mostrar la viabilidad del socialismo para Venezuela; esto le imprimía a sus propuestas cierta audacia. Este esfuerzo en la clarificación conceptual de algunos objetivos también lo relacionaban con la condena explícita al capitalismo. Llama la atención el desdén con que trataban el acontecimiento próximo de la nacionalización petrolera; frente a esta eventualidad planteaban ir más allá y hablaban de la socialización de la industria petrolera (Ellner 1992). Con respecto al régimen de propiedad también fueron suficientemente diáfanos, su modificación radical constituía una condición previa para la emancipación socialista:

Para que estos fines se hagan realidad es absolutamente necesario cambiar por completo el régimen de propiedad que los grandes ricos, nacionales y extranjeros han establecido en el país. Es

decir, es necesario suprimir, y convertir en propiedad social, el tipo de propiedad que actualmente impera y constituye la base esencial de la explotación, de los privilegios y de las grandes calamidades que sufren las mayorías venezolanas. Esa propiedad que es necesario suprimir no es otra que la de los grandes millonarios sobre los medios de producción y sobre todas las palancas fundamentales de la vida económica, como son las fábricas, haciendas, bancos y comercios (ibíd., p. 32).

Es probable que el “izquierdismo” expresado en algunos discursos y en el programa de gobierno sea también un reflejo del estado de retraimiento en que permanecía la propuesta del MAS con respecto a los afectos de las mayorías, orientados claramente hacia el diseño de país que estaba ejecutando AD. Esa circunstancia y la emergencia por formarse su propia personalidad política en el ámbito de la izquierda, quizá hayan contribuido a la formulación de proposiciones más audaces.

Con todo, los resultados de las elecciones le dieron apenas 4,2% al candidato del MAS y del MIR, José Vicente Rangel, cifra por debajo incluso de la candidatura de la Nueva Fuerza que logró 5,1% de los votos (Rey 2009), aunque los masistas superaron por pequeño margen al resto de los partidos de izquierda en los organismos beligerantes (Congreso Nacional, Asambleas Legislativas, Consejos Municipales). Para la militancia masista, los resultados electorales fueron en general decepcionantes. Aunque desde una perspectiva más orientada a la justificación histórica del MAS y a su esfuerzo por inventar un camino propio para el desarrollo *de un socialismo a la venezolana*, según uno de sus fundadores, los resultados representaban la decisión acertada para continuar, hasta mostrarse como el proyecto que efectivamente encarnaba la alternativa (Petkoff 1976).

La conquista de un orden específico

El país que ascendía a 1978 venía de experimentar el *boom* de los precios del crudo que según los discursos elaborados desde las más altas instancias del poder iba a servir como una poderosa y definitiva palanca que colocaría al país en el mismo estatus de las naciones más poderosas del mundo. En muchas oportunidades los pronunciamientos del presidente Pérez y sus allegados dejaban ver la inminencia de un acontecimiento casi imprevisto, el país se encaminaba entonces a materializar el sueño de los fundadores de la nación, la plenitud de la modernidad estaba más cerca que nunca.

El despliegue publicitario que trataba de alimentar la representación de un país del primer mundo tuvo una proyección social definitiva que creaba la *atmósfera de unanimidad* en torno al sistema bipartidista. Y en verdad, para muchos analistas políticos, Venezuela representaba un caso extraño con respecto al resto de las naciones del continente, envueltas en conflictos y problemas que impedían el logro de la estabilidad. Por el contrario, frente a aquellos escenarios *imprevistos* desde el poder político y desde los medios masivos de comunicación, se había impuesto al país una imagen de armonía que compartían grandes segmentos de la población. Hasta la contundencia del 27 de febrero de 1989, esa ideología que había alimentado el petróleo y

el discurso de AD y Copei, iba a comenzar a desmoronarse. Pero de momento, ese espejismo seguía nutriendo las expectativas de muchos que perseguían aún las aspiraciones que expresaba la Gran Venezuela.

Con todo, las señales de que las cosas no estaban tan bien, más allá de los sofocantes discursos oficiales de las conmemoraciones, estaban a la vista. Lo que quedaba de muchos de los proyectos poco creíbles de desarrollo e industrialización meteórica era una creciente corrupción administrativa que alimentaba a la clase política y a sus aliados, los sectores que había enriquecido de forma espectacular.

Ya se percibían molestias, incluso dentro del propio personal político del sistema. Para las elecciones de 1978, de las que surgió electo Luis Herrera Campins por el partido Copei, el partido para entonces gobernante, AD propuso una figura que representaba una tendencia política contraria a la encarnada por Pérez. Luis Piñerúa Ordaz era para algunos una expresión opositora dentro de AD y la esperanza de recuperar algún tipo de honradez en un partido que ya estaba sujeto a cuestionamientos de todo tipo como consecuencia de los años de gobierno de Carlos Andrés Pérez. Esta tendencia estaba liderada por Rómulo Betancourt, quien se había distanciado de un presidente Pérez cada vez más *hechizado* por la cantidad de recursos que manejaba.

Por su parte, el presidente electo, el copeyano Luis Herrera Campins, también era la opción de corrientes que cuestionaban el desempeño de su máximo líder, el ex presidente Rafael Caldera, quien aún no podía presentar su nombre para la consideración de la nación, porque según la Carta de 1961, quienes habían sido presidentes de la república no podían optar al cargo de nuevo si antes no transcurrían dos períodos presidenciales. Herrera Campins se alzó con 2.469.042 votos, que representó 46,63%; Piñerúa reunió 2.295.052 votos, que significaba 43,34%. Organizaciones como el MAS, que propuso de nuevo a José Vicente Rangel, logró sólo 272.595 votos, que constituía 5,14%. Mientras que el candidato del MEP, Luis Beltrán Prieto, conquistó apenas 58.723 votos, es decir 1,10% (Urbaneja 2007).

Estos resultados permitían verificar la consolidación de una tendencia electoral por medio de la cual AD y Copei se organizaban como los dos partidos mayoritarios que se estaban repartiendo el poder y eventualmente el favoritismo de la población. Los resultados ofrecían una imagen, según algunos analistas, a partir de la cual en Venezuela se estaba estableciendo un régimen alejado de los extremos políticos e ideológicos, es decir, cada vez más cercano al centro liberal. No obstante, la decepcionante actuación electoral que iban acumulando los partidos de izquierda cada vez más fragmentados, al tiempo que fortalecía el bipartidismo, permitía también concluir, llevado de una lectura pragmática o más bien acomodaticia, que la condición para tener alguna figuración políticamente relevante consistía en reproducir varias de las pautas de conducta que ejercía el personal político de la democracia representativa. Es decir, esas formas de *hacer política* comenzaban a legitimarse como las expresiones naturalizadas de ejercer la política.

Este segundo capítulo intenta abordar varios acontecimientos clave para examinar el funcionamiento de la dinámica sociopolítica: las elecciones de 1978, la situación de la izquierda, y el llamado “Viernes Negro” de 1983. El primer aspecto aborda el momento de las elecciones, no como un evento excepcional de la evolución de un proceso, sino como el instante donde se expresan con mayor nitidez las características políticas y sociales más distintivas del sistema y de su conglomerado dominante, su articulación con el Estado y la sociedad en su conjunto. Así, las elecciones presidenciales no son tomadas aquí como acontecimientos de una naturaleza peculiar, sino como el intervalo donde se ponen de bulto algunas de las complejidades de una realidad específica. Es decir, las elecciones que regularmente ocurren no deben verse entonces como un momento en que se suspende la dinámica política, sino como el tiempo en que se hace más transparente su desarrollo. El análisis sobre las elecciones de 1978 se relaciona, en consecuencia, con el contexto social más general y con los dilemas de *las izquierdas* en particular. El otro hecho histórico considerado fue el Viernes Negro de 1983, visto como

el primer suceso sintomático de la crisis del modelo de 1958, de su dirigencia política y de sus sectores empresariales.

Las elecciones de 1978 y la situación política de la izquierda

Para aquellas elecciones, los partidos AD y Copei se convirtieron en efectivas maquinarias burocratizadas dispuestas a ganar cualquier proceso electoral. Las direcciones de los partidos, el Comité Nacional de Copei y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de AD fueron gradualmente centralizando buena parte de las decisiones de sus organizaciones. Progresivamente, las discusiones teñidas con el barniz de alguna ideología sencillamente fueron desapareciendo de las agendas de los dirigentes. Esto sucedía para el momento en que tales maquinarias se hicieron muy efectivas para penetrar en instancias donde por cualquier razón ocurría alguna elección y la necesidad por consiguiente de que la organización dispusiera así de recursos para sus fines específicos. Si se podían controlar diferentes instancias de decisión con el poder efectivo de una maquinaria electoral, ¿para qué perder el tiempo en desempolvar asuntos programáticos o discusiones ideológicas?

Aquellas elecciones presidenciales merecen una mirada más detenida, entre otras cosas, porque en la coyuntura se despliegan eventos que van a caracterizar el contenido y una manera de hacer política que progresivamente se va a constituir como *la forma hegemónica* en que el conglomerado dominante del puntofijismo concebía la relación con el conjunto de la sociedad. Conviene detenerse entonces en la estrategia planteada por el candidato que en últimas iba a resultar ganador, Luis Herrera Campins, además de considerar en el análisis algunas de las estrategias diseñadas por los sectores de izquierda para presentar una alternativa distinta a AD y Copei.

Como se sabe, el principal adversario del candidato de la organización socialcristiana era quien provenía de AD, Luis Piñerúa Ordaz. Para la principal fuerza de oposición, en un sistema que

ya se prefiguraba como bipartidista, esto es, sujeto a *alternativas políticas* entre fuerzas bastante similares, otro período de gobierno en la “oposición” representaba para la organización la probabilidad de una desbandada de políticos hacia otras fuerzas distintas a Copei. Frente a este dilema, la organización contrató los servicios de un renombrado experto en campañas electorales, David Garth. Una vez en Caracas el especialista acepta la propuesta de conducir la campaña electoral de Luis Herrera, la misma que privilegiará la presencia del candidato en los medios masivos de televisión (Stambouli 1980).

La construcción de la imagen había cambiado notablemente. Para el momento en que David Garth toma las riendas del proceso electoral, Luis Herrera sería *confeccionado* ahora como un hombre de talante fuerte, decidido, con voluntad de “arreglar” una situación mostrada como vergonzosa. La estrategia así elaborada incluía al candidato en medio de escenarios sociales deprimidos, que llevaban el peso de la pobreza en condiciones extremas. Las cuñas precisamente explotaban esta realidad para sacar dividendos electorales. Se “incluía” de esta forma por primera vez a los pobres y sus emergencias para que un público desprevenido los viera en televisión.

El establecimiento político y las élites en general mostraron alguna molestia por presenciar el despliegue de *nuevos actores*, así sea en los términos que estaban planteados, en el marco de una concepción socialmente jerárquica y de clase. Luego nada se sabría de la suerte de aquellos venezolanos que puntualmente fueron tomados por la cámara para patentizar supuestamente el carácter excluyente de la democracia venezolana, convenientemente reducida, en la lógica electoral predominante de entonces, sólo como un problema de la irresponsabilidad de la gestión “adeca”.

El mensaje elaborado por los especialistas era sencillo, y aunque las orientaciones fundamentales correspondían al diseño de un experto en campañas de origen extranjero, el contenido y el contexto de la propaganda se desarrollaba en la Venezuela de los años setenta, al final de un período de gobierno que había

prometido prosperidad y felicidad. El escenario mostrado en las cuñas era entonces resumido en términos concluyentes: “las vergüenzas nacionales del gobierno adeco”, por un candidato que aparecía en mangas remangadas como dispuesto a iniciar una faena de construcción que pasa por poner al país en orden.

La pregunta que pretendía increpar a su adversario de AD dejaba ver el espejismo de un candidato decidido a terminar con las torcidas formas de gobernar: “¿Dónde están los reales?”. Terminaba entonces con una afirmación, según la cual una sola persona podía darle término a aquella acumulación de *vergüenzas nacionales*: “Luis Herrera arregla esto”.

Una cuña particularmente recordada muestra la precariedad en que vivían los sectores populares expulsados de la democracia; en la propaganda aparecen Luisa Alayón, Carlota Flores y su hija, Aleida Josefina:

Luisa Alayón trajo al mundo una nueva venezolana en esta humilde vivienda de Charallave:

“Yo tuve la niña aquí en la casa porque el Hospital de Ocumare me queda lejos, casi una hora”.

Luis Herrera Campins:

“Si tenemos ahora tres veces el dinero de antes, no hay derecho para que no tengan buenos hospitales las comunidades rurales. El país tiene la riqueza, pero el gobierno no tiene la voluntad, yo sí tengo voluntad”.

Vota por Luis Herrera (ibíd., p. 69).

En verdad las molestias que llegaron a suscitarse dentro del establecimiento no tenían mayor razón. Los pobres que intervenían en las cuñas que promovían la candidatura de Luis Herrera aparecían como en un estado permanente de espera, a la expectativa de ofrecimientos “oportunos” que produjeran cambios sustantivos en unas vidas que hasta el momento no habían contado con *suerte*. En consecuencia, trataban de legitimar el orden desigual, proyectando socialmente el retrato perenne de un pueblo pasivo, separado, *de pocas palabras*, que además sólo se limitaba a relatar brevemente una situación, incapaz de hacer

historia. Los sectores populares *brotaban* sólo como parte de las piezas de utilería de la campaña electoral, el actor fundamental debía ser el candidato presidencial:

Luis Herrera Campins:

—“¿Ud. se siente seguro? Este es un abasto, parece una cárcel”.

—Cuando sea Presidente cúmplanos con todo lo que nos ha prometido.

—“Yo viajo constantemente por todo el país y hay tres cosas que fundamentalmente me dice la gente. La primera, no me olvide cuando sea Presidente; la segunda, cúmplame como Presidente; y la tercera, no se aleje, no se vuelva distante cuando sea Presidente. Y yo les puedo decir a todos ustedes que no me voy a olvidar, que voy a ser un Presidente accesible y que voy a cumplir con las promesas que le haga al pueblo venezolano”.

Vota por un Presidente que no rompa su compromiso con el pueblo (ibíd., p. 71).

Al final, la propia dinámica tendía a *polarizar*, a su modo, al electorado en opciones encarnadas por las dos organizaciones políticas dominantes que representaban al capital nacional y al imperialismo. Aunque el tono de la “polémica” política podía eventualmente subir algunos registros. Mirado sobre todo a la distancia, los motivos de las discusiones casi siempre se fundaban en argumentos más bien epidérmicos, eran regularmente incapaces de tocar asuntos que apuntaran a transformaciones estructurales. Esa lógica de la polarización, tal como se planteaba, impedía el surgimiento de otras opciones, se limitaba severamente así el alcance de la democracia.

Un ejemplo de lo afirmado es el mensaje del propio candidato de Copei y próximo presidente, poco antes de culminar la campaña en un diario de circulación nacional. Este pronunciamiento revelaba las maniobras de un sistema que excluía a las posibles alternativas fuera del condominio *adeco-copeyano*. La intención inmediata del mensaje que viene de seguidas es darle respuesta a unas encuestas que señalaban que los venezolanos favorecerían en esas elecciones de 1978 a AD en las parlamentarias zanjadas,

allí junto con la elección presidencial. Se trataba de captar, para la opción de Luis Herrera, especialmente, al electorado, más allá de las tendencias socialcristianas. Esto traía otras consecuencias: a mediano plazo contribuiría a cercenar otras alternativas que estaban planteadas en el ámbito electoral, al tiempo que pretendía cimentar, como parte de un proceso más general en el imaginario político, la presencia inmutable de dos partidos que se iban a turnar en el poder a través de los años:

Si no eres copeyano, pero para ti también ya basta, tú tienes un problema el próximo 3 de diciembre. Quizá tu candidato es buena persona, simpático, y ha hecho una fuerte campaña, pero la verdad es que no puede ganar. Si quieres vota por tu partido con la tarjeta pequeña; no pierdas tu voto con la grande. La única alternativa para terminar con el continuismo adeco es Luis Herrera. Haz que tu voto cuente (citado en Stambouli 1980, p. 86).

La izquierda o el persistente archipiélago *progresista*

Para el conjunto de agrupaciones y partidos identificados con contenidos políticos de izquierda, las cosas no pintaban muy bien. Digamos que las organizaciones más emblemáticas que intervenían políticamente (el Movimiento Electoral del Pueblo, el Partido Comunista de Venezuela, el Movimiento al Socialismo, Bandera Roja, el Grupo de Acción Revolucionaria, la Liga Socialista (LS), Vanguardia Comunista, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, etc.) permanecían en una dinámica de fragmentación que parecía no tocar fondo. Algunas de estas formaciones continuaban en condiciones de clandestinidad.

Este proceso hacia la división permanente, existía casi desde el mismo momento del nacimiento de las propuestas socialistas. Pero desde la década del sesenta, con el revés que produjo el intento de alcanzar la revolución a través de la lucha armada, no es exagerado sostener que la parcelación organizacional se ahondó. Es probable que el pobre apoyo electoral de aquellas

fuerzas las haya hecho incluso más sectarias. Un trabajo bien informado de Pedro José Martínez, sobre las variantes que en cada momento histórico ha tenido la aspiración de unidad en las izquierdas, muestra esta realidad (Martínez 1980). Aquí se siguen algunas de las orientaciones generales que dieron vida a algunas organizaciones políticas desde 1974.

Durante ese año se arraigaron grupos de izquierda que fundamentalmente provenían de círculos cristianos. El Grupo de Acción Revolucionaria (GAR) y el Movimiento Primero de Mayo son expresión de este tronco común de cristianos que se relacionaban principalmente desde la experiencia del movimiento estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello. Por su parte, el PCV protagonizó en 1974 una división que terminó en la fundación del partido Vanguardia Unitaria Comunista (VUC).

En 1976, La Causa R mostró controversias internas aparentemente producto de pugnas por la conducción del movimiento, pero los que se distanciaron no formaron en conjunto otra agrupación. La Liga Socialista y Organización Revolucionaria (OR), esta última como instrumento para las acciones propiamente militares, fundaron el Movimiento Estudiantil de Unidad con el Pueblo (MEUP). Una porción importante de militantes de Bandera Roja creó, producto de una división, un grupo pro chino y otro pro albanés. El último, identificado como BR-FAS, reclamó como suyas a organizaciones como los Comités de Luchas Populares (CLP), los Comités de Luchas Estudiantiles Revolucionarias (CLER), los de Luchas Campesinas (CLP) y los de Luchas Obreras (CLO) (ibíd., p. 77). Aunque el MAS por estos años no sufrió divisiones, sí tuvo enormes dificultades que prepararon deslindes en el futuro. Si bien el MIR formalmente no se escindió hasta las elecciones de 1978, sí culmina este proceso a finales de 1979.

Los esfuerzos porque las izquierdas logran alternativas de unidad para presentarlas a las elecciones de 1978, corrieron principalmente por parte de un conjunto de personalidades llamadas “independientes de izquierda”, cuyos primeros movimientos para crear una referencia unitaria fueron en las elecciones de 1973.

En todo caso, para las elecciones presidenciales de 1978 tienen más actividad pública en comunicaciones de prensa con llamados de atención sobre la unidad. La propuesta es aparentemente muy clara, pero en términos de operativos requiere trabajo. Se trata de hacer esfuerzos por presentar una candidatura única. Entre las personalidades que la constituían estaban el político José Herrera Oropeza, el escritor Miguel Otero Silva, el filósofo y poeta Ludovico Silva, y el académico Rafael Pizani (ibíd. p. 45).

Ante tales solicitudes anteriores a las elecciones de 1978, el MIR en un primer momento, por ejemplo, mostró una posición de cautela, como esperando otras señales más concretas, sobre todo con respecto a las decisiones que tomaría en las conversaciones el MAS. Mientras que el PCV y el MEP fueron desde un primer momento favorables a tales llamados. Con todo, individualidades con algún peso a la hora de orientar la opinión dentro del movimiento popular, como Pedro Duno, Domingo Alberto Rangel o el profesor José Rafael Núñez Tenorio, tenían una línea política más radical, no sólo negada a los esfuerzos por conquistar la unidad en un escenario puramente electoral, sino en la propia participación en las elecciones (ibíd., p. 48). Partían de la consideración de que se avecinaba una crisis del régimen de Punto Fijo, y el momento era propicio para preparar una insurrección popular que terminara con la limitada y corrupta democracia venezolana; era preciso entonces asumir una postura revolucionaria. Estas posiciones estaban matizadas, sobre todo, por la experiencia frustrada de la Unidad Popular en Chile, experiencia que concluyó con el martirio de su presidente Salvador Allende en septiembre de 1973, y la imposición de una dictadura militar.

Entre los obstáculos que había que confrontar no estaba, aparentemente, el contenido programático de un gobierno con vocación popular, sino el hecho de lograr persuadir a las pequeñas formaciones sobre la pertinencia de crear una plataforma unitaria en el seno de organizaciones y liderazgos sumamente sectarios. Los ruidos provenían en esta ocasión principalmente del MAS. Esta organización, en la opinión de sus dirigentes, sostuvo lo inconducente de una política *frentista*, porque esto condicio-

naba los alcances “programáticos” que los partidos tenían para materializarlos en la sociedad. En el caso particular del MAS, decían, la intención era proyectar el contenido de un socialismo definido en unos términos específicos con respecto al resto de las formaciones partidistas. De manera que la formación de una alianza de fuerzas de izquierdas aplazaba naturalmente la elaboración de un discurso propio en nombre de la unidad.

Además, según los dirigentes masistas, el proceso histórico de conformación del partido que simbolizara la propuesta de un “socialismo de nuevo tipo” no estaba aún culminado. Para los venezolanos de a pie, el MAS se seguía percibiendo como un partido más de izquierda, como tantos que se ocultaban detrás de determinadas siglas. Por ello, la propuesta de un socialismo venezolano necesitaba ser más conocida y desde una estrategia frentista aquello no era posible. De otra parte, frente a una eventual cristalización de la unidad, tal logro pasaba por reunirse en torno a un candidato. Los nombres eran varios, unos más oficiales que otros: Luis Beltrán Prieto Figueroa por el MEP, o Américo Martín por el MIR, o Teodoro Petkoff por el MAS. El caso del periodista José Vicente Rangel merece alguna atención.

Aunque en rigor Rangel no pertenecía a ningún partido, guardaba más cercanía con personas y planteamientos provenientes del MAS. Un grupo encabezado por Pompeyo Márquez promovía esta opción, los sectores que preferían a Petkoff defendían con más fuerza una política antifrentista. Uno de los argumentos sostenidos por este grupo era el temor de que el partido, con José Vicente Rangel, sucumbiera a desviaciones cada vez más notables de *socialdemocratización*. Esos argumentos están relacionados con presentar a los venezolanos una propuesta genuinamente “socialista” que encarnaría Petkoff.

Pero los militantes más ganados a tratar de construir una plataforma alternativa, sostenían que en verdad la figura de Rangel era más consensual. El periodista podía mostrar a la sociedad, víctima de una permanente satanización de la idea del socialismo, una imagen más fresca, orientada a dismantelar tantos prejuicios. En todo caso, si al final la nominación hubiese correspondido a

Petkoff, entonces la unidad con el resto de los partidos se hubiera visto frustrada, ya que Rangel había hecho pronunciamientos públicos suficientemente comprometidos con una línea anti-frentista. Ante estas eventualidades y en medio del debate interno, Petkoff abandona su precandidatura. Quedaba Rangel como el candidato del partido y potencialmente como el representante de una porción de la izquierda para las elecciones.

Sin embargo, las cosas no estaban tan claras. En lo adelante, algunas declaraciones de Rangel, quien en un principio era cercano a esa propuesta, tenían la finalidad de desalentar las intenciones de unidad. Sostuvo el candidato, entonces, que la unidad no debía partir de las cúpulas de los partidos, sino como un esfuerzo que terminara en la unificación de la nación. Estos comentarios tenían la intención de demorar los posibles acuerdos entre los partidos, al tiempo en que mostraba a un candidato que encarnaba la opinión exclusiva del MAS, sistemáticamente contrario a la unidad en los términos en que estaba planteada. Aunque llama la atención la convocatoria reiterada de Rangel a la unidad de la nación, acaso como una forma de trascender la lógica de una lectura típicamente marxista más bien ortodoxa, que funda su estrategia política en las coordenadas de la lucha de clases y en la preeminencia del proletariado como el sujeto de la revolución:

Se busca no sólo unir a la izquierda: se busca unir a la nación. La unidad socialista no puede plantearse como discusión de vanguardia, como debate sólo para la izquierda. Tiene que tener una incidencia nacional, porque de lo que se trata es de conectar la política y el planteamiento programático socialista con el resto de la nación (*El Mundo*, 9 de diciembre de 1976).

Más adelante, el candidato da otras declaraciones en unos registros más terminantes:

Los que creemos en una nueva concepción de la unidad, con el socialismo como centro motor, para quienes estimamos que la izquierda debe poner en la calle una política para toda la nación; para quienes pensamos que el tema de la unidad en 1976 y en

el futuro debe examinarse a la luz de experiencias fracasadas, y redefinirlo con ajuste a identificaciones ideológicas, programáticas y estratégicas, lejos de ser antiunitarios, tenemos una visión, lo creemos honestamente, más real y aproximada de la unidad. No pretendemos imponer a nadie, a rajatabla, esta concepción de la unidad del pueblo. Estamos abiertos al diálogo y a la discusión con todos los sectores del país, con grupos, partidos y personalidades. Pero rechazamos que se nos trate de imponer otras versiones de la unidad que no compartimos o sobre las que abrigamos dudas (Martínez 1980, p. 386).

En pleno año electoral las acciones del MAS, comandado por Petkoff, dinamitarían las conversaciones entre los partidos. El primer golpe contundente vino cuando Miguel Otero Silva propuso el nombre de Rangel como candidato de unidad, y si esto no fuera posible entonces se debía decidir por Rafael Pizani. Estas primeras proposiciones se adelantaban con el compromiso, por parte de los involucrados, de guardar el secreto con la idea de ser prudentes en el proceso de negociación. La intención fue frustrada de facto cuando el MAS hizo público esos compromisos. La respuesta de Otero Silva fue en unos términos algo irónicos en la medida en que mostraba *perplejidad* por las acciones masistas:

Todavía no acierto a comprender por qué el MAS, estando interesado como seguramente lo estaba, en que su candidato José Vicente Rangel fuera postulado por todos los partidos de izquierda, se apresuró a romper un silencio que se había comprometido a guardar; en vez de iniciar una discusión cordial acerca de mi proposición con los dirigentes de los otros partidos. Era evidente que la actitud del MAS traería como consecuencia la protesta del MEP, del MIR y del PCV, y que me obligaría a mí a retirar mi proposición para no actuar como fomentador de divisiones ni como proselitista de un partido determinado (ídem).

Aunque de la boca para afuera, la intención de los socialistas del MAS era propiciar espacios para acuerdos que logran soldar alguna forma de unidad. La verdad era que la decisión política se distanciara de lo que algunos dirigentes del partido llamaban la

izquierda tradicional. Con todo, ya en la campaña que encabeza José Vicente Rangel, resulta interesante la intención de plantear el socialismo en la sociedad venezolana del momento. Se intentó en primera instancia emancipar ese término de la cantidad de prejuicios que el establecimiento le había impuesto, al punto de asociar la palabra con la propia negación de la democracia.

El asunto se analizó entre los responsables de la campaña. Era preciso delinear una estrategia que apuntara a desmitificar al socialismo, separándolo de los contenidos radicales asociados al comunismo. La consecuencia a mediano plazo fue, acaso como un resultado no previsto, en primer lugar, el desmantelamiento del socialismo que defendía el MAS de su contenido anticapitalista; esto fue advertido en su momento por Alfredo Maneiro, y en segundo lugar, el pronto confinamiento del partido en las lógicas socialdemócratas.

Pero este no era un fenómeno típicamente nacional en el mundo. En muchos casos, los proyectos que intentaron desafiar a un sistema mundial dividido en las lógicas de la Guerra Fría, con el objetivo en primer caso de propender a la superación del capitalismo, pero sin reproducir las desviaciones del socialismo *realmente existente*, culminaron sus inventivas con el principio de *aceptar la realidad* y en consecuencia trabajar por administrar *mejor* al capitalismo.

La centralidad del partido-aparato

Varias consecuencias dejaron las elecciones de 1978. Una de las más perdurables fue el progresivo fortalecimiento del bipartidismo como el exclusivo mediador entre el Estado y las demandas de algunos sectores. El partido se constituyó, para muchos venezolanos, en la vía más expedita a través de la cual se podía conquistar algún cargo en la administración pública. Esto era particularmente importante: conseguir una vinculación más orgánica con alguna de las instituciones estatales, lo cual suponía más seguridad para una familia y la eventualidad de que los hijos

podían crecer en un ambiente de certezas crecientes con respecto al futuro inmediato.

Estos mecanismos clientelares se iban inscribiendo en los procedimientos administrativos de manera muy natural, regular e institucionalizada, casi como el papel membretado y los sellos que identifican a las corporaciones. En verdad, en su momento, representó para sectores de la población la fórmula que *avistaron* conducente para ascender socialmente, a tal punto que se podría considerar como parte de un proceso de “democratización” no planificado. Pero, como ocurre con estos caminos *clientelares*, pronto la promoción social de esos grupos vinculados con los partidos creó a su vez el rechazo de las grandes mayorías que no contaban con la suerte de tener un “compadre político”.

De inmediato, los partidos dominantes, pero luego casi todo el abanico de organizaciones que iban entrando por el aro de la democracia representativa, se veían impelidos de reproducir algunas de las pautas de conducta que habían cuestionado. Pedro Duno, en su trabajo de investigación *Los doce apóstoles* (1975), llamaba la atención sobre la primacía de los partidos-aparatos y su incidencia en ámbitos que no eran propiamente los políticos:

La posibilidad de sobrevivencia de una familia o de un individuo dentro de esta democracia se funda en la militancia política, en el acercamiento a un político, en la ayuda de un compadre bien colocado en algún partido. No es posible conseguir trabajo sin la ayuda de un partido o de un grupo político, de nada vale la capacidad científico-técnica, de nada sirve la experiencia y el conocimiento. Para lograr desde el ingreso a un ministerio para desempeñar un cargo técnico hasta una jubilación hay que buscar la palanca política (p. 174).

El resultado predecible fue que las organizaciones, sobre todo las más emblemáticas, inevitablemente se fueron colmando de un personal que no había tenido experiencia alguna en asuntos de formación propiamente partidista, ni mucho menos ideológica. Tampoco acompañaban sus acciones a partir de convicciones arraigadas en etapas previas. Ya la democracia tenía más de

veinte años de instaurada. La sociología que rebelaban aquellos militantes fue desarrollando otras habilidades, relacionadas con un refinado sentido de la oportunidad para trepar a los cargos más encumbrados en la administración pública o a través de las instancias de la propia organización. Ese sentido de la oportunidad para capturar cargos públicos, relacionado con la impericia, la improvisación y la corrupción, más adelante se proyectó socialmente como el prototipo del militante convencional de la democracia puntofijista.

El sistema encarnó en su momento los contenidos de una hegemonía que lógicamente llegó a ser socialmente *legítima*. Sin duda, en primer lugar, el principio del voto universal y cierta inclinación sobre el objetivo de la justicia social, al parecer están inscritos en la subjetividad de cada venezolano. Es probable que estos dos aspectos se implanten con fuerza como *valores socialmente compartidos* en la experiencia populista de AD, entre 1945 y 1948. Lo que no quiere decir, que en el desarrollo de la vida social muchos hayan hecho tabla rasa de ese principio. Pero también, parte del contenido de esa hegemonía encarnada en el militante político convencional, expresaba entonces el desenvolvimiento de un país de pillos y oportunistas, una sociedad comprada y comprable. En todo caso, Duno abunda sobre estos aspectos relativos al carácter que iba tomando políticamente la nación:

El país se ha convertido en un gran mercado libre donde manotean, arrebatan, disputan y reparten la riqueza nacional. Empresarios, ministros, parlamentarios, concejales, generales y doctores seguidos de un séquito de intermediarios, agentes y secretarios, han caído con voracidad sobre el Estado, sobre la nación, sobre el pueblo. El comercio, el transporte, la agricultura, la industria, la Banca, toda la actividad, producción e intercambio, sobre la que se basa la sociedad capitalista, adquieren entre nosotros una necesaria coloración política ligada al peculado, a la corrupción, al apetito por obtener riqueza inmediata (ibíd., p. 3).

La descripción se hacía más verdadera cuando la democracia puntofijista ascendía a un desarrollo en que las fuerzas que podrían amenazarla permanecían, para el momento, en los costados de la dinámica social y política. Es decir, el modelo estaba socialmente consolidado y políticamente estabilizado. Pero mientras esto ocurría, es decir, la cristalización de un modelo de partidos casi gemelos que se alternaran en el poder, la periódica celebración de elecciones cada cinco años, la existencia de una institucionalidad sin contradicciones internas que amenazara gravemente el statu quo, la existencia de un parlamento que albergaba incluso a una parte de las organizaciones de izquierda, la lealtad de las Fuerzas Armadas Nacionales, se patentizaba, al mismo tiempo, la instauración entre las élites de una rutina casi administrativa.

La sensación de abulia y autoconfianza en muchos sentidos se vio reforzada también por una segunda bonanza petrolera ocurrida entre 1979 y 1980. En esta ocasión, una crisis en el Medio Oriente y la guerra entre Irán e Irak (1980-1988) produjo el alza de los precios del crudo. En particular, el precio del petróleo venezolano llegó a situarse por encima de los 30 dólares por barril. La entrada de estos recursos contuvo la emergencia por introducir cambios en el modelo económico rentista. El gobierno de Luis Herrera tenía previsto la implementación de un conjunto de reformas macroeconómicas contenidas en el VI Plan de la Nación. Por otra parte, la inquietud que generaba el eventual agotamiento del recurso petrolero, lo que pudo propiciar la búsqueda de alternativas, fue desapareciendo con el descubrimiento de nuevos yacimientos donde descansaban grandes reservas petroleras, como la Faja Petrolífera del Orinoco.

El primer golpe, el Viernes Negro (1983)

Si la intención del historiador es el objetivo de considerar los sucesivos momentos de incubación de la crisis de la democracia liberal representativa y la crisis de su modelo petro-estatal, se puede afirmar que el primer acontecimiento que preparará

grandes desenlaces lo constituye las medidas económicas que se desarrollan a partir del Viernes Negro de 1983. No se trata de desdeñar con este objetivo las especificidades irrepetibles que muestra la evaluación exclusiva del “proceso” que desencadenó la devaluación de la moneda, pero entre los analistas parece haber cierto consenso en examinar este acontecimiento como el primer síntoma que muestra la enfermedad terminal que va padeciendo el cuerpo de Punto Fijo.

No deja de ser un tanto paradójico que una fecha como el 18 de febrero de 1983, específicamente un viernes, sea un momento importante para la historia de los últimos años, cuando precisamente ese día los venezolanos de a pie no percibieron, y no tenían porqué, la trascendencia de las medidas que anunciaba el gobierno de ese entonces. La percepción más inmediata sobre lo que estaba sucediendo quedaba relacionada con una fuga inusual de divisas; un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, lo que propició una alarma motivada al nivel que habían alcanzado las reservas internas. Esto condujo a que el gobierno suspendiera la venta de divisas y devaluara el bolívar en un 30%, hasta establecer el control de cambios diferenciales. Este proceso iba a administrarlo una institución creada para esos fines: Recadi (Régimen de Cambios Diferenciales).

El calificativo “negro” colocado a ese viernes no fue utilizado por quienes vivían directamente aquellos instantes, fue incorporado por analistas o periodistas posteriormente, como recuerda Manuel Caballero. Si bien la medida del gobierno fue terminante, producto de la retirada de divisas que ya alcanzaban ocho mil millones de dólares, esto no era un fenómeno repentino; desde mediados de 1982 al país le estaba afectando una fuga de capitales importante. Para el momento en que esto ocurre el Estado estaba debilitado por la creciente deuda externa y el quebranto de la economía.

En el caso de la deuda externa, los países de la periferia del sistema capitalista mundial venían recibiendo recursos por parte del sistema financiero internacional, asociado a los países más industrializados. Venezuela no era una excepción en la captación

de créditos, lo que de momento parecería llamar la atención, luego de constatar la condición petrolera del país. El pago de estos créditos era exigido a los países deudores en unos períodos cortos. Pero la ocasión que supuso la declaración de moratoria de la deuda por parte de México despertó las inquietudes de la Banca internacional, esto conllevó al acortamiento de los plazos para hacer efectivos los pagos e incrementó las presiones hacia los países del llamado, sobre todo para ese momento, Tercer Mundo.

Frente a esta situación las condiciones de Venezuela no eran óptimas, aunque se estaba registrando para 1982 un incremento apreciable de los precios internacionales del petróleo como consecuencia de la guerra Irán-Irak. Este acontecimiento es pertinente mencionarlo porque implicó la demora en la implementación de un conjunto de políticas de ajuste que iban orientadas, según el gobierno, a encarar los vicios y emprender, en síntesis, la modernización del país. En la práctica se trataba de un programa de orientación neoliberal. Pero el alza de los precios del petróleo terminó con la llegada de un tiempo de bonanza y los políticos de entonces veían poco pragmático tratar de llevar adelante un programa de ajustes en momentos en que estaba entrando dinero a la nación a través de la renta petrolera.

En todo caso, como se ha visto, el problema de la deuda era un fenómeno ubicable en los procesos relacionados con el sistema financiero internacional. Y también reflejaba las marcadas desigualdades que iban a expresar, además, el dominio de los países más industrializados sobre las áreas más deprimidas del mundo. Pronto, las exigencias de pago a los países más pobres supuso, en las condiciones en que estaban planteadas, la entrega de sus ya limitadas soberanías. En América Latina los países con más problemas de deuda eran Venezuela, Argentina, Brasil y México; para este grupo las condiciones para el pago eran bastante apremiantes (Caballero 2009).

Las formas en que se concibió saldar esas deudas, además de afectar o dificultar aún más las posibilidades de desarrollo de los países deudores, suponían el desencadenamiento de un proceso absurdo. Cada país, en su esfuerzo por destinar recursos ingentes

a disminuir los intereses de la deuda, terminaba pagando el monto varias veces, sobre todo porque los intereses subían constantemente y los plazos para cancelarla se hacían más perentorios, de manera que esto tuvo una incidencia en las frágiles economías de los países dependientes. Resultaba claro, entonces, que la deuda era impagable. Pero emprender una acción unilateral, por parte de algún país interesado en emanciparse de aquella estructura financiera, podría acarrear situaciones de hostigamiento de los centros financieros centrales, en cuanto suponía el aislamiento inmediato de aquel país, y en consecuencia el estrangulamiento de su economía.

Se imponía refinanciar la deuda con los países industrializados; esto se hizo, pero los países deudores no fueron en bloque a encarar un proceso de veras complejo. En esta coyuntura, Venezuela enfrentó una fuga de capitales espectaculares desde 1982, incrementada en 1983. En este contexto, en un país con un desarrollo precario de algún tipo de infraestructura industrial, sin un campo en pleno proceso de producción, la práctica más fácil era la importación a través de los dineros provenientes de la renta petrolera. Al país había llegado desde 1973 una cantidad importante de dólares que invariablemente iban a incidir en la conformación de una sociedad con características bastante peculiares.

Estar armados de una moneda fuerte como el bolívar de entonces, con la existencia de dinero en la calle y su captación por sectores sociales, especialmente las capas medias, de forma relativamente sencilla, produjo hábitos de consumo distintos al resto de las naciones latinoamericanas. Aún se recuerdan las costumbres excéntricas de aquellos que viajaban todos los fines de semana a Miami a comprar cualquier cantidad de productos a fuerza de sus petrodólares.

En tal sentido, las medidas que se tomaron en febrero de 1983 debieron parecer un despojo de los derechos “conquistados” por la costumbre. La implantación del control de cambios implicaba, por ejemplo, un freno en la rutina de viajar y en consecuencia poder comprar en el exterior. La Venezuela orgullosa de sus petrodólares sucumbía progresivamente de un sueño colectivo que hizo creer a porciones de las capas medias que el país vivía

en un lugar distinto a la región latinoamericana. Esta situación se hacía menos manejable por parte del gobierno, ya que aquel 1983 era año electoral.

La crisis que se desencadenó con el, así llamado por la prensa de la época, Viernes Negro tuvo varias implicaciones, algunas de las cuales se consideran brevemente: en concreto, el dólar antes de la devaluación se costaba a 4,30 bolívares, y se montaba con esa medida a siete bolívares por dólar. En rigor, la devaluación de 1983 no representó una modificación apreciable para la época, pero el efecto social sí fue considerable. Se instauraba de esta forma, la idea de que se terminaba el sueño que había colocado al país y a su moneda fuerte entre las naciones ricas y selectas del planeta. La prensa del momento registró estas sensaciones, según las cuales algo había cambiado para siempre. Desde ese momento se hace presente en el panorama económico y social, con evidentes proyecciones políticas, la insistencia del fenómeno de la inflación (ibíd., p. 89).

Otra de las consecuencias consistía en que los venezolanos entraban por fin a una situación de dificultad que se expresaba, por los momentos, en el área de la economía, pero que pronto tendría otras ramificaciones hacia los ámbitos sociales y políticos. Muchos de los expertos concluían que el modelo de intervención del Estado había terminado por distorsionar la viabilidad del proyecto puntofijista. De esta forma, la onda neoconservadora se iba a presentar, desde la óptica de sus propulsores, como la única salida para racionalizar las perversiones de la economía estatista venezolana. Pero en verdad, las razones últimas eran otras. Para el proyecto neoliberal, impuesto como receta inapelable al mundo, se precisaba desmontar al Estado nacional, al tiempo en que se dejaba a las mayorías empobrecidas a merced de las variables de un mercado desregulado. De esto se hablará con detenimiento más adelante.

En el gobierno de Herrera Campins, la deuda pública externa de Venezuela aumentó de, alrededor de 9 mil millones, a cerca de 24 mil millones de dólares. Se trató de impulsar políticas que recuperaran la estabilidad económica; una prueba fue la devaluación del bolívar, pero al final no se logró propiciar el aumento de la

producción industrial. Por estos años, las organizaciones empresariales, cuya fundación fue promocionada en su momento por algunas instancias políticas, tendieron progresivamente a perder la confianza en el Estado nacional, y muchos se hicieron enemigos de los subsidios, de los controles de precios, de la intervención estatal como principio nivelador, etc. En este sentido, se puede comprender la fuga de capitales que se empieza a sentir desde la segunda mitad de 1982.

Una mirada, puesta en la larga duración, la propone Alberto Navas (2012), donde precisamente inscribe el análisis del Viernes Negro de 1983 en perspectivas más amplias:

El negativo episodio del “Viernes Negro” del 18 de febrero de 1983, con el decreto del Presidente Herrera Campins, que devaluaba diferencialmente nuestra moneda frente al dólar norteamericano, formalizó el tardío abordaje de la crisis estructural que venía anunciándose desde fines de la década anterior, todo ello, en manos de un gobierno que dejaba la sensación de nunca haber “arrancado” o “despegado”, que cuando tomaba medidas tendía a complicar aún más la situación nacional, como lo fue el caso de la creación del Régimen de Cambio Diferencial (Recadi), que en corto plazo se convirtió en una fuente de corrupción administrativa de dimensiones sin precedentes. Un país políticamente fracturado, con una moneda devaluada y asolado por la corrupción tenía que enfrentar, al mismo tiempo, un complejo proceso de renegociación de su elevada deuda externa. Luego de dos décadas anteriores apreciadas en contraste como de progreso y estabilidad, la sociedad venezolana se encontró, en medio de la coyuntura electoral de 1983, con un país en crisis de contracción general y amenazas de retroceso en los indicadores de progreso. Sin embargo, la catástrofe no se hizo inmediata, pues el electorado, en un ejercicio de diferimiento de los problemas y de evocación del reciente bienestar, retornó su voto de confianza mayoritario al partido Acción Democrática (p. 47).

Las señales puestas de presente en esta sección se concentraron en destacar los primeros síntomas de malestar que muestra el sistema político de entonces, claro que la manifestación de estas

señales no son en lo inmediato una expresión generalizada de malestar social. En general, los niveles de participación electoral y las preferencias de quienes concurren a las urnas muestran un apoyo al sistema de partidos. No obstante, las divisiones a lo interno del conglomerado dominante se hacen más patentes.

Una expresión de la forma de vínculo que el modelo de partido “institucionaliza” con los sectores populares acontece durante los períodos electorales. En esta investigación, el momento previo a la concurrencia a las urnas (las campañas electorales) muestra conductas que no son tomadas como excepcionales, sino que revelan más bien de forma más protuberante las concepciones, las continuidades, los procedimientos que se vienen adoptando desde el poder para mantenerse en la cúpula y conservar algún tipo de legitimidad. En este sentido, la relación episódica con los pobres acontece dentro de una lógica puramente instrumental. Se trata de venezolanos que aparecen en las pantallas de televisión de forma conveniente, sólo para mostrar los errores del gobierno saliente, y el peligro que representaría para el país, la continuidad de Acción Democrática en el poder. Es decir, lo que subyace en la propaganda, y se trata de imponer a la sociedad como un patrón, es la imagen de los sectores populares, vistos como un segmento de la población pasivo y a la espera de atención por parte del funcionariado de los partidos.

Por su parte, las fuerzas alternativas de la izquierda permanecen bastante divididas y disputándose entre sí la hegemonía del campo progresista. Es decir, una parte de los esfuerzos de la mayoría de esas formaciones se encauza tras el objetivo de encarnar las opciones de transformación social, lo que suponía, dada su debilidad electoral y pobre proyección política, una pugna sectaria constante y acotada al campo reducido de la izquierda entre las mismas organizaciones socialistas.

El papel que cumplía el MAS en esta fase de desarrollo se expresaba por momentos en el intento de trascender el campo saturado de esa izquierda, convocando a la nación para la conquista del socialismo, edificado en la emergencia del *ahora*, por eso se impuso, sin embargo en la práctica, la tarea de confron-

tar internamente o confabularse contra todas las organizaciones para debilitar aún más sus posibilidades. Frente a la eventual dificultad de erigirse como la instancia que liderara el proceso de la unidad y trazara en definitiva *la vía venezolana al socialismo*, se dedicó a tratar de implosionar las iniciativas para crear una plataforma unitaria desde el mismo ámbito de las izquierdas.

Esta etapa muestra además el desarrollo de los partidos que se van constituyendo como enormes aparatos burocráticos, despojados progresivamente de su identidad programática. A los ojos de muchos venezolanos, se convierten casi exclusivamente en un lugar para trepar más rápido y garantizar de esta forma seguridad para sus más próximos. La situación del crecimiento burocrático de los partidos, de alguna manera legitimados a través de los sucesivos procesos electorales, va engendrando el perfil específico de un político convencional, oportunista, e incluso corrupto. El sistema empieza a mostrar sus costuras, sobre todo en términos de su funcionamiento económico, a partir del llamado Viernes Negro de 1983.

La expansión neoliberal

Las ideas que orientan esta sección se inscriben en la necesidad de caracterizar el proyecto neoliberal como un intento de detener los avances democráticos y específicamente la instauración de estados garantistas. Estas acciones eran vistas como inaplazables para acometer la crisis de acumulación por la que atraviesa el sistema capitalista. Pero en todo caso, los proyectos neoliberales no son concebidos aquí sólo como un plan de reestructuración económica para restablecer la funcionabilidad del capitalismo en el escenario mundial en crisis desde la década del setenta. El trance neoliberal implica entonces una elaboración ideológica radical del conservadurismo reaccionario, asociado con ideas liberales fundadas en la primacía exclusiva del individuo y de un mercado autorregulado en desmedro de los principios de igualdad e incluso de la propia democracia; ideas que fueron cardinales en el orden mundial de postguerra. El capítulo continúa con la explicación sobre los intentos de implementación del proyecto de ajustes macroeconómicos, y el examen acerca de dos acontecimientos que dejaron varias consecuencias para el debilitamiento de la democracia de Punto Fijo: el marzo merideño de 1987 y la masacre de El Amparo de 1988.

Los proyectos neoliberales surgen como la estrategia delineada desde los centros de poder mundial para la revitalización del sistema capitalista. Aunque sus propaladores presumían del

carácter desinfectado de ideología, al tiempo en que sólo hacían énfasis en la “efectividad” de una gerencia “libre”, “neutral” y “apolítica”, el programa neoliberal pretendía la expansión de una ética específica del mercado, proyectada hacia todos los ámbitos de la vida. Aunque el capitalismo en su funcionamiento estructural ha buscado históricamente *la mercantilización de todas las cosas*, en el objetivo de acumular capital de manera incesante, el neoliberalismo pretendía llevar estos principios hasta las últimas consecuencias. Harvey (2007) propone una definición que en unos términos más concretos arroja luces sobre lo que se quiere plantear:

El neoliberalismo es, ante todo, una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada fuertes, mercados libres y libertad de comercio. El papel del Estado es crear y preservar el marco institucional apropiado para el desarrollo de estas prácticas (p. 6).

Trayectoria y principios neoliberales

En un artículo del historiador Anderson (1999) se hace un balance sobre el contenido general y los principios filosóficos que han fraguado los proyectos neoliberales, vistos como un conjunto de proposiciones que se orientan no sólo hacia la inducción de cambios primeramente económicos. Mirar los planes neoliberales como orientados sobre todo a afectar los procesos económicos, lleva al error de concentrar los impactos de una propuesta ambiciosa a una exclusiva región de la realidad. Aquí se parte de considerar la reacción neoliberal como la expresión más cabal que define las formas ideológicas, políticas, con incidencia sobre el propio sentido común, relacionada con la última fase del capitalismo en su modalidad globalizadora y depredadora.

Anderson ubica el *nacimiento* del neoliberalismo en los rigores de la Segunda Guerra Mundial, en América del Norte y Europa. Y al contrario de lo que pueda pensarse sobre la real carga de anticomunismo que lo caracteriza, más bien su adversario más enconado, por ser quizá el enemigo más cercano, fue la concepción del Estado intervencionista que iba a ensayarse en la Europa de la postguerra. Pero lo que llama la atención y se relaciona con lo expuesto más arriba es que no sólo fue una reacción propiamente política, sino también teórica (ídem). En 1944 aparece una publicación que se puede considerar una de las primeras obras que aborda las perversiones que para el autor trae la intervención del Estado: *Camino a la servidumbre*, de Friedrich Hayek (1990).

En 1947, el mismo Hayek convocó a una reunión en momentos en que Inglaterra y otros países europeos experimentaban proyectos que tenían una clara orientación intervencionista. Eran las bases de los estados de bienestar. Esa reunión se efectuó, como señala Anderson, en la estación de Mont Pélerin, en Suiza. Los invitados son enemigos jurados de las regulaciones a los procesos económicos, pero también van a adjuar de valores preciados, como la igualdad social. Se busca una reingeniería social completa que involucre limitar e incluso liquidar para siempre los objetivos de la democracia, relacionados en este caso con la concepción keynesiana. En general, aprecian que los derechos, sobre todo de los trabajadores y de las mayorías, han ido muy lejos hasta amenazar el orden capitalista, la propiedad privada, la *vitalidad de la competencia* y la expansión de la libertad de los individuos.

Aquella convocatoria la componen nombres relativamente conocidos: Karl Popper, Lionet Robbins, Milton Friedman, Walter Lippman, Salvador de Madariaga, Walter Eukpen, entre otros. Estas reuniones se efectuarán cada dos años. Se trata de intelectuales que funcionan como una secta, *altamente dedicada y organizada* (Anderson 1999). En el tiempo de las primeras reuniones, las ideas que cuestionaban la regulación del mercado en Europa eran marginales.

Para estos primeros neoliberales, las señales de la crisis capitalista las propiciaban en parte los sindicatos, y en general el

movimiento obrero, quienes en su accionar, relacionado con los derechos de los trabajadores, terminaban por erigirle diques al natural crecimiento del capital en las empresas. En general, la intervención del Estado en el ámbito económico debía ser contraproducente en la medida en que siempre tales intervenciones se hacían en nombre de los intereses de sectores sociales específicos en desmedro de la iniciativa individual.

El objetivo ideológico cardinal de la reacción neoconservadora, o la idea que fundamentaba sus discursos era el valor de la libertad amenazada por la intervención estatal. La declaración fundacional de la sociedad de Mont Pélerin muestra el contenido reactivo de su pensamiento:

Los valores centrales de la civilización están en peligro. Sobre grandes extensiones de la superficie del planeta las condiciones esenciales de la dignidad y de la libertad humanas ya han desaparecido. En otras, están bajo constante amenaza ante el desarrollo de las tendencias políticas actuales. La posición de los individuos y los grupos de adscripción voluntaria se ve progresivamente socavada por extensiones de poder arbitrario (...) El grupo sostiene que estos desarrollos se han nutrido de la propagación de una visión de la historia que rechaza toda pauta moral absoluta y por el crecimiento de teorías que cuestionan la deseabilidad del imperio de la ley. Sostiene adicionalmente que se han visto estimulados por la declinación de la fe en la propiedad privada y en el mercado competitivo; por cuanto sin el poder difuso y la iniciativa asociados a estas instituciones, es difícil imaginar una sociedad en la cual la libertad pueda ser efectivamente preservada (citado por Harvey 2007, pp. 26-27).

Un gasto social alto atentaba contra el logro supremo de cualquier gobierno racional: la estabilidad monetaria. La disciplina presupuestaria sería el punto de partida para recuperar la *naturalidad* necesaria de los procesos socioeconómicos. Pensaban que la intervención de criterios políticos y sociales en el ámbito económico suponía una desnaturalización que afectaba la salud del sistema capitalista. Era preciso contar siempre con una tasa

saludable de desempleo que garantizara en algún momento de contingencia la creación espontánea de un *ejército de reserva* capaz de sustituir trabajadores o contener a los sindicatos.

El impulso hacia las reformas fiscales que implicaban reducciones de impuestos sobre las ganancias debían ser parte de las políticas que intentaban excitar la iniciativa de los sectores privados. Esto, vinculado con la puesta en práctica de otras políticas que buscaban el debilitamiento del Estado como actor social y económico fundamental. Un sistema capitalista de libre mercado debía contar con un Estado reducido a ser garante de orden social. Estos objetivos servirían para crear las condiciones que fomentaran la formación de una desigualdad social *natural* que era funcional al capitalismo. Harvey, en su trabajo *Breve historia del neoliberalismo*, relata la expansión de las ideas neoliberales desde los ámbitos políticos y académicos, incluye los grupos que financiaron esta experiencia, etc. El detalle de esa trayectoria no tiene interés para los fines de esta investigación. Sin embargo, un momento importante del prestigio que fueron acumulando las propuestas neoconservadoras debió ocurrir en el momento en que dos figuras “fundadoras” del credo recibieron el Premio Nobel de Economía: Hayek en 1974 y Friedman en 1976, otorgados luego de que los grupos bancarios suecos hicieran su trabajo de promoción detrás del escenario (ibíd., p. 98).

Pronto llegaría la oportunidad de poner en práctica las ideas que conformaban esta reacción. En 1979 llegaba al poder en Inglaterra Margaret Thatcher, una política que había sido lideresa del partido conservador y gobernó su país entre 1979 y 1990. El primer ensayo confeso que intentaría llevar adelante las orientaciones de Hayek. Pero en 1980 llegó al poder en Estados Unidos un fuerte socio de la Dama de Hierro, Ronald Reagan; y en 1982 ganaría las elecciones en Alemania Occidental, Helmut Kohl. En 1983, en las más altas instancias del Estado se promovieron proyectos neoliberales liderados por Schluter. En breve, la ofensiva de la derecha iba a extenderse a la mayoría de los países del norte de Europa occidental.

En el continente europeo los proyectos neoliberales mostraron alguna cautela, distinta en todo caso a las expresiones más

extremas de los países anglosajones. Por esa misma década de los ochenta, también llegaban gobiernos que se reivindicaban de tradiciones de izquierdas, pero que implementarían políticas de ajuste: Felipe González, en España; Mitterrand, en Francia; Craxi, en Italia; Soares, en Portugal. Aunque el gobierno de Francia y de Craxi mostraron al principio preocupaciones que expresaban fidelidad a las ideas progresistas que los llevaron al poder de sus estados, más adelante se vieron compelidos por el sistema financiero internacional a reproducir pautas de ajustes macroeconómicos en sus políticas.

En todo caso, lo que rebelan estos acontecimientos es que las políticas ortodoxas neoliberales eran transversales a gobiernos propiamente de derechas y socialdemócratas. Esto habla, más allá de algunas diferencias epidérmicas, de la avanzada de una ideología que iba a trascender hasta el punto de que se puede detectar, por ejemplo, la continuación de un *thatcherismo* sin Thatcher. Pero también la expansión de un conjunto de principios fuera de Europa y de Estados Unidos, que iban a permear todo intento de intervención política en muchos gobiernos del mundo sin importar los orígenes ideológicos.

En este estricto sentido pareciera razonable compartir la percepción, sobre todo para las décadas del ochenta y del noventa, de estar en presencia del fin de las identidades divididas entre izquierdas y derechas. Por el contrario, en la lógica neoliberal, los proyectos de ajustes se desplegaban como emancipados de aquellas parcialidades ideológicas gestadas desde la Revolución Francesa (Anderson 1999).

Más tarde, con la caída del Muro de Berlín, los gobiernos a los que les impusieron la transición hacia el capitalismo, pusieron en práctica principios neoliberales específicos, identificados con el tipo de capitalismo defendido por Thatcher y Reagan (ibíd., p. 67). La caída de la Unión Soviética y de sus países aliados comportó una nueva legitimación del neoliberalismo, esta vez en una fase francamente mundial.

Por una razón sencilla, la dictadura de Pinochet (1973-1990) fue una fuente ideal para los experimentos neoconservadores.

Ahí la democracia representativa había desaparecido, y los derechos de los trabajadores, las regulaciones económicas, el sistema de protección social, y en general la concertación entre fuerzas “distintas” estaban fuera de las preocupaciones de la dictadura. El poder del Estado estaba ocupado por un régimen militar que lo había asaltado a través de un golpe en 1973. En todo caso, para los más radicales neoliberales, la democracia nunca había sido un valor superior que pudiera contravenir la más conveniente expansión del libre mercado. Si eventualmente las mayorías se inclinaban a favorecer, desde la óptica neoliberal, opciones políticas distintas a los principios generales del capitalismo, entonces se podía pensar en proscribir incluso la democracia.

Las coincidencias ideológicas estaban presentes; el gobierno de Thatcher siempre tuvo excelentes relaciones políticas con la dictadura de Pinochet. De modo que ocurría un caso inusual: un país de la periferia del sistema capitalista pasaba a representar una experiencia interesante de la que tomaron nota los funcionarios gubernamentales de Inglaterra en los tiempos de Thatcher (ibíd., p. 98). Pero más aun, los países de América Latina fueron un territorio de experimentación que les sirvió a los políticos de la Europa del Este, luego del fin del socialismo, para impulsar los planes que anunciaban la “vuelta” al capitalismo en una versión bastante salvaje.

En América Latina, los procesos de ajuste se relacionan bien en los discursos que pretendieron legitimar esas tentativas con la globalización, la democratización, en tanto que lucha contra la centralización, la sociedad civil contra los partidos políticos, y sus “desviaciones” populistas o revolucionarias, la reivindicación del poder local, la meritocracia en lugar de prácticas clientelares, etc. Estos objetivos le iban a dar al proyecto neoliberal un impulso inicial que determinó la incorporación de sectores importantes de la población, especialmente porciones de las capas profesionales. Progresivamente, valores extendidos socialmente en el continente como la independencia y la soberanía nacional fueron sistemáticamente minados o relativizados por un discurso que privilegiaba una versión de los derechos humanos contra los

abusos del Estado central, y una versión de la modernidad, según la cual la vinculación con los procesos de la globalización y de la integración de los mercados eran las únicas vías racionales para el desarrollo (Harvey 2007).

Los proyectos de ajuste los anteceden en el continente, presentados convencionalmente por estudiosos como formas de transición hacia la democracia por parte de países asolados por dictaduras militares, instauradas para contener movimientos de izquierda o populistas potencialmente revolucionarios, o se trataban de justificar como parte de planes que buscaban vigorizar a democracias desprestigiadas por represivas, corruptas o en general limitadas, propias de sistemas políticos institucionalmente débiles, etcétera.

Sin embargo, cuando las políticas de ajuste se trataron de llevar adelante en México con Salinas de Gortari (1988-1994), en Venezuela con Carlos Andrés Pérez II (1989-1993), Alberto Fujimori en Perú (1990-2000), o Fernando Collor de Melo en Brasil (1990-1992), todos sin excepción contribuyeron a debilitar aún más las instituciones de sus países, al tiempo que fortalecieron su carácter presidencialista. Llama la atención que ninguno de estos gobiernos se haya apoyado en sus partidos, más allá de sus campañas electorales, como las instancias institucionales más recomendables para adelantar transformaciones de entidad (Ellner 2005). Más bien, como en el caso de Pérez, o la experiencia más extrema de Fujimori, los partidos del establecimiento jugaban un papel marginal.

La mengua de los partidos políticos en América Latina precedió el auge del neoliberalismo, pero una vez en el poder y al calor de las reformas, la evolución de ese desprestigio se profundizó. De esto se hablará al momento de examinar el contexto venezolano. Uno de los puntos culminantes del esfuerzo por ubicar regularidades y pautas reconocibles en el desenvolvimiento político del continente en los años de los ajustes macroeconómicos fue que los candidatos que los llevaron adelante no reconocieron las verdaderas orientaciones de sus propuestas de gobierno en sus campañas electorales a la presidencia.

El propio Carlos Andrés Pérez (1989-1993) hablaba de volver a los tiempos de los petrodólares. Los venezolanos votaron por él, confiados en el retorno de la Gran Venezuela. Carlos Menen se refugió, para no abundar en los planes reales, en los tiempos redistributivos de Perón; Fujimori en Perú acusó a su contendor, el escritor Mario Vargas Llosa, de neoliberal puro. En verdad ambos eran neoliberales, el primero porque lo demostró en su represivo gobierno, y el segundo porque no ha tenido la intención de ocultarlo.

Es seguro que la frustración experimentada por los sectores de la población que los apoyaron, de sentirse engañados, haya provocado la caída de los presidentes Collor de Melo, de Brasil; Abdalá Bucaram, en Ecuador; y Gonzalo Sánchez de Losada, en Bolivia. Pero esto trajo consecuencias más trascendentales, relacionadas con el impacto social de las medidas, el descrédito de los políticos y del sistema democrático en general (ibíd. p. 89). Las formaciones socialdemócratas fueron incapaces de articular una estrategia de defensa del modelo de Estado social, construido en parte por ellos, cuando no participaron directamente para llevar adelante los planes neoliberales. Para ello contaban, en muchos casos, con las aristocracias sindicales que habían logrado ocupar un amplio espacio en las luchas reivindicativas; el caso venezolano de la Confederación de Trabajadores de Venezuela es un ejemplo. Su función en muchos casos fue de desestimar las acciones de los trabajadores en defensa de sus derechos.

Los objetivos económicos más ambiciosos del proyecto neoliberal no han tenido, en general, el éxito que aseguraron sus fundadores más comprometidos. La revitalización del capitalismo no ha ocurrido y el mundo presencia una nueva crisis cíclica del sistema. Sin embargo, en términos sociales los “adelantos”, desde la perspectiva de los defensores de ese proyecto, se pueden detectar, como la formación de sociedades cada vez más desiguales. Pero en términos ideológicos o culturales, los éxitos parecen más notables. ¿Se trata entonces de una hegemonía cultural como la llama Anderson (1999)?, en cuanto ha terminado por instalarse en el sentido común de millones de personas, asumida como

certeza, según la cual las normas y los principios que fundamentan el neoliberalismo han permanecido de alguna manera incontestados. Esto podría ser cierto en varias regiones del mundo, pero hablar de *hegemonía* parece exagerado. En América Latina y en Venezuela, especialmente, las proposiciones que anunciaban la implementación de ajustes estructurales nunca tuvieron apoyo popular.

Fuera de Venezuela, una de las respuestas más consistentes la encabezaron los indígenas de México: tzotziles, tzeltales, tojolabales y choles, agrupados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El 1° de enero de 1994 se supo del levantamiento armado que estaban protagonizando a través de las noticias y de la Primera Declaración de la Selva Lacandona.

Progresivamente se iba a conocer, de la mano del subcomandante Marcos, un importante dirigente del movimiento, el contenido de unas propuestas innovadoras. Entre otras cosas rescataban el contenido ético y comunitario de la política, de alguna manera esta vez recreada con las formas de organización indígena y el sentido de sus prácticas inmemoriales. También se distanciaban del tradicional objetivo de los movimientos revolucionarios del siglo xx, especialmente identificados con el leninismo, consistente en la estrategia de que había que tomar el poder del Estado para emprender desde ahí la revolución. Preferían más bien fortalecer y transformar desde la sociedad civil al resto de la sociedad mexicana. Pero lo importante, a los fines de la investigación, era la concentración de sus señalamientos en un ataque sistemático al neoliberalismo. Varias fueron las caracterizaciones que dieron los insurgentes a aquella avanzada del sistema financiero internacional.

En una entrevista realizada para el periódico uruguayo *Brecha*, en 1996, el subcomandante Marcos adelanta algunas ideas que van a constituir el nuevo escenario de las luchas en contra de otra etapa del sistema capitalista. Dos ideas resultan sugerentes de este fragmento de la entrevista: primero, la destrucción del Estado nacional, es decir, la nación con todo y sus clases dirigentes; segundo, y como consecuencia de la primera caracterización, el

deber de los procesos revolucionarios de privilegiar el rescate del concepto de nación, pero en circunstancias distintas a las forjadas en la primera mitad del siglo xx. En «El neoliberalismo enemigo de la tierra, de la historia y de la cultura palabras del subcomandante Marcos del ECLN» (1997) del se recogen importantes ideas planteadas por el subcomandante Marcos:

Nosotros estamos planteando que en la nueva etapa del capitalismo, el neoliberalismo, se da una destrucción del Estado nacional. Para nosotros, una tesis fundamental del frente nacional es la existencia de una burguesía nacional. Nosotros decimos que no hay patria. Se destruye el concepto de nación, de patria, no sólo en la burguesía sino incluso en las clases gobernantes. (...) El proyecto neoliberal exige esta internacionalización de la historia; exige borrar la historia nacional y hacerla internacional; exige borrar las fronteras culturales. El gran costo para la humanidad es que para el capital financiero no hay nada, ni siquiera patria o propiedad. El capital financiero sólo tiene números de cuentas bancarias. Y en todo ese juego se borra el concepto de nación. Un proceso revolucionario debe comenzar por recobrar el concepto de nación y de patria (p. 391).

Sondeos neoliberales en Venezuela

Antes de seducir el campo propiamente político, varios años antes de que existiera un programa de ajustes macroeconómico implementado desde el Estado central, las ideas neoliberales en Venezuela fueron defendidas y socializadas por intelectuales con creciente ascendencia en el ámbito empresarial. El libro ya clásico que reúne lo que llamaré el *sentido común* de una porción importante de estos sectores fue el trabajo del periodista Carlos Rangel (1991), *Del buen salvaje al buen revolucionario*, publicado por primera vez en 1976, pero con sucesivas ediciones posteriores.

El ánimo que lleva a Rangel a trabajar en un libro de este tipo tiene que ver con un proyecto político-intelectual ambicioso. El periodista trata de responder la pregunta de por qué el continente latinoamericano, Venezuela incluida, se mantiene en un estado

de pobreza y subdesarrollo, a pesar de haber transcurrido casi dos siglos de vida independiente. La pregunta sobre el problema del subdesarrollo para el momento en que el autor la plantea tiene pertinencia. En aquel contexto las élites políticas dominantes en cada estado, los movimientos revolucionarios en la región y la producción de conocimientos en las universidades, al tiempo en que prometen y tratan de darle curso al cambio social con sus distintas intensidades, igualmente prometen el desarrollo. Pero el punto de partida de Rangel quiere ser en primera instancia polémico:

Si nos proponemos calificar esos casi cinco siglos de historia latinoamericana en la forma más sucinta, pasando por encima de toda anécdota, de toda controversia, de toda distracción, yendo al fondo de la cuestión antes de desmenuzarla, lo más certero, veraz y general que se puede decir sobre Latinoamérica es que hasta hoy ha sido un fracaso (ibíd., p. 26).

El párrafo contiene una tesis relativa al *fracaso* del conjunto de las naciones latinoamericanas y caribeñas. Lo demás es retórica que pretende reforzar la afirmación. Pero en principio la tesis no es sostenible, se fundamenta en una generalización que termina siendo frágil. Los argumentos que esgrime son múltiples. Unos provienen de los elementos específicos de la conformación histórica de las sociedades latinoamericanas, como la herencia española, la presencia o la incidencia de las sociedades indígenas, y fundamentalmente la construcción de un conjunto de mitos que han impedido a las naciones de lo que Rangel llama *la América Española*, una incorporación plena y sin complejos al mundo desarrollado. Curiosamente el autor no define conceptualmente a qué se refiere cuando introduce la noción de mito. Producto de esta situación, probablemente a lo largo de la obra lo sustituye por otras menciones que no parecieran sinónimos: complejos, extravagancia, prejuicios, mitología.

En todo caso, según Rangel, del peculiar proceso histórico latinoamericano se fraguaron tipos nacionales que comparten en

síntesis el mito del buen salvaje. En lo adelante, la pesada herencia se va a traducir en el impedimento cultural de crear sociedades de prosperidad, sobre todo luego de la expansión de Estados Unidos en el mundo, lo que resulta inaceptable para el común de los ciudadanos del continente latinoamericano, según el periodista. La creación de los mitos funciona de igual modo como un poderoso distractor de la frustración del ser latinoamericano; se trata de un recetario muy eficaz para una y otra vez hacer de los vicios que produce la *cultura latinoamericana*, las señas distintivas de un pueblo virtuoso. En este contexto, la llegada del marxismo y de su expresión más acabada, la *teoría de la dependencia*, le ofrecen al ahora buen revolucionario el relato perfecto para ya no tropezarse, sino para solazarse con la misma piedra que le mantiene anclado en su estadio de desarrollo infantil:

No precisamente el marxismo, sino más bien la teoría leninista del imperialismo y la dependencia, ha venido en nuestra época a ofrecer una respuesta por fin coherente, persuasiva, grandiosa y verosímilmente triunfalista al complejo de inferioridad crónico que sufrimos los latinoamericanos con relación a los Estados Unidos (ibíd., p. 145).

Rangel se detiene para justificar el golpe de estado en Chile (1973) en contra del proceso que llevaba adelante la Unidad Popular. Igualmente, se concentra en explicar la aparición de una nueva izquierda en Venezuela, encarnada en el Movimiento al Socialismo. Estos dos procesos que implicaron alguna renovación del campo de la izquierda serían la última expresión del buen salvaje trocado en buen revolucionario. Pero el temor de Rangel partía del hecho según el cual la configuración histórica de los estados latinoamericanos que practicaban la intervención económica —además de impedir el libre desarrollo de las iniciativas individuales, esto es, empresariales—, habían reforzado algunas condiciones, digamos culturales, que podrían en momentos de crisis de las formaciones políticas ya tradicionales, propiciar la asunción de la izquierda al poder de los estados.

Rangel sostuvo en su trabajo que la intención del libro era develar mitos, frustraciones no asumidas, poner de presente las perversiones que mostraban a sus ojos las “enfermas” sociedades latinoamericanas. En realidad, el trabajo termina mostrando otros “mitos”, pero esta vez serán los provenientes de las élites latinoamericanas, sobre el conjunto de sus sociedades, y particularmente sobre los sectores populares. *Del buen salvaje al buen revolucionario* no es un libro riguroso, lleva en su contenido una buena porción de sentido común, como se afirmó al principio. Es además la historia sentimental de una culpa, cuyos señalamientos van dirigidos hacia una supuesta incapacidad del pueblo por “ingresar” al desarrollo. El autor no se problematiza las vías que históricamente ha tomado ese desarrollo, ni los presupuestos que supuso un concepto con tantas implicaciones políticas, ideológicas o morales, mucho menos la pertinencia o no, incluso, *de alcanzarlo*. Es como si *la carrera* por el progreso fuera natural. Entonces *Del buen salvaje* es una historia *natural* de una vieja culpa.

Al historiador Manuel Caballero, en su momento, le llamó la atención este giro del pensamiento conservador *tardío* de las últimas décadas del siglo xx, que al contrario de las tradiciones conservadoras intelectuales del siglo xix, éste no quiere decir su nombre, al tiempo que le niega a la revolución, específicamente a la revolución latinoamericana, ser otra expresión de racionalismo político radical. De este modo, lo plantea Caballero al comienzo de un artículo:

A diferencia del pensamiento conservador clásico, el pensamiento reaccionario no se concibe sino en presencia de una revolución. Y a diferencia del pensamiento reaccionario clásico, para el cual el racionalismo y la revolución eran hijos del mismo vientre y vientres del mismo hijo, un cierto pensamiento reaccionario contemporáneo prefiere oponer ambos movimientos (1988, p. 12).

En realidad las ideas neoconservadoras hacia finales del siglo xx buscan legitimidad y proyección social reclamando para sí, su condición de hacer parte del proyecto ilustrado. Es lógico que

ocurriera así. Este giro es testimonio de la hegemonía liberal que cubrió el campo cultural de la modernidad capitalista. La idea de Rangel, según la cual la crisis de los modelos de partidos que propiciaba la intervención económica, sobre todo en Venezuela, podría crear las condiciones para que la izquierda tomara el poder, tuvo quien la ampliara. Desde la misma perspectiva sostenida en *Del buen salvaje al buen revolucionario*, el trabajo de Aníbal Romero, *La miseria del populismo* (1986), intenta contextualizar de forma más coherente los argumentos que recogió Rangel. Romero aplica las tesis de Rangel, específicamente para el caso venezolano. El punto de partida es que aunque Venezuela ha mantenido un proceso democrático que durante los años ochenta lucía como un experimento destacable, sobre todo en comparación con otras experiencias de la región, el modelo económico ensayado invariablemente por los partidos dominantes, socialdemócratas y socialcristianos no ha sido correcto. La promesa de la distribución general de la renta petrolera es funesta, porque ha entorpecido la iniciativa privada y la sana competencia.

Otro texto que da cuenta de un proyecto defendido por algunos intelectuales y empresarios es el de Marcel Granier. Acá los intereses se aprecian en forma más nítida. No en balde, Granier incursionó en el mundo de los medios privados de comunicación con cierto éxito; fue un importante gerente de las empresas IBC, y director del canal de televisión Radio Caracas Televisión (RCTV). *La generación de relevo vs el estado omnipotente* (1984) es en términos generales la expresión panfletaria de una generación de empresarios interesados en tomar las riendas del país, una vez que a los partidos tradicionales les llegara su hora. El título de su libro resulta elocuente; al enunciar el tema “generacional” le ofrece al lector cierta frescura que contrarresta con *el estado omnipotente*. Esto es, con los políticos y sus partidos ya disminuidos. Para Granier, las lógicas políticas, sus cálculos que permanentemente conspiran en contra de la *meritocracia* vienen devaluando el modelo implantado desde 1958. Las políticas estatales, en nombre de la justicia social, terminan neutralizando al individuo libre. El planteamiento a ratos hace llamados a la

activación de la *generación de relevo* para alertarle sobre la inminencia de las *ideologías totalitarias*. Aquí parece que Granier logra dar con el sujeto aún cautivo de su revolución conservadora:

Somos casi medio millón de empresarios en Venezuela, si por empresario se entiende a quien organiza y combina factores de producción de cualquier magnitud, tenemos un credo común, basado sobre la libertad y la justicia, y estamos seguros de que el cabal cumplimiento de esos postulados es la única arma sólida que dispone la democracia para hacer frente a los embates cada vez más sostenidos de las ideologías totalitarias (1984, p. 12).

Para Granier, las prevenciones para que la generación de relevo se plantee el poder político provienen de lo que ocurría en Centroamérica. La cruenta guerra civil de los años ochenta que asoló la región podría trasladarse a Venezuela, una vez que el modelo económico que defiende los partidos comience a presentar problemas, como en efecto estaba ocurriendo para el momento en que el autor apura sus reflexiones:

Si queremos evitar la crisis social que se avecina, y salvar nuestro sistema de vida; si no queremos transformarnos a corto plazo en otra onda expansiva del terrible volcán que ha estallado en Centroamérica, es preciso modificar rápidamente nuestro modelo económico y sanear también, con la mayor premura, las bases políticas de nuestra democracia (ibíd., p. 158).

Las prevenciones de estos tres escritores sobre la inminencia de una crisis que pudiera desestabilizar los regímenes del continente ocurrió, pero no como efecto inmediato de las políticas de intervención económica, sino como producto del descontento que provocaron los proyectos neoliberales que ellos defendían. El mismo año en que aparece el libro de Granier comenzaba la gestión de Jaime Lusinchi. Para ese momento las contradicciones en el modelo impulsaban a los dirigentes de entonces a tratar de introducir algunos correctivos. Aunque en rigor el plan de restructuración económica del gobierno de AD y Lu-

sinchi (1984-1989) no se puede calificar como neoliberal, entre otras cosas porque no estaba orgánicamente vinculado al Fondo Monetario Internacional, y el Estado conservó la primacía como instancia para la regulación económica, algunos de sus objetivos sí se pueden ubicar en las lógicas de las políticas de libre mercado¹⁰. Estas medidas puntuales convivieron durante el período con cierto impulso al ámbito agropecuario, y una baja de las tasas de interés¹¹.

Era claro que desde el propio grupo gobernante aún no existía un consenso suficientemente fuerte como para llevar adelante un programa neoliberal como el que se va a tratar de implementar en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, desde 1989, y en el segundo gobierno de Rafael Caldera (1994-1999), luego de que vacilara en sus primeros años. En tanto, a lo interno del gobierno de Jaime Lusinchí pronto se producen algunas contradicciones

10 La aplicación de políticas monetaristas no comenzó en 1989. Lo que ocurre en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez es un ajuste ortodoxo, direccionado desde el Fondo Monetario Internacional. Pedro Castro señala: «es muy importante, para el estudio de la coyuntura del ajuste ortodoxo de 1989, dejar claro que los procesos de ajuste monetarista no comenzaron en esta fecha, sino en el período inmediatamente posterior al fin del primer gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez en 1979, cuando un nuevo gobierno, encabezado por Luis Herrera Campins, inicia estos procesos monetaristas de estabilización económica» (2000, p. 153).

11 Margarita López resumió los planes que se pensaban practicar desde 1984: «nueva devaluación del bolívar y establecimiento de un sistema cambiario con cuatro tipos de cambio diferenciales; medidas compensatorias no salariales para aminorar el impacto del ajuste en la remuneración de los trabajadores en sustitución de los tradicionales aumentos generales de sueldos y salarios que decretaban con anterioridad los gobiernos. Se anunció un bono de transporte para los asalariados que devengaban menos de 3.000 al mes por un período de 2 años y el establecimiento de comedores industriales. Continuación y profundización del sistema administrativo de precios que venía desenvolviéndose desde el gobierno anterior y que en la práctica significó en lo siguiente una liberación de precios de bienes y servicios; aumento de precios de la gasolina y otros derivados de hidrocarburos en el mercado interno; voluntad de no aumentar la burocracia y reducir los gastos del funcionamiento del Estado» (2005, p. 23).

sobre la orientación de un plan que pretendía recuperar el país y al sistema bipartidista de la crisis que se había desatado desde 1983. En parte, el anuncio del VII Plan de la nación representa la propuesta programática de un sector del gobierno interesado en viabilizar salidas alternas a las medidas neoliberales (ibíd., p. 76).

Destaca, por ejemplo, una caracterización que calificaba como de agotamiento del modelo de crecimiento fundamentado estructuralmente en la fragua de la sociedad rentista, y llamaba la atención en consecuencia, sobre la conveniencia de que los adelantos sociales y políticos debían partir del esfuerzo productivo de los venezolanos. Si bien se planteaban escenarios de privatización, al parecer estaban dirigidos a fortalecer sectores de las capas medias y sociedad civil en general. Es llamativa su propuesta para la creación de un *Sistema Económico de Cooperación*, con el objetivo, al menos en teoría, de ampliar la concepción de propietarios hacia los sectores de trabajadores y profesionales; aunque las experimentaciones sucumbieron a los ruidos que crearon algunos empresarios atemorizados con la proposición de extender los márgenes de la propiedad privada hacia otros sectores sociales, este plan no se mantuvo luego de 1984 (ibíd., p. 76).

Lusinchi ganó las elecciones presidenciales con 56% de los votos emitidos, contra 30% de Rafael Caldera, su más cercano contradictor. Pero además su partido AD conquistó una notable presencia en el parlamento con 113 diputados y 28 senadores, lo que significaba una mayoría en las dos instancias que componían el antiguo Congreso Nacional (Fundación Polar 1997). Esto tenía algunas implicaciones lógicas pero también aparentes, la primera era que el sistema político de Punto Fijo conservaba una importante dosis de legitimidad en las preferencias de las mayorías. Para ese momento, pese al carácter represivo del gobierno en contra de los sectores disidentes, la formación cada vez más notable de una clase política cuestionada por corrupta, y la disfuncionalidad de un sistema que ya no respondía a las demandas populares, no se había generado, hasta el momento,

una respuesta general que pusiera en peligro la continuidad de aquel modelo.

En el mismo 1984, acaso aprovechando el impulso de los primeros años, se creó por decreto presidencial la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre). Su intención, puesta en el mismo decreto, era la constitución de un Estado moderno, democrático, eficiente, capaz de hacer realidad las aspiraciones republicanas contenidas en la *Constitución de la República de Venezuela* de 1961. La instancia creada buscaba revitalizar la democracia liberal de Punto Fijo. La Copre comenzó sus deliberaciones en 1985, presididas por el historiador Ramón J. Velásquez. Las propuestas de reforma cubrían un amplio espacio, lo cual permitía una evaluación general; sugería, por ejemplo, el impulso hacia un proceso de descentralización, la democratización de las inmovibles estructuras de los partidos políticos, cambios a la Ley Orgánica del Sufragio, elección popular y directa de los gobernadores de las entidades federales, quienes eran elegidos, hasta ese momento, por nombramiento presidencial; por enumerar algunas propuestas. Aunque finalmente el conglomerado dominante desdeñó la mayoría de las recomendaciones que les hicieron llegar desde la Copre, la experiencia no es despreciable en líneas generales.

Solamente las movilizaciones populares escenificadas a partir del 27 de febrero de 1989 provocaron en la dirigencia política y empresarial de entonces –probablemente en medio de un ambiente general signado por el temor– el impulso por convertir en leyes, algunas de las propuestas diseñadas por la Copre, como la elección de gobernadores y alcaldes.

En 1986, el gobierno se vio forzado a imponer una nueva devaluación en apuros de la moneda, porque los precios del petróleo estaban en baja. También se logró refinanciar la deuda externa, luego de que se cumpliera con las exigencias del sistema financiero internacional. El gobierno de Jaime Lusinchi fue acusado de forma particularmente insistente de asuntos relacionados con corrupción administrativa. Los casos están aún depositados en

la memoria de muchos venezolanos que presenciaron un espectáculo que se había hecho bastante regular.

Las *irregularidades* en Aeropostal y la detención del ministro de Transporte, Vinicio Carrera; la apertura de un procedimiento administrativo al presidente de la Cantv; la detención de ex miembros de la Junta Directiva del Banco Industrial de Venezuela, producto de manejos dolosos con conexiones a grupos empresariales en Miami en 1989; el juicio a tres ministros de la defensa, inculpados por irregularidades como la compra de armas de guerra; la acusación contra un ex gobernador del Distrito Federal, procesado por estafa a la nación, cuando en su gestión se puso en práctica la reparación de la carretera que comunican los poblados de Chuspa-Osma, fueron algunas situaciones que produjeron disconformidad durante el gobierno de Lusinchi. Aunque el gobierno en un primer momento posibilitó las investigaciones judiciales, la mayoría de estas personas dejaría el país o fue declarada inocente en breve (ídem).

Aunado a esta situación, el propio Presidente se vio afectado directamente por el crecimiento desproporcionado del poder de incidencia de su secretaria privada, la señora Blanca Ibáñez, quien años más tarde sería su esposa. Los escándalos vinculados a la capacidad de mando, concentrada bajo el puño de una funcionaria tan cercana al presidente, contribuyeron notablemente al desprestigio del conglomerado dominante (Aniyar de Castro 1992). El país se enteraba a través de distintas formas del despliegue de poder que Ibáñez llegó a mostrar, mientras que desde el gobierno de forma soberbia se intentaban reprender o contener los cuestionamientos sobre la conducta dislocada del presidente venezolano. De esta manera, la prensa fue sujeta a diversas presiones, unas más descaradas que otras, que buscaban impedir la difusión de información relacionada con la conducta cuestionable del estamento político.

Otro acontecimiento que colaboró en ese proceso de descomposición del conglomerado dominante ocurrió luego del establecimiento de la oficina del Recadi, adscrito al Ministerio de Hacienda. El objetivo de esta nueva institución, fundada como parte

de las medidas que se produjeron a partir del Viernes Negro, fue administrar las divisas que el Estado destinaba a los sectores empresariales para emprender sus negocios. Al parecer, la complicada madeja de criterios que se elaboraron para la distribución de los *dólares preferenciales* propició una creciente discrecionalidad de algunos funcionarios, lo que preparó las condiciones para el enriquecimiento ilícito de sectores empresariales y políticos en alianza. Una de las figuras estelares para validar y viabilizar aquellos procedimientos signados por la corrupción administrativa fue Ibáñez.

Al final del período de gobierno de Lusinchi se tomó la decisión política de expandir el gasto fiscal para conquistar altos niveles de popularidad, de esta forma Acción Democrática permanecería como partido en funciones de gobierno, luego de las elecciones de 1988. Sin embargo, esta decisión iba a propiciar otros problemas que tuvieron incidencia más adelante; las reservas internacionales disminuyeron de forma alarmante, lo que determinó, en el contexto de una situación de emergencia, la declaratoria de una moratoria de la deuda externa a tan sólo días de entregar la presidencia a su compañero de partido Carlos Andrés Pérez.

Mientras que las encuestas y los resultados en las urnas señalaban un apoyo popular hacia los partidos del establecimiento como una expresión acaso superficial, otras señales más estructurales apuntaban a situaciones que progresivamente iban a ser más determinantes. La imposibilidad cada vez más clara de que el Estado tuviera la capacidad de satisfacer una parte de las demandas populares, significó el surgimiento de sectores cada vez más beligerantes que tarde o temprano iban a confrontar de forma sistemática con el sistema político de entonces.

Progresivamente se iban a originar algunas condiciones subjetivas, orientadas hacia aquellos sectores más vulnerables a la crisis económica y política. Pronto, estos sectores tomarían conciencia de su fuerza colectiva para cambiar situaciones que les eran puntualmente adversas. Esta fue una de las condiciones para que se pudiera operar un proceso creciente de protesta popular.

Esto último puede llamar la atención, sobre todo si se tiene en cuenta qué porciones previamente no politizadas de la población no acostumbraban sumarse a la protesta si no veían posibilidades concretas de lograr determinados resultados.

De modo que la crisis política, las dificultades económicas y los planes neoliberales que contravenían punto por punto el contenido de una democracia que había conquistado su legitimidad en su carácter redistributivo se relacionaron bien con una progresiva autoconfianza de los sectores populares en la conquista de resultados positivos. Estos rasgos potenciaron las protestas populares ocurridas en el escenario social, sobre todo en la década de los noventa, como se verá de seguidas.

El marzo merideño (1987) y la masacre de El Amparo (1988)

Uno de los síntomas que ha sido pocas veces tomado en consideración para evaluar los malestares que venían gestándose en el cuerpo de la nación fue el *marzo merideño* de 1987. Es probable que esto sea así porque la revuelta estudiantil y luego popular no estalló en Caracas, aunque sí se extendió hasta la capital. Convencionalmente se toma sin discusión previa la idea según la cual Caracas es necesariamente el centro de todos los acontecimientos de importancia. Pero precisamente lo que ocurrió en Mérida pone de manifiesto la debilidad de este prejuicio. Está claro que aquellos acontecimientos que se precipitaron como consecuencia del asesinato del joven Luis Carballo, estudiante de la Universidad de Los Andes (ULA), daban la impresión, particularmente para los sectores que intervinieron en la protesta, de que aquel crimen iba a quedar impune, entre otras cosas porque el asesino era considerado un individuo con influencias y recursos para campear cualquier eventualidad que buscara responsabilizarlo.

Los graves sucesos tuvieron incidencia nacional, pero tienen un principio bastante mundano. El 13 de marzo de 1987, el estudiante universitario de Ingeniería, Luis Carballo, cayó abatido

por efecto del impacto de dos balazos propinados por un abogado molesto, porque el estudiante se había orinado en las puertas de su propia casa; la muerte de Carballo sucedió en poco tiempo (Pergolis 2002). En un primer momento una masa de personas indignadas estaba dispuesta a linchar al asesino. La percepción general era que aquel sistema de justicia iba a ser inoperante para llevar al abogado a pagar el atrevimiento de matar a un joven de la universidad. La intervención de la Disip fue oportuna para salvarle la vida al asesino, pero no pudieron evitar que se saqueara íntegramente la casa del abogado, quien se decía pertenecía a Acción Democrática.

Una vez conocido el fatal desenlace de Carballo comenzó una jornada de protestas que permaneció activa por cinco días. La dirección de las movilizaciones rebela una lectura política por parte de quienes se arrojaban a la calle, es decir, no solamente fueron blancos por la presión de la multitud, la quema de autobuses, enfrentamientos con la policía, saqueos en comercios, sino que también la casa de AD y algunos almacenes militares estuvieron entre los establecimientos afectados. En este contexto, las clases fueron suspendidas y la Guardia Nacional tomó control de la situación, desplegando una represión desmedida. Pero las protestas también se extendieron a otras ciudades como Caracas, Maracay y Barquisimeto. Entre los saldos más inmediatos se cuentan, al menos en Mérida, veinte heridos, quinientos detenidos y unos diez millones de bolívares en pérdidas (López 2005). Las protestas continuaron en las semanas sucesivas, pero de manera focalizada. La obligatoriedad de procesar al abogado se debió al carácter drástico y generalizado de las protestas.

La respuesta a las solicitudes de justicia de los estudiantes en el marco de las protestas nacionales fue que quienes estaban incurso en las movilizaciones eran parte de grupos de ultraizquierda que buscaban deslegitimar la democracia. Así lo hizo saber el propio presidente Lusinchi. Las declaraciones de funcionarios del gobierno, como el entonces ministro del Interior, José Ángel Ciliberto, intentaban, en suma, separar las protestas de las razones que las impulsaban, como el crimen contra el estudiante de la ULA.

De esta forma, trataban de dar la idea de que aquellas movilizaciones tenían únicamente implicaciones políticas y subversivas. Aunque la prensa recogía las interpretaciones de integrantes del gobierno, relacionando las protestas incluso con conspiraciones internacionales; otras declaraciones daban cuenta de la existencia de grandes inconformidades sociales, que transcendían el ámbito político (*El Nacional*, 20-23 de febrero de 1987).

El otro suceso cuyas implicaciones fueron innegables, al tiempo que expresaba los síntomas de desgaste propios de la dinámica política puntofijista, fue la masacre de El Amparo¹². Los hechos que el país conoció posteriormente comenzaron el 29 de octubre de 1988, a meses de la culminación constitucional del gobierno de Jaime Lusinchi. En los primeros momentos, la cobertura de los medios de comunicación se limitó a relatar el supuesto según el cual en la frontera con Colombia en el estado Apure, integrantes del Cejap (Comando Especial de Contrainsurgencia José Antonio Páez) se habían enfrentado a una columna guerrillera integrante de los grupos insurgentes operantes en Colombia. Los guerrilleros estaban, según las primeras informaciones, interesados en volar una estación de bombeo de Corpoven del pozo petrolero de Guapitas (Rico, s/f). El resultado del enfrentamiento habría sido dieciséis muertos, todos de las fuerzas insurgentes. Esas informaciones se hacían acompañar de unas

12 Otros sucesos que aunque no tuvieron la misma incidencia en la población, sí representaron en su momento señales del talante represivo de la democracia de partidos, fueron la masacre de Cantaura y Yumare. En la región de Cantaura (estado Anzoátegui), el 4 de octubre de 1982, un grupo de guerrilleros del Frente Américo Silva fue sorprendido por una operación militar de envergadura que contaba con la participación del ejército, la aviación y la Disip. El estado de debilidad de las fuerzas guerrilleras no justificaba la magnitud del plan. Muchos de los combatientes fueron ajusticiados. Yumare es un poblado del estado Yaracuy, donde el 9 de mayo de 1986 comenzó una operación militar para aniquilar a un pequeño grupo de militantes reunidos en la *Corriente Histórico Social* que comenzaban a activar en la región. El exceso en la aplicación de la fuerza en estos dos acontecimientos está fuera de duda.

fotografías donde se veían cadáveres uniformados con insignias del Ejército de Liberación Nacional (ELN) (López 2005).

Poco tiempo después corrió otra versión de los hechos: no se trataba de guerrilleros colombianos, los muertos reseñados eran en verdad pescadores venezolanos que provenían de un pueblo fronterizo llamado El Amparo, quienes habían salido a pescar; la cifra de muertos por las fuerzas de seguridad venezolanas no era de dieciséis pescadores, sino de catorce. Los asesinatos habían ocurrido concretamente en el caño La Colorada, cercano al pueblo de El Amparo, una población que contaba con unos ocho mil habitantes (Uzcátegui, 2008).

De la masacre habían logrado escapar dos pescadores, José Augusto Arias y Wolmer Pinilla, quienes protegidos por la policía y los habitantes del pueblo impidieron que la Disip se los llevara, justificando que debía interrogarlos. Las tensiones llegaron a tal punto que intervino un diputado llamado Walter Márquez, militante del MAS, para mediar y tratar de conducir las averiguaciones. Otro diputado que también trabajó en defensa de los sobrevivientes fue Raúl Esté, miembro del PCV. Pese a las contundentes versiones que referían la existencia de una masacre perpetrada por efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado en la frontera con Colombia, las versiones del gobierno insistían en que se había tratado de guerrilleros que habían muerto producto de un enfrentamiento militar. El mismo presidente Lusinchi salió en defensa del grupo de oficiales responsabilizado de haber perpetrado aquellos asesinatos en contra de pescadores desarmados.

La protesta estudiantil se extendió a las universidades públicas e instituciones de educación media. Al tiempo en que hubo un enfrentamiento velado entre la justicia militar, interesada en producir una versión que encubriera lo sucedido y algunos sectores políticos, periodistas y defensores de los derechos humanos, que pugnaban porque se develaran los sucesos tal como habían ocurrido (Uzcátegui, 2008). Finalmente, en 1995 el Estado reconoció su responsabilidad en la masacre y se sometió a las resoluciones que produciría en 1996 la Corte Interamericana de Derechos

Humanos. Con todo, cualquier análisis hecho desde la perspectiva de la distancia temporal revela las formas de impunidad que habían cobrado los sectores privilegiados del régimen de entonces, pero también las respuestas cada vez más contundentes de los sectores populares.

La fase final del puntofijismo

El período que nos ocupa tiene relación directa con el momento de la crisis del sistema político creado a partir de 1958 en Venezuela, alrededor del cual funcionaban los partidos políticos como catalizadores de las demandas populares. El signo de aquel modelo descansaba en buena medida en la promesa de la distribución petrolera. Así, con el efecto poderoso de la distribución de la renta desde el Estado central, también se hizo susceptible a la expansión hegemónica de unos principios ideológicos directamente asociados a los grupos que hacen parte del conglomerado dominante de entonces. Por otra parte, es claro que este elemento estructural propio del modelo político contribuyó a aminorar los conflictos sociales que recurrentemente desestabilizaban, en general, al resto de los países del área. De ahí que una de las “sorpresas” con que se encontraron muchos analistas políticos o grupos de las élites de entonces, generadores de opinión desde los medios masivos de comunicación, fue el fin, a partir de los sucesos del 27 de febrero de 1989, del carácter manejable del pueblo venezolano.

Esta característica, según la cual un sistema político de partidos estuvo modelado por la promesa de la distribución del petróleo hacia una sociedad que sólo debía esperar esas bendiciones, tuvo su discurso correspondiente, a partir del cual el Estado iba

a ser el encargado de impulsar el desarrollo de una forma casi súbita. En los discursos del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, así como en el resto del establecimiento hasta su segunda administración, la noción de progreso descansaba casi exclusivamente en la promesa que albergaba la venta internacional del petróleo por parte del Estado central, la distribución interna de la renta, así como la visión estratégica de aquella alianza entre empresarios y políticos con alguna participación de las aristocracias sindicales. Con la garantía de esta “alianza de clases” que en breve sería vista popularmente como cúpulas excluyentes y burocratizadas, estaría asegurada la entrada de Venezuela al ámbito de las naciones desarrolladas.

La profundización del malestar general que desató el Viernes Negro tuvo en este lapso otras expresiones. Lo más visible por el momento era una tendencia hacia el desprestigio de los partidos, vistos ahora como instancias que impedían la participación popular, cuestionados sucesivamente como espacios para hacer todo tipo de negocios. Esta crisis general se acrecentaba mucho más cuando los precios internacionales del petróleo sufrieron una caída marcada por los esfuerzos que se hacían desde los países centrales del sistema capitalista mundial. Desde esta perspectiva ya el Estado nacional y sus partidos hegemónicos no tendrían nada que distribuir. La fragilidad de la economía era patente, entre otras cosas porque obedecía a las fluctuaciones de los precios mundiales del crudo. En este escenario, los rasgos represivos y autoritarios, así como las limitaciones propias de aquel modelo liberal, estaban expuestos a la orden del día. Pronto los venezolanos, sobre todo los habitantes de los sectores populares, particularmente desengañados y afectados por la crisis que evolucionaba sin detenerse, se alejarían del sistema de dominación y buscarían, en consecuencia, alternativas radicales.

Un observador ingenuo que presencie, sin embargo, la pompa, puesta en la instalación del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, puede dejarse obnubilar los sentidos por el despliegue de un supuesto consenso, mostrado no obstante en las urnas, pero al final bastante precario en torno a la figura del nuevo presidente.

La segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez es en muchos sentidos crucial para entender la fase final del modelo de Punto Fijo. Pérez gobernó entre 1989 y 1993, su gestión estuvo caracterizada por la polémica y los enfrentamientos, en la medida en que se debatían proyectos políticos y sociales antagónicos.

Una parte de esas confrontaciones expresaban al mismo tiempo una fractura en los sectores que hacían parte del establecimiento político y empresarial. Este lapso ahora en consideración presenta la permanencia de intensas movilizaciones populares, al tiempo que se trata de ensayar una restructuración neoliberal que nunca llegó a término. Los efectos más visibles de este trance nacional son fácilmente constatables: dos intentos de golpe de estado en 1992, las intensas jornadas de protestas que sacudieron al país desde el 27 de febrero de 1989, y la desmedida represión militar que las ahogó en sangre; luego en breve, la destitución en 1993 del Presidente en funciones por acuerdo de una clase política en el Congreso, interesada en salvar el barco puntofijista y seguramente su propio pellejo. En suma, estaban ocurriendo fisuras sociales que para muchos se orientarían por cauces imprevisos. Todos estos elementos en juego permanecen en el escenario de una crisis estructural de la democracia representativa. Esas son las ideas analizadas en este capítulo.

La aplicación de las políticas de ajuste

Estamos entonces en presencia del séptimo gobierno del período de la llamada democracia representativa. Esta segunda presidencia la obtuvo Pérez en diciembre de 1988 con 3.879.024 votos, que representaron 52% del total de la votación. Por su parte, su contradictor más cercano fue Eduardo Fernández, de Copei, con 43,26% de los votos emitidos. El apoyo electoral para los partidos integrados del sistema bipartidista fue mayoritario. Acción Democrática obtuvo 97 diputados y su organización asociada, Copei, logró 67 diputados.

Mientras tanto, otras organizaciones que puntualmente podían ser opositoras, pero estaban integradas al modelo puntofijista,

como el MAS, tenían una representación de dieciocho diputados. Por su parte, La Causa R logró tres diputados y el PCV, uno. En el senado también se expresaba una mayoría entre las organizaciones que aún representaban la hegemonía, aunque Acción Democrática no tenía la mayoría absoluta: tuvo 23 senadores más la figura de un senador vitalicio, ocupada por Jaime Lusinchi; por su parte, Copei tuvo 22 senadores más dos vitalicios: Rafael Caldera y Luis Herrera Campins. En tanto, el MAS alcanzó a representarse con tres curules.

Con todo y la representación mayoritaria de las fuerzas aún hegemónicas para ese momento en el parlamento, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso fueron desde un principio accidentadas. Ya en los primeros meses de gobierno, el partido AD venía cuestionando la poca participación burocrática que tenía en las instancias de decisión. En realidad este progresivo debilitamiento de los partidos también se verificó durante la campaña electoral donde los esfuerzos se concentraron sobre todo en la persona de Carlos Andrés Pérez, con el fin de encubrir un poco al partido, objeto de varios señalamientos. Estas contradicciones se expresaban también en las relaciones, desde un principio tirantes, entre Pérez y la dirigencia de AD.

La mayoría de los cargos ministeriales estaban ocupados por individualidades identificadas como tecnócratas venidos de universidades nacionales o extranjeras, promocionados desde el alto gobierno para aplicar transformaciones orientadas al desmantelamiento del aparato estatal, cuyo crecimiento ahora era considerado irracional. Esto siempre en sintonía con los acomodos estructurales que estaba tomando el capitalismo en su fase de desregulación estatal-institucional y expansión de las instituciones financieras en el mundo.

El flamante presidente Carlos Andrés Pérez tomó posesión de su cargo el 2 de febrero de 1989. Para aquella recordada ceremonia, el nuevo jefe de Estado no escatimó esfuerzos para presentarse él mismo ante la sociedad venezolana como el único líder capaz de llevar adelante al país por la senda del desarrollo. Al evento asistió un contingente numeroso de presidentes de América Latina,

personajes clave para la región como Fidel Castro, de Cuba y Daniel Ortega, de Nicaragua, el príncipe Felipe de Borbón y el presidente Felipe González en representación del reino de España. Esta heterogeneidad hablaba bien de Pérez en cuanto que su liderazgo era susceptible de trascender, aparentemente, las diferencias ideológicas o geopolíticas que estaban planteadas para el momento.

Este último comentario se hace más comprensible si se relaciona con el panorama internacional. En los países sobre todo de Europa oriental, los mismos que inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial habían enarbolado el socialismo como senda para la emancipación de la humanidad, se estaban sucediendo procesos de transformación que más adelante los llevarían de retorno al capitalismo, esta vez a una fase de expansión neoliberal. De modo que en las relaciones internacionales cundía, especialmente, una atmósfera de consenso bastante convencional, que anunciaba en los discursos oficiales la inminencia de un nuevo orden mundial, ajustado a fundamentos ideológicos neoliberales. Para aquel momento, sin embargo, Estados Unidos no había terminado de diseñar el nuevo contenido de su política internacional en la que luego ubicaría a sus “nuevos enemigos” que ya no serían el comunismo y la revolución propiamente, sino el terrorismo y lo que el gobierno norteamericano llama ahora *Estados canallas o fallidos*.

Para celebrar la asunción del nuevo gobierno de Pérez se hicieron para el disfrute de la población presentaciones musicales donde participaron músicos nacionales e internacionales de reconocimiento. Los actos políticos se realizaron en el Teatro Teresa Carreño en medio de un despliegue de fastuosidad que pretendía mostrar un momento crucial para el país. Se intentaba indicar, desde la propaganda oficial, que la nación volvía a nacer, pero esta vez direccionada sin los errores del pasado.

Ese mismo día Carlos Andrés Pérez pronuncia su primer discurso como presidente en funciones. Uno de los asuntos que destaca es la asunción de su segundo mandato. De modo que comienza por enunciar los cambios entre una y otra época, sostiene que el país había cambiado. Más adelante se extiende a abordar

la situación internacional, los acontecimientos en el campo socialista, las guerras en Centroamérica y el Medio Oriente. Mantiene la idea según la cual se tenía la impresión de que todos los conflictos que caracterizaban aquel momento podían encontrar una solución. El mundo estaba dejando la etapa de la Guerra Fría, y en breve la transición iba a tener como una de las consecuencias más notables, el establecimiento de Estados Unidos como la única superpotencia en el mundo.

La imagen de líder del Tercer Mundo que Pérez había construido con empeño durante su último período de gobierno estallaría en pedazos una vez se asociase y pusiera en práctica las recetas neoliberales que demandaban los poderes fácticos del sistema financiero internacional. No obstante, como se esperaba en su discurso de toma de posesión, se mostró optimista de que Estados Unidos comprendiera los cambios que se estaban anunciando con la superación de la Guerra Fría, al tiempo en que pedía contribuir a la solución del conflicto en Centroamérica.

Aunque no anunció las medidas concretas que tomaría en los meses más próximos a su gestión, sí adelantó algunos cambios en su discurso. Hasta ese momento tales modificaciones fueron consideradas como matices que preparan decisiones inmediatas. Hablaba esta vez en contra del Estado asistencial, quien particularmente en su primer gobierno había contribuido a edificar. De esta forma incluía en su discurso la palabra *disciplina* como la forma a través de la cual las sociedades podían conquistar nuevos espacios de bienestar. El Estado debía despojarse de tareas que lo habían vuelto paternalista e ineficiente. La responsabilidad individual debía ser uno de los objetivos de un ciudadano, esta vez competitivo.

Con respecto a la situación que esperaba a la nación en 1989, Pérez sostuvo que sería un año de reformas, pero no llegó a mencionarlas de forma puntual, se limitó a presentar algunas ideas ambiguas. Sin embargo, la orientación de aquellas palabras sí anunciaban en términos muy generales el programa neoliberal:

Por eso 1989 será un año de reformas, el primero de algunos años de reformas, de profundización y de apertura del sistema

y de su consolidación (...) De una mayor responsabilidad y al propio tiempo de una mayor toma de conciencia. A mayores derechos, mayores responsabilidades (...) Mayor eficiencia en el trabajo, mayor productividad en el gasto, mayor control y mejor inversión. 1989 será un año en donde hemos de comprobar nuestra capacidad para el esfuerzo sistemático. Nadie debe esperar recibir sin prestación y sin compromiso. Al Estado hay que despojarlo de innumerables cargas. La primera de ellas, la de ser el benefactor poco responsable que crea y genera y alimenta hábitos negativos en la sociedad. Es indispensable replantear la relación entre el Estado y la sociedad civil. La participación de las comunidades en la gestión de los servicios sociales, para lograr que los vecinos participen en las decisiones de los entes públicos (1989, p. 89).

En verdad ninguna de estas ideas representan en sí mismas puntos de conflicto, pocos podrían estar en desacuerdo con el desarrollo de políticas que perfilen el tratamiento de esas áreas mencionadas en la cita. Además eran más razonables esos argumentos una vez que una parte importante del país ya había tomado nota de las perversiones de una sociedad fundada en la cultura rentista. La fuerza legitimante del discurso neoliberal estuvo en la oportuna asociación que hizo a partir de ideas sencillas. Pronto el escándalo de debilitar los estados constitucionales y dismantelar la seguridad social, la explotación ecológica, la exacerbación del individualismo, la violación de las soberanías, especialmente de los países de la periferia capitalista, la profundización de las desigualdades sociales, la mercantilización íntegra de la naturaleza, todo permanecía encubierto en opiniones que componían márgenes importantes de sentido común. De ahí, que una retórica que desconocía las contradicciones inmanentes a la dinámica de las sociedades iría acompañada de manejos que provocarían fuertes conflictos políticos y sociales.

Como una respuesta a la ostentación con que se asumía el comienzo del nuevo gobierno, particularmente por la forma como se organizaron los actos de la toma de posesión, sectores de la Iglesia católica la llamarían *La coronación de Pérez*. Más adelante, aquellas muestras de gastos suntuosos frente a un país cada vez

más empobrecido sería alimento para las distancias sociales que se estaban escenificando entre las mayorías de la población y los miembros del conglomerado dominante. El gobierno anterior había llevado la crisis hasta niveles significativos, esto explica en parte los alcances de las reformas neoliberales de Pérez. En el último año del gobierno de Lusinchi en 1988, la inflación rondó la cifra de 30%. Las reservas internacionales descendieron hasta 6.555 millones de dólares y, por su parte, el déficit fiscal era de 15,1% del PIB (Stambouli 2005). De todas maneras, al cabo de un año de reformas, las reservas tampoco aumentarían de forma significativa, más bien permanecerían en 15.030 millones de dólares (Baptista 2006).

El programa de ajustes fue presentado el 16 de febrero de 1989. Al contrario de los programas que intentaron implementar los gobiernos precedentes, éste que identificaba a Pérez, era consistentemente neoliberal. Este plan de ajuste macroeconómico, luego profundiza sus orientaciones más ortodoxas cuando se firma entre el gobierno de Pérez y el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), la Carta de Intención, el 28 de febrero de 1989. Las medidas más destacables apuntaban a una restricción del gasto fiscal, congelamiento de salarios, unificación de régimen cambiario con paridad unitaria y flotante, aumento de las tasas de interés, eliminación de los créditos a tasas preferenciales para la agricultura, desmantelamiento del sistema de control de precios (lo que suponía el aumento de la gasolina), reducción de los subsidios, introducción de un Impuesto al Valor Agregado, culminación de las restricciones referidas a transacciones arancelarias, modificación de tarifas de los bienes y servicios que prestan empresas del Estado (Ellner 2011). Venezuela internacionalmente se proyectaría en un escenario signado por la competencia, lo que contribuiría a crear las condiciones de un desarrollo económico en sintonía con el mundo global.

La privatización de empresas estratégicas del Estado, especialmente la industria de hidrocarburos, las empresas de electricidad y telecomunicaciones no hacían parte de un plan por reanimar un hipotético sector privado, se trataba simplemente de proyectos

que pretendían entregar tales empresas públicas a transnacionales. En cierto modo, la privatización consistía entonces en una transnacionalización que ciertamente devino en la práctica en un progresivo debilitamiento de cierta “burguesía nacional”. Puede que allí esté la respuesta a la oposición feroz que en breve le iban a presentar los medios de comunicación. Acaso en nombre de esa *burguesía nacional* hablaba el entonces secretario general de Acción Democrática, Humberto Celli, a modo de advertencia en un informe presentado al Comité Directivo Nacional el 25 de enero de 1990:

La crisis venezolana puede ser caracterizada como esencialmente privada y afecta principalmente a las nuevas inversiones. A pesar de las fuertes transferencias de fondos de inversión realizados por el sector público al privado, las inversiones, el empleo y la productividad de ese sector no aumentan. En estas condiciones parece evidente que una política de privatización lo que haría sería transferir la propiedad de importantes medios de producción a empresas transnacionales. Síntomas de ello se están viendo en las campañas y anuncios tendentes a facilitar la participación de empresas extranjeras en sectores estratégicos, tales como la producción y refinación de petróleo en territorio nacional, la siderúrgica, los teléfonos, el transporte aéreo. La privatización, más que una simplificación y racionalización de la acción del Estado, podría perseguir una desnacionalización de la economía (citado por Stambouli 2005, pp. 184-185).

Un estudio del tramo final de la democracia de Punto Fijo debería hacer más énfasis en las transformaciones que efectivamente se operaron, producto del plan macroeconómico neoconservador. Empresas estratégicas del Estado, cuya privatización estaba contemplada en el plan de gobierno, efectivamente pasaron a manos privadas. Sin embargo, las políticas neoliberales venezolanas no fortalecieron a la larga a ningún sector de empresarios nacionales; los grupos transnacionales terminarían de hacerse de tales recursos. En ese sentido, durante el gobierno de Pérez y de Rafael Caldera se logró dismantelar parte importante

de las políticas de intervención estatal en la economía. Por ejemplo, compañía telefónica Cantv fue privatizada en la década de los noventa. La industria del acero, Siderúrgica del Orinoco, fue vendida en 1997. El marco legal de todas estas iniciativas fueron la *Ley Orgánica de Descentralización* de 1989 y la *Ley de Privatización* de 1992. En particular, la ley de descentralización fue concebida como parte de una estrategia para debilitar al estado central. Finalmente, en concreto, Carlos Andrés Pérez declaró que la educación, la salud, la vivienda pública, la defensa civil, las políticas hacia las comunidades indígenas, la protección al consumidor eran responsabilidades que debían compartirse entre gobiernos locales y el gobierno central. Mientras que debían ser competencia exclusiva de los estados regionales: la administración de los puertos, las autopistas, los aeropuertos comerciales, etc. (Ellner 2011). La administración del espacio geográfico también se vio involucrada con la creación de nuevas municipalidades que atendió a razones de clase, como la conformación de los municipios Chacao, El Hatillo y Baruta, que constituyeron una transformación territorial importante (ibíd., p. 78).

Con estos instrumentos legales se allanó el camino para la venta de las industrias básicas. El Instituto Nacional de Puertos fue liquidado como parte de un proyecto que implicaba el traslado sobre la competencia de los puertos de Maracaibo, Puerto Cabello y Guanta hacia la administración de los gobiernos locales, que en breve pasarían a manos privadas. El gobierno de Pérez levantó el control de precios para casi todos los productos, eliminó las tasas uniformes de interés bancario, levantó las restricciones a las inversiones extranjeras y redujo de forma notable los aranceles aduaneros. A la política de sustitución de importaciones adelantada por varios gobiernos centrales se le dio un giro radical que contravenía las ideas fundantes de la democracia de partidos¹³.

13 Respecto a este tema, Castro (2000) señala lo siguiente: «La aplicación ortodoxa de la receta neoliberal del Fondo Monetario Internacional ha implicado un abatimiento severo de la economía, profundizando la crisis

Pérez confiaba que con su liderazgo podría campear los conflictos que iban a plantearse, producto de la implementación de las medidas. Lo que ocurrió fue que su gobierno se enfrentó a una oposición social a la que incluso se sumarían porciones de su partido, Acción Democrática, fracciones de la burguesía nacional, algunos medios de comunicación y sectores de la Iglesia católica. Pero la respuesta más espectacular a la crisis socioeconómica que atravesaba el país desde hace años fueron las jornadas de protestas nacionales que se desencadenaron aquel 27 de febrero de 1989, a pocos días de los anuncios referidos al *Gran Viraje* y a los diversos compromisos contraídos por el gobierno entrante con el Fondo Monetario Internacional.

El 27 de febrero de 1989, la irrupción de los pobres

La formación de una Venezuela moderna y democrática fue el objetivo más trascendente con que las élites justificaron la implantación del modelo político que se inauguró en 1958; no obstante, fue a partir de 1974 cuando ese sistema vio una especie de esplendor alucinante. Este objetivo no sólo justificó la existencia de la democracia de partidos, al tiempo en que encajó con los modelos políticos occidentales del centro capitalista, sino que contribuyó a crear un mito que se proyectó socialmente hasta el 27 de febrero de 1989. Aquel mito contribuyó a asociar al país con una imagen de armonía que permitía sostener la existencia de una sociedad sin graves conflictos. No es casual que este retrato corriente se

de los sectores productivos, los graves desequilibrios del sector externo, del sector monetario y financiero, el déficit fiscal, los desequilibrios laborales y sociales; agravó severamente el cuadro de deslegitimación de la democracia dando lugar también a un aumento considerable y peligroso para las instituciones de la ingobernabilidad de la sociedad venezolana, por un cuadro severo de descontento social y de inmediatez en las reivindicaciones sociales, que no dejan tiempo a la búsqueda de largo plazo de los problemas de la sociedad» (p. 136).

reproduzca y lo reproduzcan desde espacios propiamente académicos algunos analistas que veían a Venezuela como una región poco atractiva para quien está interesado en pensar en torno a casos realmente complejos y, al mismo tiempo, conflictivos.

El modelo de Punto Fijo garantizaba la consecución de pautas convencionales con las cuales se identificaba comúnmente a la democracia; la existencia de elecciones generales periódicas que aseguraban la alternancia de partidos y gobernantes bastante idénticos en cuanto que ninguno de ellos iba a propiciar rupturas del modelo impuesto. Además, aquellas elecciones cada cinco años contaban con una participación popular muy clara. En ese escenario electoral también los partidos mostraban su capacidad de movilización social. Otro requisito demandado era la existencia de un Congreso que acostumbraba a legislar, y de poderes que actuaban como contralores de las ocurrencias del Poder Ejecutivo, etc. Todo lo cual componía una orquestación políticamente correcta en torno a los principios de la democracia liberal. El cumplimiento de estos principios puramente institucionales, es decir aparentes, al parecer eran suficientes para asegurar la existencia de una democracia. Por debajo o detrás de estos requerimientos que demandaban las opiniones convencionales y la mayoría de los científicos sociales ocurrían procesos que harían obligante la transformación de muchas percepciones.

Hizo falta para comenzar a modificar aquel mito legitimante de un país moderno, democrático y rico, las devaluaciones de la moneda, dos golpes de Estado, un progresivo desmejoramiento de las condiciones de vida, escándalos de corrupción en los que invariablemente se veían envueltos destacadas individualidades del gobierno de turno, así como las actuaciones represivas por parte de la fuerza pública a las diversas demandas populares. También en la década de los años noventa sectores populares cada vez más movilizados contribuyeron a socavar ese consenso instaurado.

En ese sentido, el inicio del alejamiento de las masas populares de los gobernantes, es decir, el comienzo de un proceso de deslegitimación y al mismo tiempo de movilización popular y

búsqueda de alternativas ocurrió con contundencia a partir del 27 de febrero de 1989¹⁴.

Como parte de las primeras medidas relacionadas con la liberación de los precios, el 25 y el 26 de febrero comenzaba a implementarse el aumento del 100% de la gasolina. Este acontecimiento, además, en un país cuya economía gira en torno a la actividad petrolera, inmediatamente tomó unas dimensiones enormes. La modificación provocó, a su vez, un aumento de las tarifas del transporte público. Con todo, el cambio de precios en el transporte público fue acordado previamente entre el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y el gremio de Transportistas. El acuerdo quedó en 30% y fue publicado por la prensa. Con todo, una de las federaciones que agrupaba a los trabajadores del transporte ya había mostrado su disconformidad por los arreglos sellados entre una parte de los sindicalistas y el gobierno. Este elemento iba a propiciar confusiones a la hora de implementar los nuevos precios.

Las primeras protestas se escenificaron, según fuentes provenientes de la prensa, antes de las seis de la mañana en el terminal del Nuevo Circo y en las paradas de autobús de las ciudades dormitorio de La Guaira, Guarenas y Catia La Mar. Al parecer, el detonante fue la decisión tomada por algunos conductores de transporte público que pretendían cobrar tarifas que estaban por encima de los acuerdos suscritos entre los sindicatos y el MTC. Pronto, aun en horas de la mañana, se reportaron protestas en las ciudades de Barquisimeto, Maracaibo, Los Teques, Puerto Ordaz, Maracay, Mérida, San Cristóbal, Puerto La Cruz, Barcelona, Maiquetía y Naiguatá. Ya en horas de la tarde las protestas se habían extendido hasta Valencia, Carora, Ciudad Guayana y Acarigua. El amplio radio de acción de las movilizaciones en todo

14 Acá se hace seguimiento al estudio de Margarita López Maya en *Del viernes negro al Referendo Revocatorio* (2005, pp. 65-77). También al documental dirigido por Liliane Blaser: *Venezuela 27 de febrero. De la concertación al desconcierto* (1990). Igualmente se recomienda el trabajo de investigación hemerográfica realizado por José Gregorio Sánchez y Óscar Battaglini: *El 27-F para siempre en la memoria de nuestro pueblo* (2011).

el país revela la dificultad de enfocar lo ocurrido sólo en Caracas. La calificación de esta forma de protesta generalizada de un carácter más bien insurreccional y la represión brutal que la siguió durante el *Caracazo* no da cuenta de su extensión nacional.

Los actores que desde un primer momento emergieron como los más activos en las protestas fueron los estudiantes de las instituciones educativas públicas. Luego, durante el desarrollo de los acontecimientos, trabajadores ambulantes y obreros se unirían a los enfrentamientos con la policía. La evolución de los sucesos preparaba escenarios más conflictivos. Cuando llegó la Guardia Nacional a la ciudad de Guarenas, las pocas unidades enviadas pronto se vieron sobrepasadas por una población francamente sublevada. Los establecimientos comerciales, casetas policiales, el terminal de pasajeros. Todo estaba prácticamente destruido (ibíd., p. 143).

En Caracas, en horas del medio día, ya la ciudad en las zonas más céntricas estaba tomada por estudiantes y trabajadores. Muchos de estos grupos voceaban su inconformidad contra las medidas económicas que estaba tomando el nuevo gobierno. En varias zonas la policía se vio desbordada y en consecuencia tenía la orden de no intervenir, y en muchos casos, con la idea de proporcionar algún orden a los saqueos en los establecimientos y mercados, ofreció sus *buenos oficios* para regular a las personas en la medida de lo posible. Durante horas de la tarde, en las inmediaciones de Parque Central, murió de un impacto de bala la estudiante de la Escuela de Letras de la UCV, Yulimar Reyes. Con el Metro de Caracas sin funcionar, miles de ciudadanos se vieron forzados a trasladarse a sus hogares caminando.

Entrada la noche, Caracas estaba completamente tomada por los movilizados, también se reportó la presencia de motorizados que iban y venían a través de una ciudad ya irreconocible. En varios sectores populares se experimentaba cierta felicidad, producto seguramente de las transgresiones cometidas contra la propiedad privada. Podía ser comprensible una respuesta de este tipo en momentos en que todo el orden social parecía desfallecer. Los productos saqueados eran producidos por los propios tra-

bajadores que con unos salarios tan depreciados nunca podrían acceder con facilidad a tales bienes. Además habían crecido en una sociedad ferozmente consumista que había enseñado fundamentalmente a través de los medios masivos de comunicación la pretendida verdad según la cual ostentar determinados bienes, ofrecía el prestigio que ya las vías tradicionales de ascenso social, como la educación no podían satisfacer.

Al parecer, la conducta que caracterizaba a los manifestantes en ciudades cercanas a Caracas, expresaba señales de regularidad, es decir, se repetían algunos patrones en la expansión de las acciones violentas. Los saqueos y las pobladas no se detuvieron al llegar la noche, por el contrario continuaron hasta el día siguiente. Con todo, dado el carácter incontrolable de los acontecimientos, se impartieron órdenes de sacar al Ejército a la calle. Ese fue el lunes 27 de febrero, pero el martes siguiente la rebelión se generalizó de forma espectacular en las principales ciudades del país. Un instinto tomado como evidencia de vida recorría las intenciones de las pobladas que se mantenían en las calles; la idea era afectar a quienes se suponía que tenían algún dinero o propiedades.

Los reclusos en las cárceles también se descubrían como sujetos capaces de rebelarse, y quemaban colchonetas y cauchos, apertrechados permanecían amenazantes ante las autoridades. Algunos grupos armados le plantaron cara al Ejército y a la policía. De pronto, fue notable la presencia de civiles armados en barrios y zonas de conflicto. Mientras, un ejército de desocupados, aventados por las puertas del progreso y el mito de un país rico y democrático se metía, a su modo, en la historia por las ventanas de comercios y tiendas para saquearlos íntegramente. Bajo la tremenda impresión que debieron causar estos hechos, urbanizaciones de clase media procedieron a blindarse, muchos de ellos defendían armados sus pocas propiedades. Se esfumaba de esta forma el espejismo de la armonía de clases, alimentado por varias décadas con la distribución de la renta petrolera.

Pero los vecinos de algunas urbanizaciones de clase media no eran los únicos que temían que la violencia incontenible de los *desfavorecidos* los alcanzara hasta su propia casa. Con más

justificaciones, la clase política reaccionó y mostró su desconcierto frente a un país que, entre otras cosas, se le estaba alzando a un presidente que había sido electo días atrás con 52,91% de los votos emitidos. Una primera explicación apunta a examinar la campaña electoral de Carlos Andrés Pérez, en la cual nunca anunció las medidas de ajuste que ahora pretendía llevar adelante. Además, el grueso de quienes votaron por Pérez lo hicieron en la creencia nostálgica que anunciaba la eventualidad de volver a un tiempo signado por la bonanza petrolera. En todo caso, aquella sensación de prosperidad, y en consecuencia de seguridad, tenía pies de barro, como se vio.

Uno de los primeros encargados por parte del establecimiento político de tratar de darle alguna orientación a la población, fue el ministro del Interior, Alejandro Izaguirre, en horas del mediodía. Izaguirre comienza su intervención informando que supuestamente la situación estaba volviendo a la calma, sin embargo, para el alto funcionario, quedaban algunos focos de desorden que la fuerza pública se iba a disponer a reducir en breve. Aquellas palabras dirigidas a ofrecer seguridad fueron superadas por el desfallecimiento, que frente a las cámaras de televisión y ante todo el país sufrió el flamante ministro. De esta forma no pudo culminar su mensaje y la transmisión fue suspendida. Luego se intentaría con resultados más previsibles, pero ya el efecto que se estaba buscando en la población fue completamente frustrado (ibíd., p. 65).

Antes de las seis de la tarde se efectuó una transmisión en cadena de radio y televisión; el presidente Pérez en Consejo de Ministros anunció la suspensión de algunas garantías constitucionales. Entre las medidas que destacó estaba la imposición de un toque de queda que comenzaba a regir desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. Además, personalidades ligadas a los medios de comunicación —actrices y actores que gozaban del favor popular por su participación en telenovelas— exhortaban a la población a volver a sus hogares.

De aquellos mensajes emblemáticos resalta la intervención de Eladio Lares, uno de los directivos de una cadena de televisión

muy vista para la época, Radio Caracas Televisión (RCTV). El mensaje en concreto no tenía, en últimas, la intención de informar nada, más bien venía cargado de alusiones que querían mostrar la imagen de un país que habría recuperado “su unificación”. De esta forma, mientras se preparaba la política de una represión sistemática ejecutada por el Ejército y los organismos policiales, aplicada con saña, sobre todo en los sectores populares, uno de los canales de televisión más vistos en todo el país hablaba de la configuración de un *extraordinario equipo*, compuesto por el pueblo y el gobierno. Las palabras de Lares dibujaban la imagen de una “familia” que luego de un breve altercado se disponía, otra vez, a trabajar por el bien del país:

Nuestro país ha retornado a la normalidad, pero esto que nos llena de alegría a los hombres y mujeres que amamos profundamente a esta patria grande y generosa no ha sido obra de azar. Es el producto de la suma de todas las voluntades, del trabajo arduo y tesonero de la colectividad para la recuperación de la paz social. Sí, todos hemos contribuido desde nuestra trinchera de trabajo al restablecimiento de los procedimientos normales de producción de bienes y servicios, para conseguir y preservar el bienestar. Todos hemos contribuido a la rápida superación de la crisis; pueblo y gobierno configurando una vez más un extraordinario equipo de trabajo llamado Venezuela (El Observador, 1989).

Seguramente, la extensión de las protestas se debió, en parte, a que algunas cadenas de televisión, acaso inexpertas aún en el tratamiento de este tipo de eventos, se dedicaron a poner en pantalla lo que estaba ocurriendo en las calles. Sin embargo, al segundo día de los sucesos, ya las televisoras comenzaban a ocultar la continuidad de los enfrentamientos y transmitían, en consecuencia, a la ciudadanía afectada, caminando por las calles de las diferentes ciudades, en una actitud de condena por los últimos acontecimientos.

La implementación del estado de sitio y la salida de contingentes militares poco adiestrados en el manejo de conflictos sociales

produjo la disminución progresiva de las protestas. Pero, más importante, implicó una política de represión desmedida. En los barrios populares y en las zonas céntricas de las ciudades se disparó a mansalva contra la población. Era claro que un ejército compuesto por soldados jóvenes, probablemente atemorizados por la novedad de la situación, se vieron en la tarea de disparar contra edificios donde se suponía aguardaban francotiradores que los estaban enfrentando. El 1° de marzo aún algunas pobladas insistían en permanecer en las calles. Entre el 2 y el 3 de marzo se ejecutó una matanza que mantuvo particularmente a Caracas bajo un régimen de terror. Es posible que la forma en que estuvo diseñado el plan represivo tenga algún componente de *corrección* hacia unos sectores que se habían atrevido a desobedecer de forma masiva el orden social.

La novela del escritor Argenis Rodríguez, *Febrero* (2012), intenta dar cuenta de las distintas expresiones que fue tomando la violencia en todos los ámbitos de la sociedad. De pronto, el sistema político dejaba ver su rostro descaradamente más represivo, una vez que estaba claro para el conglomerado dominante que lo importante era conservar el poder de las manos de una multitud que desde la perspectiva de esas élites se presentaba con una imagen difusa; una muchedumbre que asalta tiendas e irrumpe en los comercios con el fin de vaciarlos íntegramente. Se trataba entonces de una población que se había vuelto enemiga. En consecuencia, había que reducirla a través de la fuerza militar:

- Presidente —dijo el ministro de la Defensa—, la guerra nos ha costado dos hombres: el mayor Carlés, que cayó en El Valle y un soldado de la Fuerza Aérea.
- ¿Y qué opina usted, ministro?
- Que hemos aprendido mucho sobre el arte de la guerra.
- Lo felicito (Rodríguez 2012, p. 143).

Por su parte en los noticieros de televisión entre los anuncios de los altos funcionarios del gobierno se daba por sentado la superación de los enfrentamientos. El 1° de marzo destacaban las declaraciones del entonces Ministro de Defensa, Ítalo Del Valle

Alliegro. Esta intervención es fundamental para detectar la eventual ausencia de referentes sociales que le permitiesen a la población alguna clase de orientación en medio del desconcierto. Todo el edificio institucional del país había hecho implosión sin alternativas a la vista, sólo quedaban las Fuerzas Armadas Nacionales como la única garantía de continuidad de algún tipo de orden, proyectado simbólicamente por los medios de comunicación, en especial por la televisión. En esta breve intervención se advierte la insistencia del ministro en nombrar a la institución militar, relacionándola con el régimen democrático —no es casual que en esta cita apele, al tiempo que también pareciera que “invoca”, ocho veces a la mención de las Fuerzas Armadas. El ministro Alliegro hace un llamado a la confianza que debía depositar la población en los militares, únicos encargados competentes de controlar la situación:

Quiero hacer hincapié y recalcar que la tranquilidad no sólo ha regresado por la actuación de las Fuerzas Armadas venezolanas, sino por la conducta del pueblo venezolano, que reclama el derecho a la paz y a la tranquilidad. Porque esa es la costumbre de nuestro pueblo. Nosotros gozamos de un sistema democrático, donde cualquier diatriba y controversia encuentre los caminos del diálogo y de la concertación para llegar a soluciones favorables para todas las partes. Por ello no se puede permitir, y las Fuerzas Armadas no lo pueden permitir, que minorías que no quieren entender esta situación, aprovechen cualquier evento para desatar una ola de intranquilidad en toda la nación. Por lo tanto, yo les ruego a todo el pueblo de Venezuela, que colabore con sus Fuerzas Armadas. Estas Fuerzas Armadas que a través de toda la historia han demostrado ser unas Fuerzas Armadas dedicadas a su trabajo. Y unas Fuerzas Armadas estructuralmente democráticas!... y convencidas que nuestro sistema democrático es lo mejor que tiene el país. Por ello estas Fuerzas Armadas tienen una voluntad de servicio, un deseo de ser útil, ¡y son estructuralmente democráticas por razonamiento lógico! Y ello nos conlleva a cumplir con todos los deberes que las leyes de la República nos establecen. Colaboren con sus Fuerzas

Armadas, tengan confianza en ellas, y esta situación se restablecerá más pronto que tarde (Blaser, 2010).

En los días inmediatos a las protestas a través de la prensa, movimientos sociales y políticos comenzaron a denunciar las consecuencias de la participación de los cuerpos de seguridad en la represión para contener las movilizaciones. Así, por ejemplo, estudiantes de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV hacían un llamado al gobierno nacional «para que ponga coto a la represión desatada a raíz de los sucesos de la semana pasada y que proceda a poner en libertad a más de 92 estudiantes detenidos» de varias instituciones de educación nacionales.

Lo que comenzó el 27 de febrero no tuvo una dirección clara, no fue posible que alguna organización encauzara las movilizaciones hacia objetivos que entrañaran, por ejemplo, la sustitución de aquel gobierno, o la neutralización del programa de ajustes macroeconómicos anunciado. Aunque algunos grupos trataron de darle un curso más político-militar a los acontecimientos en algunas localidades, y en consecuencia por momentos mantuvieron en jaque a las fuerzas represivas del Estado, la evaluación general permite concluir que no fue viable dirigir las acciones hacia fines que abrieran un curso de transformación social. Entre otras cosas porque una parte importante de los partidos de izquierda habían desechado la alternativa de la vía insurreccional y trataban de probar suerte a través de otros escenarios legales como el parlamento. En tales circunstancias, a las organizaciones más emblemáticas de la izquierda les tocó presenciar un levantamiento popular masivo, desde la comodidad de sus hogares. Con todo, a raíz de las atrocidades cometidas por los cuerpos policiales y el Ejército, comenzaron a formarse algunas organizaciones de base que canalizarían las protestas, ulteriormente, en los años noventa.

Los voceros gubernamentales, principalmente el Presidente de la República, se explicaban los sucesos, al menos en los primeros momentos, como producto de las medidas anunciadas, pero también como unas acciones donde estaban implicados grupos

vinculados a la subversión. Con respecto a las medidas en seguida abundaban en la necesidad de aplicarlas como única vía para trascender la crisis.

No faltaron “analistas políticos” que encontraron versiones creativas para explicarse las causas de las sublevaciones populares que sorprendieron al país entre los últimos días de febrero y los primeros días de marzo de 1989. Habían tomado nota de que el levantamiento popular había ocurrido luego de la visita del presidente de Cuba, Fidel Castro, quien había llegado a Caracas para asistir a la toma de posesión del presidente Carlos Andrés Pérez, apenas dos semanas antes. De modo que la relación de causa, la presencia siempre insidiosa del comandante Castro, y el efecto, los levantamientos populares, ponían la mesa para las especulaciones más ocurrentes. Ante estas versiones, el periodista Earle Herrera, columnista del diario *El Nacional*, respondía en clave de humor a través de su artículo «Fidel, la turba y el betamax»:

Hubo gente muy seria —¡por ésta!— que vio cuando Fidel Castro corría con un Atari VCS bajo el peludo brazo por la avenida Lecuna, más allá de la Mueblería La Liberal, en bajada hacia el Nuevo Circo, donde la chusma encendida por el fuego de su verbo, prendía la chispa que haría arder toda la pradera de la paz concertada (citado en Izard 2012, p. 177).

Como ocurre en estos casos, las cifras relacionadas con la pérdida de vidas y desaparecidos siempre son polémicas. Sin embargo, organizaciones de defensa de los derechos humanos que comenzaron a denunciar los asesinatos y la actuación desbocada de los cuerpos represivos, en general, y particularmente, el Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic) de febrero-marzo de 1989 han registrado alrededor de 396 muertos. Aunque los voceros de los medios de comunicación reiteraban el llamado a la calma, y la dirigencia política y empresarial asegurara que se estaba imponiendo de nuevo la normalidad, lo cierto es que después del 27 de febrero de 1989, el conjunto de la sociedad venezolana cambió en muchos sentidos.

Los componentes de la crisis

En esta sección se tiene la intención de hacer énfasis en detectar los componentes propiamente políticos más determinantes, para avanzar en una evaluación de conjunto del momento que vivía el país, al menos desde el 27 de febrero de 1989 hasta la segunda proposición neoliberal que trató de llevar adelante, sin éxito, el gobierno de Rafael Caldera (1994-1999). El historiador Steve Ellner aporta una caracterización que privilegia los ámbitos políticos e institucionales, para luego redimensionar su proposición, incorporando un análisis más económico y estructural. Ellner destaca la sobrestimación de ciertos factores convertidos en virtudes con los que analistas políticos venían explicándose la peculiaridad y, en parte, el éxito del sistema democrático en Venezuela antes de que se presentaran los sucesos del 27 de febrero de 1989 (Ellner y Hellinger 2003).

Aunque aquí se ponderan factores básicamente políticos, no se puede profundizar en estas variables sin antes incorporar un elemento que proviene del ámbito petrolero. Si bien esta realidad ha venido recorriendo la presente investigación hasta configurar un elemento estructural, vale la pena reiterarlo. La democracia y su sistema de partidos tuvieron la perdurabilidad que se llegó a mostrar porque la base petrolera de su economía le permitió generar algunos niveles de bienestar. De esta forma, el país había disfrutado desde 1925 hasta 1986, precisamente hasta el momento en que los precios del petróleo bajaron terminantemente de un crecimiento casi constante. Y durante la mayoría de estos años Venezuela fue el mayor exportador de crudo del mundo (ibíd., p. 92).

De ahí se derivaron algunas condiciones que hablaban, según Ellner, de la *excepcionalidad del caso venezolano* para los analistas políticos. Entre otras cosas, porque su estructura contaba, en primer lugar y como ya lo hemos mencionado, con un sistema bipartidista sin mayores diferenciaciones ideológicas entre ellos. En segundo lugar, dirigentes de aquellos partidos *evitaban la retórica ultranacionalista*. En tercer lugar, se hablaba de un li-

derazgo político maduro, de esta forma se evitaba la existencia de sectarismos en su conducta pública. Como cuarta consideración, aquellas organizaciones partidistas se habían constituido con la incorporación de amplios sectores sociales que no atendían a consideraciones clasistas. Los partidos dominantes de la democracia liberal se reclamaban como policlasistas. Como una quinta característica para la evaluación, los partidos AD y Copei le daban importancia a la disciplina partidista.

La otra peculiaridad del sistema era su supuesta amplitud: «el sistema político venezolano fue suficientemente abierto como para generar oportunidades atractivas a socios en coalición y otros partidos pequeños. No había perdedores permanentes» (íbid., p. 20). Y el último de los aspectos resaltados por los analistas políticos estaba orientado a considerar a los partidos como organizaciones supremamente institucionalizadas. De esta forma, para los políticos se imponía la necesidad de hacer una carrera relativamente larga hasta lograr la conformación de un liderazgo de importancia.

Como resalta Ellner, todos estos factores que en un momento fueron estimados para explicar el éxito relativo y la perdurabilidad del modelo de Punto Fijo comenzarían a venirse abajo como percepción general a partir del 27 de febrero de 1989. Cada uno de los puntos comentados más arriba en clave de virtud de la democracia venezolana fueron bien pronto puestos en el centro de los cuestionamientos desde los espacios académicos y políticos, pero también lógicamente desde la calle.

La deficiencia de estos enfoques consistía en que se concentraban sólo en observar las configuraciones ubicadas en un plano exclusivamente institucional; se dejaba a un lado, de esta forma, una situación más determinante. Esta realidad política epidérmica estaba condicionada por otras realidades más estructurales, que subyacen y eventualmente pueden explicar los acontecimientos que registra el período en consideración. Es decir, por debajo de aquellas características comentadas más arriba, es posible que la economía de extracción mineral haya potenciado, al punto de darle una personalidad al sistema de partidos. También

es probable que una versión de la modernidad, entendida esta vez por los analistas políticos como el supuesto predominio de una vida social regulada por un amplio marco institucional liberal, haya desatendido otros ámbitos de la sociedad, por ejemplo, los sectores populares venidos a la ciudad que nunca lograron, y probablemente tampoco lo buscaban, su incorporación a un país más integrado.

De pronto, los partidos hegemónicos comenzaron a mostrar poca flexibilidad en sus estructuras organizativas. La solicitud de ampliación de la democracia no era una aspiración social dirigida sólo al modelo de partidos, también las organizaciones en sus dinámicas internas revelaban ausencia de democracia. Imperaban en su lugar formas de autoritarismo y burocratismo. La dinámica de los partidos se fue semejando demasiado al funcionamiento interno del Estado. En tal sentido, se hablaría de ahora en adelante de una sobresaturación institucional que hacía a los partidos unos aparatos sumamente rígidos.

Si bien se podría conceder razón al hecho de que en Venezuela las organizaciones ideológicamente policlasistas fueron las que en última instancia lograron conducir los procesos políticos, al menos desde la segunda mitad del siglo xx, hasta lograr una hegemonía por décadas, en el país de finales de siglo aquel principio mostraba deficiencias a la hora de ponerlo en práctica. Cuando los precios de petróleo no eran favorables, precisamente el factor que garantizaba la contención de los conflictos de clase, estas desavenencias de clase aparecían con fuerza en el escenario de la crisis. En nuevas circunstancias, las organizaciones no pudieron ocuparse y muy probablemente ni siquiera se plantearon atender la situación. Era necesario darle alguna importancia especial a las demandas que surgían desde los grupos más desfavorecidos, entre otras cosas porque eran los sectores populares quienes se vieron más afectados, producto del estancamiento económico padecido desde la primera mitad de la década de los años ochenta (Ellner y Hellinger 2003).

De esta forma, la década de los noventa vio la profundización de una polarización social que era la vía a través de la cual se

expresaba el agotamiento del modelo político hegemónico y la aparente ausencia de alternativas vistas a mediano plazo más allá de las formulaciones neoliberales. En consecuencia, los malestares y animosidades evidenciados entre las clases sociales, provenientes desde distintas fuentes, testificaban la presencia de un proceso de deslegitimación detectado desde los años ochenta. Estas señales precedieron a la irrupción del chavismo. Lo que hizo Hugo Chávez y su movimiento fue encarnar este malestar y darle expresión política a aquellas frustraciones acumuladas.

Pero la crisis también debía tener naturalmente expresión económica. Durante buena parte del siglo xx, la fuerza del modelo económico de extracción mineral había “privilegiado” la importación de bienes y servicios de consumo. Los proyectos políticos que se llevaron adelante en regímenes dictatoriales o en democracia habían pospuesto la formación de infraestructuras que apuntaran a la creación de un modelo productivo “independiente” de los principios fundamentados derivados de la economía petrolera. Desde los años ochenta el país fue testigo de un proceso de empobrecimiento general. Esto repercutió en una reestructuración del mercado laboral. Muchos trabajadores, junto con otros venezolanos que llegaban a la edad de incorporarse al mundo del trabajo, fueron expulsados a las regiones fronterizas de la economía informal.

Esto determinó la fragmentación de la sociedad civil y conllevó al debilitamiento de los sindicatos como actores capaces de vehicular las demandas de los trabajadores. En adelante iban a proliferar una serie de organizaciones populares con la aspiración de representar y conducir los anhelos del pueblo. La particularidad de estas formaciones fue su talante antiautoritario y de base, por eso construyeron su personalidad como organizaciones horizontales, antipartidistas y en parte, antiestatales.

Esta característica era tan definitiva que las relaciones entre los partidos de izquierda y estas organizaciones de base fueron casi siempre tensas, pero ganaban en democracia interna lo que perdían en la capacidad de trascender institucionalmente, es decir, adolecían de estructuras con la disposición para perdurar en

el tiempo, con problemas para crear instancias de cubrimiento efectivamente nacional, capaces de forjar también un liderazgo que eventualmente desafiara a los partidos tradicionales.

Entre 1965 y 1980, los distintos gobiernos habían podido aumentar los salarios en forma progresiva, al tiempo en que el gasto social había crecido principalmente como consecuencia del *boom* de los precios del petróleo escenificado en los años setenta. Con todo, en los años ochenta y noventa la desaceleración fue pronunciada. El PIB había llegado a su pico máximo a finales de los años setenta para luego caer hasta 20% entrada la década del noventa, hasta el punto de retornar, posiblemente, a los niveles registrados en los años sesenta (ibíd., p. 97).

Este descenso de indicadores afectó naturalmente el poder adquisitivo de los trabajadores, incluso en el sector industrial. En los años noventa, el salario se situó en menos de 40% que *los niveles de los ochenta*. Pero el salario mínimo, entre 1978 y 1994, decreció a niveles menores a los registrados a principios de los años cincuenta (ídem).

En 1993, los recortes presupuestarios afectaron las áreas de la educación, el desarrollo habitacional, la salud, el desarrollo social, el desarrollo urbano, por mencionar algunas. Estos datos revelan inevitablemente el aumento de la pobreza. Entre 1984 y 1995, la población pobre se incrementó de 36% a 66%, al tiempo que la pobreza extrema de 11% a 36%, al final de los años considerados. En 1989 –un año especial porque se empezó a implementar el programa de ajustes con más rigor que durante los años previos–, la pobreza aumentó de 46% a 62%. La pobreza extrema pasó de 14% a 30% (ídem). Otros datos analizados por Agroplan, cuya metodología permite detectar con más rigor cambios en períodos cortos, calculan que los niveles de pobreza se incrementaron entre los años 1984 y 1988. Durante ese tiempo, la pobreza extrema creció de 11% a 14% y la pobreza total ascendió de 36% a 46%. En 1991 ya los pobres extremos rondaban el 34% y la pobreza general se ubicaba en 68% (Agroplan, citado en Lander 1995).

En aquellos años de fuerte crisis económica la sociedad se dividió aún más. El ingreso se concentró en pocas manos, mientras

que las mayorías vieron caer su participación en la generación de riquezas a la nación. En 1981, la contribución de los más pobres se ubicaba en 19,1%, y en 1997 estaba en 14,7%. Por su parte, los ricos aumentaron su participación de 21,8% a 32%, según cifras de la Cepal (Ellner y Hellinger 2003).

Roberts capturó la lógica de unos procesos relacionados con transformaciones en la estructura de las clases. Una tendencia tiene que ver con el traslado de las actividades industriales y agrícolas a la de servicios, y otra también significativa se relaciona con “la expulsión” de trabajadores de la economía formal a la informal. Estos datos son particularmente apreciables porque dejan ver el fracaso de las reformas neoliberales. El porcentaje de la fuerza de trabajo dedicada a las áreas de la agricultura entre 1980 y 1997 cayó de un modesto 16,1% a 10%. Por su parte, en ese mismo período, los trabajadores concentrados en las faenas de la industria vieron reducida su actividad de 28,4% a 24,3%, mientras que las labores dedicadas al ámbito de los servicios aumentaron de 55,5% a 65% del conjunto de la fuerza laboral (ídem). De igual modo, estos datos ponen de manifiesto la existencia de un proceso de flexibilización laboral y desindustrialización, con la consiguiente producción incesante de *nuevos pobres*, o pobres en condiciones depauperadas.

El primer semestre de 1996, durante el gobierno de Rafael Caldera, los niveles de pobreza se remontaron hasta 70%, mientras que la pobreza extrema se ubicó en 39% de la población. El desempleo rondaba 11%, y la economía informal representaba 49,4%, del conjunto de la fuerza laboral. Las conclusiones se hacen más alarmantes cuando ese mismo año el país llegó a tener una inflación galopante de 100% (INE 2004). De esta forma, la sociedad venezolana era una sociedad desintegrada, cuyas mayorías no estaban incorporadas a ningún proceso productivo. En 1999, aunque los índices de pobreza se habían reducido, aún seguían considerablemente altos, los pobres representaban el 42%, y los pobres extremos se mantenían en 16% del total de la población (ídem).

La mesa estaba bien servida para el crecimiento de las tensiones sociales. Sin embargo, mientras los sectores populares se fueron percibiendo como un sector, es decir, una parte, si bien la más grande, con derechos inmanentes a su clase, y algunos partidos como La Causa R hicieron esfuerzos para encarnar las demandas de los más pobres, faltaba entre los menos privilegiados una visión que contemplara objetivos a más largo plazo, conjuntamente con la formación de una cultura para la organización que redundara en la creación de movimientos con algún tipo de disciplina interna. Pero esta solicitud, en momentos en que la sociedad percibía a los partidos como unos cuerpos extraños incrustados en la nación, hacía muy difícil que ese rechazo no se tradujera en prejuicio generalizado contra toda forma de organización política o social.

Una de las reformas emprendidas por aquellos años se consumó con la Ley de Elección Directa de Gobernadores, aprobada en 1989. Se buscaba con esta iniciativa, cuya bandera la había enarbolado la Copre, como ya se vio, la oxigenación del sistema de partidos. Vale la pena detenerse en esta modificación porque será relevante en breve para explicar los sucesos políticos que se van a presentar. En cualquier caso, la consecuencia más importante fue que desde la celebración de las primeras elecciones directas de gobernadores y alcaldes se configuró un nuevo liderazgo, esta vez proveniente de algunas de las regiones del país.

Aunque las primeras elecciones regionales se efectuaron en el convulso 1989, el grueso de la sociedad las vio con apatía. Frente a estas circunstancias, los partidos aún dominantes ganaron las elecciones: AD ganó en diez estados y Copei controló seis. Sin embargo, para esa elección el bipartidismo salió derrotado en dos gobernaciones: en el estado Bolívar, con Andrés Velásquez de La Causa R, y Carlos Tablante por el MAS, en el estado Aragua.

El 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, la fisura irreparable

En la cimentación del Pacto de Punto Fijo, los militares jugaron un papel estratégico. No sólo porque conformaron una institución garante del orden social que buscaba legitimar, en general, la democracia de partidos, sino porque desde una perspectiva geopolítica, las Fuerzas Armadas se habían instituido como actor importante en la medida en que garantizaban la permanencia de Venezuela dentro del área de incidencia del gobierno norteamericano. La *lealtad* probada de los militares hacia la democracia liberal fue importante desde los años sesenta, cuando la izquierda de entonces puso en práctica caminos insurreccionales. También, como se vio, el 27 de febrero de 1989, la institución volvía a actuar, esta vez en contra de una población que había salido a la calle. Además, en comparación con la trayectoria y la composición social de otros ejércitos latinoamericanos, el venezolano se nutría de la diversidad de capas sociales que conformaba la nación.

En ese sentido, se podría sostener también que la institución militar fue “policlasista”. Claro que esta constitución socialmente más compleja tenía sus límites. A medida que se ascendía en la estructura de mando, y a través de una especie de evaluación no escrita, se incorporaban *criterios* de clase para favorecer a determinados “cuadros”, además del obligante acercamiento hacia alguno de los partidos del estatus. En todo caso, era poco probable que un individuo que provenía de los sectores más desfavorecidos pudiese llegar a ser general.

Luego de efectuarse las dos rebeliones militares, era innegable que las dificultades que hasta el momento habían tenido expresión en la sociedad, el 27 de febrero de 1989, ahora se trasladaban hacia el centro de una de las instituciones más fundamentales para la continuidad de la democracia liberal de partidos, las Fuerzas Armadas Nacionales.

La situación nacional que preparó la intervención armada del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) estuvo

signada por una intensa polémica donde el centro de los cuestionamientos se centraba en las medidas que trataba de llevar adelante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, a saber, los varios casos de corrupción que inculpaban directamente el propio presidente, el creciente malestar social y la represión como respuesta a la movilización popular, el tratamiento que se estaba dando a las diferencias limítrofes con Colombia, entre otros cuestionamientos.

La primera insurrección militar, la que estalló el 4 de febrero, y la segunda, la que ocurrió el 27 de noviembre, conmovieron los cimientos del sistema en aquel convulso 1992. Para el observador desprevenido la ocurrencia de un golpe de Estado —que significó el enfrentamiento entre tropas militares, aviones bombardeando zonas específicas de la ciudad, toma de medios televisivos por parte del gobierno y grupos insurreccionales, con llamados a un levantamiento popular por parte del bando insurrecto, así como un pronunciamiento en vivo por televisión a deponer las armas por parte de uno de los jefes del movimiento—debió ser sorprendente.

Ninguno de los dos pronunciamientos pudo derrocar al gobierno. En este aparte, el análisis no se centrará en el relato detallado de aquellos acontecimientos, suficientemente descritos y estudiados por diversos analistas y protagonistas de los sucesos; el examen más bien se concentrará en mencionar algunas de sus implicaciones. Para los caraqueños es probable que el segundo movimiento militar, escenificado el 27 de noviembre, haya sido más llamativo, entre otras cosas, por una participación de sectores de la Fuerza Aérea atravesando los cielos de Caracas, una exposición relativamente prolongada y desorganizada de los insurrectos en televisión, algunas formas de organización en las zonas populares para llevar adelante ciertos planes, etc. Pero lo cierto es que más cerca de capturar el poder político estuvieron los participantes de los sucesos del 4 de febrero.

Un punto a favor de esta argumentación es que los objetivos vislumbrados por el movimiento en plazas militares neurálgicas dispuestas en Maracaibo, Maracay y Valencia fueron tomados, es decir, los militares lograron controlar aquellos objetivos. Sólo

en Caracas no fue posible ocupar Miraflores; el punto básico para comenzar a hacerse del poder estatal. El comandante de la operación en Caracas, el teniente coronel Hugo Chávez Frías, no pudo neutralizar las fuerzas leales al gobierno ni pudo apresar al presidente de entonces, Carlos Andrés Pérez. Cuando ya rondaban las horas del medio día hubo un acuerdo entre las fuerzas contendientes para que Chávez enviara un mensaje a sus compañeros de aventura con el fin de que aquellos depusieran sus armas.

Las intenciones del movimiento militar –aunque se sabe que hubo conexiones con grupos civiles para apoyar las acciones, su participación fue en general marginal– están expresadas en los documentos que se habían elaborado para presentarlos al país. Una lectura detenida permite concluir que, al menos en el proceso de instalación del Gobierno de Emergencia Nacional, no estaban planteadas desde el primer momento reformas propiamente revolucionarias. El acta se planteaba «rescatar la dignidad nacional, ampliar la democracia y con el auxilio de la ciudadanía romper la grave crisis que sacude al país» (1998a, p. 129).

La expresión máxima de ese gobierno de transición era una instancia colectiva integrada por individuos que asumían todas las atribuciones de los órganos del poder político. Se trataría de un cuerpo que iba a encargarse de trazar políticas al resto de los poderes que conforman el Estado, al tiempo en que iba a funcionar también como un árbitro que mediara entre los diferentes sectores por diferencias suscitadas en la dinámica de gobernar.

En otro documento redactado por Kléber Ramírez Rojas, un izquierdista que había sido parte de la preparación de la insurrección del 4 de febrero, se presentan las líneas fundamentales que debían ejecutarse al momento de capturar el poder. El título es bastante explícito, se trata de un programa enteramente ejecutivo, llamado: *Programa Nacional de Ejecución Inmediata para el Rescate y Fortalecimiento de la Dignidad de la Nación*. Es una versión más amplia del Acta del Gobierno de Emergencia Nacional, ya citada. Luego de describir la situación crítica de aquellos días, así justificaba Kléber Ramírez el levantamiento cívico-militar:

Toda esta situación plantea la perentoria necesidad de convertirnos en los portavoces de la nación entera y asumir la responsabilidad patriótica de cambiar el rumbo de dirección en la conducción de nuestra patria (1998b, p. 123).

En consecuencia, se debía instalar un gobierno de transición, cuya progresiva adecuación ocurría al mismo tiempo en que por decreto se disolvían el resto de los poderes que eran parte del *viejo régimen*. Como el documento anuncia la formación de un *gobierno de unidad*, era lógico que no se adelantaran reformas que dividieran la *alianza*, producto de la insurrección. Una muestra de la preocupación por el carácter desnacionalizador de los programas neoliberales era la interesante decisión por incentivar el estudio del lenguaje, de la historia, de las matemáticas, y *del equilibrio ecológico*. Estas inquietudes intelectuales no hacen parte, precisamente, de la tradición de los pronunciamientos militares reaccionarios que azolaron el continente en las décadas pasadas:

Se reformulará el proceso educativo del país, pero ante todo será esencial garantizar el conocimiento del lenguaje. Igualmente tendrán prioridad la lectura interpretativa y la formación de nuestra identidad como pueblo, colocando mucho énfasis en el análisis de nuestra historia y de nuestra amplia geografía. Es importante enfatizar en el razonamiento matemático. El conocimiento, en general, debe fundamentarse en la dilucidación del porqué de las cosas como base fundamental para la formación de una conciencia veraz de los ciudadanos. Aquí incluiremos la lucha permanente por la conservación del ambiente y el equilibrio ecológico en cualquier actividad pública o privada... (ibíd., p. 128).

El llamado a la rendición efectuado por el líder del movimiento, Hugo Chávez, fue efectivamente hecho frente a las cámaras de televisión. Lo que en breve iba a ser noticia, pero en clave de rumor popular, no fue tanto el llamado persuasivo de Chávez hacia sus camaradas, lo que produjo impacto de inmediato a través de un mensaje que duró poco más de un minuto, fue el gesto de arro-

garse la responsabilidad de la acción militar, un acontecimiento poco usual en un país de políticos irresponsables. Esto además supuso un giro hábil para asumir oportunamente el liderazgo visible del movimiento frente a la nación:

... y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el regimiento de paracaidistas Aragua y en la brigada blindada de Valencia: Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital, es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar, y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor; así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje, para que por favor reflexionen y depongan las armas porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante al país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias (Vive 1992).

En general, las respuestas que pudo elaborar la dirigencia de entonces no encontraron otras consideraciones para condenar las acciones de la juventud militar insurreccionada. Fue emblemático en este sentido el llamado del para entonces senador por AD, Morales Bello, en su discurso de la sesión conjunta del Congreso, el mismo 4 de febrero, captado por cadena de televisión y radio, cuando soltó la afirmación: *mueran los golpistas*. De esta forma, se trataba de una afirmación que intentó cubrir con una consigna la necesaria reflexión sobre aquellos acontecimientos.

Una de las excepciones fue el ex presidente Rafael Caldera, quien como lo disponía la Constitución de 1961, disfrutaba de una senaduría vitalicia en el Parlamento. Caldera hizo ver una situación que la mayoría de los parlamentarios que tomaban la tribuna de oradores desdeñaron. Si bien se había derrotado el

intento de golpe y sus principales cabecillas permanecían detenidos, neutralizados o perseguidos, los sectores populares no salieron a defender la democracia en la calle, se habían quedado en sus casas esperando expectantes el desenlace de la contienda armada. Esto representaba un dato importante, la democracia ya no contaba con el acompañamiento de las mayorías. Para muchos venezolanos, la suerte del régimen les era indiferente. La otra variable rescatable fue su llamado de atención sobre las crecientes formas de corrupción que mostraba aquel gobierno. Estas afirmaciones puestas en su discurso en la sesión conjunta del Congreso de la República, en contraste con la opinión del resto de los *representantes*, colocaron al ya anciano dirigente conservador en la ruta de la Presidencia de la República:

Es difícil pedirle al pueblo que se inole por la libertad y por la democracia, cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer y de impedir el alza exorbitante en los costos de la subsistencia, cuando no ha sido capaz de poner un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción, que a los ojos de todo el mundo está consumiendo todos los días la institucionalidad. Esta situación no se puede ocultar. El golpe militar es censurable y condenable en toda forma, pero sería ingenuo pensar que se trata solamente de una aventura de unos cuantos ambiciosos que por su cuenta se lanzaron precipitadamente y sin darse cuenta de aquello en que se estaban metiendo. Hay un entorno, hay un mar de fondo, hay una situación grave en el país y si esa situación no se enfrenta, el destino nos reserva muchas y muy graves preocupaciones (Caldera, s/f).

Aquel dato, según el cual el golpe militar no contó con la oposición de los sectores populares, fue una realidad que daba cuenta del estado de incertidumbre e insatisfacción que recorría al país. Más aún, desde el primer momento el comandante del pronunciamiento militar disfrutó de ascendencia en muchos sectores. Ascendencia insuflada por la expectativa que generaba en ciertas porciones de la población una figura enigmática de quien el país

no sabía absolutamente nada. De esta forma naufragaba el Pacto de Punto Fijo, producto de la disconformidad de uno de sus actores más fundamentales, las Fuerzas Armadas. Un articulista muy leído para entonces, José Ignacio Cabrujas, mostraba la aparente paradoja, según la cual el gobierno estremecido de Carlos Andrés Pérez había recibido llamadas de solidaridad de personalidades *relevantes* del mundo; mientras en casa, la suerte del sistema político no parecía ya suscitar solidaridades entre unas mayorías cada vez más insatisfechas:

Poco pueblo hubo esa madrugada, señor Presidente, no me lo negará usted. Nada que ver con mi memoria de aquellos días durante la asonada de Castro León hace treinta y tantos años, cuando tanta gente fue a matarse a las puertas de Miraflores. Entonces, la democracia era una razón de vida y no este apoyo desgastado, extraído con cuenta gotas, al borde de la indiferencia. Ciertamente, se movilizaron sus colegas de Colombia y México y eso los honra sólo en la medida del no faltaba más. Caminó el señor Bush del dormitorio al teléfono con prisa de sincero doliente. Hubo adhesiones de Felipe González en nombre del gobierno español y hasta una llamada del mismísimo Mitterrand (...) Lástima que por el contrario no se haya visto una pancarta venezolana ni una voz simple defendiendo el sistema y sus bondades. Luz afuera y oscuridad en casa. ¿Sería la hora? (2009a, pp. 132-133).

El naufragio de la democracia “puntofijista”

Los efectos que produjeron los dos pronunciamientos militares, pero especialmente los del 4 de febrero, son variados y espaciados en el tiempo, es decir, las rebeliones militares hirieron hondamente la legitimidad popular del régimen político, pero también tuvo consecuencias sobre la suerte del propio presidente Pérez. En efecto, a partir de 1992, el gobierno de Pérez se dedicará a *sobrevivir*, hasta la terminación de su mandato como consecuencia de un juicio y una destitución ocurrida en mayo de 1993.

Para ese momento, el entonces fiscal general de la República, Ramón Escobar Salom, abrió una averiguación sobre una operación cambiaria que llevó adelante el gobierno. El hecho puntual consistió en una maniobra que tenía la intención de reorientar unos recursos para asistir a la señora Violeta de Chamorro, presidenta de Nicaragua para ese momento. Concretamente se trataba de ayudarla con el tema de la seguridad. La forma fraudulenta como se efectuaron aquellos movimientos de dinero representaba la oportunidad para tratar de enjuiciar al presidente, en cuanto que estaba claro que el responsable directo de aquella decisión había sido Pérez.

En realidad, casi todo el establecimiento político, incluido su propio partido Acción Democrática, interpretó el momento de sacar a Pérez de la Presidencia como un paso ineludible para preservar la continuidad del sistema político. Los niveles de desaprobarción eran para el momento bastante altos, las movilizaciones sociales eran constantes y los rumores de golpe militar corrían de forma permanente. Era claro que las fuerzas con presencia en el parlamento y la incidencia que tenían en el resto de los poderes, particularmente en la Corte Suprema de Justicia, garantizaban la trama de una “transición” que tenía a Pérez como la figura que había que desplazar del poder.

De esta forma, el 20 de mayo de 1993, la Corte Suprema sentenció que efectivamente en el caso seguido a Pérez encontraban méritos para llevarlo a juicio, por lo que era inminente su destitución del Congreso. Seguidamente, el Senado nombró como presidente provisional al mismo presidente del parlamento, Octavio Lepage. De esta forma, se pensaba que el rechazo cada vez más creciente iba a amainar. Los cálculos no salieron exactos. Si bien era la primera vez que se enjuiciaba a un presidente en funciones, y eso daba cuenta de cierta flexibilidad del sistema político, así como de la capacidad de maniobra de la dirigencia, el descontento popular no se detuvo. Las conspiraciones o los rumores de golpe fueron además constantes.

Las lecturas más convencionales sobre lo que estaba ocurriendo atacaban a Pérez y lo ubicaban como el responsable de la crisis

nacional, aunque ciertamente le correspondía una porción nada desdeñable de la responsabilidad, una evaluación del período debe trascender la actuación de una persona, así se trate, como en este caso, del Presidente de la República. Para aquellos meses existía una enorme animadversión contra la figura del Presidente, seguramente la campaña redimensionada por los medios masivos de comunicación también formaba parte de la estrategia según la cual se trataba de depositar todas las responsabilidades sobre la espalda de Pérez para que, una vez fuera de la Presidencia, las aguas pudiesen tomar su curso “normal” y hacer manejable aquella situación.

El punto que frecuentemente dejaban de lado los elaboradores de estrategias del entorno político era que la situación crítica transcendía con mucho el ámbito político y se había tornado más social. La otra consecuencia concebida a más largo plazo fue el retorno de los militares a la actividad política. Esta característica, que había estado siempre presente en la historia de Venezuela con el modelo de Punto Fijo, se logró limitar a las ambiciones militares y ubicarlas en su espacio natural: la carrera de las armas y los ascensos. Claro que los militares tenían una relación permanente y fluida con los políticos de todas las tendencias, pero no era parte de una práctica pública, más bien correspondía a relaciones signadas por el clientelismo. En algunos casos se trataba de relaciones determinadas por la corrupción o acaso la preferencia política de algunos militares hacia los partidos hegemónicos, incluso en algunos casos transcendían vinculaciones de grupos revolucionarios con cuadros castrenses de inclinaciones izquierdistas.

Luego, con la intención de culminar el período presidencial que había iniciado Pérez, debió asumir la presidencia por acuerdo entre las fuerzas del Parlamento el doctor Ramón J. Velásquez, un conocido intelectual que gozaba de cierto reconocimiento entre los políticos de entonces. Velásquez había sido siempre un cuadro de Acción Democrática, pero al mismo tiempo conservó durante su larga trayectoria de hombre público alguna independencia de criterios que lo hacían relativamente confiable para emprender un corto gobierno que en pocos meses habría de prepararse y disponer al país para la celebración de elecciones presidenciales.

De hecho, este era uno de los objetivos confiados a Velásquez al momento de su nombramiento el 6 de junio de 1993, sortear la tambaleante situación hasta la llegada del nuevo gobierno.

El segundo objetivo era implantar algunas medidas que le permitieran al gobierno sostener el panorama económico hasta la llegada de las elecciones presidenciales. Los dos partidos, AD y Copei, no quisieron integrar el gabinete, acaso por razones de cálculo temían que su presencia podría suponer profundizar su desprestigio al formar parte de un gobierno cuya suerte era incierta. Para llevar adelante algunas medidas económicas y políticas, se solicitó una Ley Habilitante. Esta figura legal disponía que el parlamento le cediera temporalmente al Poder Ejecutivo la facultad de elaborar leyes orgánicas.

Este procedimiento siempre resulta atractivo en momentos en que se buscan respuestas expeditas a problemas sobre los cuales hay algún consenso para su solución, por lo que la dificultad mayor la representaban las propias dilaciones burocráticas naturales a la lógica parlamentaria. La otra razón por la que convenía una Ley Habilitante era el descrédito que logró acumular la clase política que continuaba en aquel Congreso. De modo que, al parecer, la estrategia de los partidos era ocultarse lo suficiente, mientras “el respetable” doctor Velásquez tomaba medidas fiscales para crear algunas condiciones mínimas que le permitieran al próximo gobierno tener más espacio para maniobrar. Con respecto al descrédito de los partidos y del parlamento, se refería un reconocido articulista en tono mordaz:

¿Pecaría de exagerado si me permitiera aseverar que el Congreso de Venezuela es un desecho, una mala consecuencia de plástico, totalmente carente de historia? ¿Que en realidad lo que allí se dice ni nos va ni nos viene, ni nos afecta? ¿Que no importa si el mamotreto sesiona o anda de vacaciones? ¿Que en general está integrado por una manga de holgazanes capaces de convertir esa edificación de falso estilo romántico-ateniense en un club donde los diputados y senadores acuden a hablar por teléfono, a encargar marroncitos o a encontrarse por aquí y por allá, y qué

hubo, cómo está la vaina? El Congreso ha terminado por ser una sociedad de amigotes aburridos de tanto verse la cara y tanto hablar las mismas pendejadas (Cabrujas 2009b, p. 183).

Las elecciones presidenciales de diciembre de 1993, se puede afirmar, acontecieron y en efecto produjeron cambios que se deben ofrecer como objeto de análisis. El candidato Rafael Caldera, un fundador, digamos, de la democracia de partidos en Venezuela, jefe de un partido que se había constituido como columna del régimen de Punto Fijo, había sido un personaje relativamente conocido al menos desde 1936. Esta característica, según la cual una porción de venezolanos elegía como presidente a un anciano, puede que remita a cierto agotamiento generacional hacia los políticos convencionales agrupados en los partidos. Sin embargo, no se puede hacer una sentencia referida a que la situación no había cambiado sólo porque dirigiendo los destinos del país estaba un hombre de talante conservador, formado bajo el amparo de la Iglesia católica, y fundador de un partido doctrinariamente de derecha como Copei.

A pesar de estos hechos, a pesar incluso del propio Caldera, su gobierno fue una constatación de la sucesión de circunstancias complejas. Ciertamente, su intención personal y política no fue propiciar nuevas situaciones, ni siquiera se propone en serio la profundización de la democracia. En campaña había prometido la realización de una Asamblea Constituyente, pero esta propuesta fue retirada luego de que su gobierno se aliara con los partidos del estatus. Luego de los primeros años, en su segunda estadía en la presidencia, intentó renovar algún tipo de pacto entre partidos, empresarios y dirigencia sindical, que se tradujera en la renovación de la democracia liberal. Con todo, existían otras situaciones que podían apuntar hacia escenarios más imprevistos.

El candidato Caldera, para el momento de la campaña, no hacía parte propiamente del bipartidismo. Se había alejado de la organización que fundara, Copei, justo cuando pudo percibir las orientaciones predominantemente neoliberales de sus propuestas ideológicas, además de darse cuenta de la impopularidad de

tales medidas. La otra razón obvia para abandonar Copei fue la dificultad para que sus compañeros lo nombraran candidato presidencial. En ese escenario y con el objetivo de llegar a la presidencia por segunda vez, debía marcharse y fundar una organización con la cual llegar a Miraflores en 1993.

Entonces se empeñó con algunos socialcristianos descontentos, unos cuantos dirigentes regionales y un grupo de izquierdistas, acaso atraídos por el discurso de orientación antineoliberal de Caldera, en la conformación de una organización llamada Convergencia. Aquella instancia nunca se propuso ni tampoco pudo trascender más allá de su líder y fundador absoluto. En uno de los emblemas del partido exhibían: «Orgullosos de ser calderistas».

Para aquellos momentos de pragmatismo neoliberal de fondo antipolítico, a casi nadie le interesaba, tampoco al viejo Caldera, la estructuración de un partido con orientación programática, contenido doctrinario y disciplina militante destinada a formar cuadros. No tanto porque a Caldera no le alcanzara la edad para ver alguno de esos objetivos materializados, en todo caso, en ese esfuerzo se le había ido la vida organizando a Copei, sino porque a la sociedad la recorría un profundo sentimiento antipartido. Se trataba de formar para el momento *estructuras* de naturaleza volátil o efímera, que permanecieran en el tiempo siempre y cuando se contara con algún apoyo en las urnas, se ocuparan cargos públicos de relativa importancia y desde allí se destinaran recursos para la *nueva organización*.

Otro dato importante fue la campaña en sí misma. La opción presidencial de Caldera fue apoyada por una diversidad de pequeños partidos de izquierda, cuya reunión en el proceso electoral fue calificada popularmente como *El Chiripero*. Su discurso, en consecuencia, iba a tratar de dar concreción a la heterogeneidad de fuerzas que, en general, percibieron en Caldera la posibilidad de derrotar las opciones neoliberales. Incluso el Partido Comunista lo apoyó. Se trataba de una decisión que en su momento debió ser internamente polémica para una organización que históricamente se constituyera como antagonista de las formulaciones socialcristianas que enarboló Caldera hasta sus últimos días.

Concretamente este giro revelaba, en términos de la calidad de la respuesta que estaba dando la izquierda al desafío neoliberal, que la crisis tocaba a todo el conjunto de los actores políticos tradicionales, hasta la gestación del chavismo. Los puntos coincidentes entre Caldera y los comunistas se concentraban en la defensa de la nacionalidad y la democracia con sentido social frente a las orientaciones trasnacionales y neoliberales que, como se vio, ahondaban la idea según la cual el país estaba siendo entregado al poder económico internacional. No en balde el eslogan de campaña de los rojos pretendía resumir esas razones: «Coincidimos por la patria».

Aquellas elecciones de 1993 serían de alguna forma “multipartidistas”. Esto sugiere que la hegemonía bipartidista se había quebrado o estaba gravemente resentida. Esto no supone una transición histórica, porque aunque Caldera ya no hacía parte de Copei, seguía siendo el político veterano que trataba de revivir una vez más en funciones de gobierno el pacto de Punto Fijo (acuerdo que él mismo había suscrito). En aquellas elecciones participaron una serie de candidatos y de formaciones que tuvieron alguna figuración, puesto que nadie pudo encarnar una mayoría significativa.

Los resultados oficiales otorgaron al fundador del régimen de Punto Fijo 1.710.722 votos, que representó 30,46%. Claudio Fermín (AD) logró 1.304.849, es decir 23,2%; Osvaldo Álvarez Paz (Copei) obtuvo 1.282.645 votos, 22,11%; y el candidato de La Causa R, el sindicalista Andrés Velásquez, consiguió 1.241.853 votos, es decir, 21,97% (Urbaneja 2007). Producto de esos resultados oficiales, se suscitó una polémica en torno a la posibilidad de que hubiese ocurrido un fraude, porque Velásquez y sus seguidores en algún momento se sintieron vencedores. En todo caso, el principal afectado por aquellos resultados fue el propio Andrés Velásquez, así como su organización, La Causa R, sin embargo, no mantuvieron la denuncia, por consiguiente terminaron aceptando la información que provenía del Consejo Supremo Electoral.

El 5 de diciembre de 1993 llegaba al poder una opción que no había sido, por primera vez, la enarbolada por el bipartidismo.

La conformación radicalmente plural del Congreso atestiguaba un claro desplazamiento de las preferencias políticas de la población. Ni AD ni Copei conservaron la mayoría entre la representación parlamentaria. Por último, otro dato importante: un porcentaje significativo de la población había votado explícitamente en contra de las políticas de ajustes neoliberales.

En efecto, el programa de gobierno presentado a la consideración pública, de alguna manera refería una propuesta distinta a la de los gobiernos neoliberales. El propio nombre de su propuesta tenía la intención de tomar distancia de las fórmulas ortodoxas de mercado: *Mi Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela*.

El gobierno que se iniciaba con Caldera se constituyó como una especie de transición, no declarada ni en principio planificada, hacia el chavismo. Como ya se dijo, la propuesta que lo colocó en las puertas de Miraflores fue la de considerarse una candidatura que explícitamente desarrollaría políticas distintas a los programas de ajustes neoliberales. Además de su promesa electoral, la cual nunca se materializó, la idea era adelantar un proceso constituyente e instaurar un modelo de “democracia participativa”, direccionado por el propio Congreso: «El nuevo Congreso debe asumir de inmediato al instalarse su función constituyente. Su principal orientación debe ser complementar la democracia representativa con la democracia representativa» (Caldera s/f, p. 9).

Más adelante planteó incluso la implementación del referéndum revocatorio, la ampliación de las facultades legales para el Poder Ejecutivo, concretamente la posibilidad de disolver el parlamento, el incremento de los derechos ciudadanos, la afirmación de la soberanía nacional; propuestas centrales que luego estarían plasmadas en la Constitución de 1999:

Así como el referéndum revocatorio permitirá la destitución del Presidente de la República y demás altos funcionarios mediante el voto popular, debe darse al jefe de Estado la facultad de disolver las Cámaras Legislativas cuando no estén cumpliendo las funciones para las cuales fueron electas (ibíd., p. 10).

Estas promesas hacían parte de las aspiraciones sociales que estaban siendo expresadas en el discurso de campaña de Caldera. Los partidos estaban tan desprestigiados, y en general las instituciones del sistema de partidos, que surgía de las expectativas de una pluralidad de sectores de la sociedad la figuración de hombres con algún tipo de resolución, capaces de tomar decisiones percibidas como drásticas. En ese sentido específico es probable que ya se estuviera perfilando socialmente el crecimiento de los liderazgos personales antes de la irrupción de Chávez.

Con todo, luego de dos años de intentar algunas fórmulas en materia de política económica que funcionaran como sustitutas de las recetas ortodoxas de primacía del mercado, en 1996 se presentó al país la *Agenda Venezuela*. ¿Por qué para ese momento no se pudo implementar una política social y económica alternativa? Veamos.

En aquel contexto existían otros impedimentos igualmente apremiantes. El escenario internacional del momento estaba cuadrado en torno al llamado consenso de Washington, de manera que para el gobierno la implementación de una política distinta resultaba una acción casi temeraria. El estallido de la debacle financiera bancaria, que conmovería lo que quedaba de los fundamentos del discurso de Punto Fijo, concentrados en la promesa de la distribución de la renta petrolera, así como algunas contradicciones entre sectores concentrados en el gabinete económico del gobierno fueron elementos que contribuyeron a profundizar el clima de conflictividad.

Un dato que ilustra la magnitud del problema financiero de 1994, lo constituía el hecho de que para ese año el Estado inyectó al agonizante sistema bancario el equivalente a 10% del Producto Interno Bruto (*El Nacional*, 12 de diciembre de 1994). De esta manera muy pronto quedó comprometida la capacidad del Estado para ensayar algún tipo de estrategia no estrictamente neoliberal, en la medida en que se veía impelido a acudir y en consecuencia a comprometerse con los poderes de facto internacionales en busca de financiamiento.

Por otra parte, los ahorristas de aquellas entidades financieras se sintieron decepcionados cuando pudieron ver cómo el Estado se apresuraba a auxiliar a los grupos especuladores de una banca fraudulenta, quienes pronto se irían del país con la mayor parte del dinero conseguido en una muestra de impunidad sin precedentes. Parecía que frente a la trapacería de los recientemente encumbrados, el sistema judicial desfallecía por no ser capaz de procesarlos. Debió cundir socialmente una sensación de absoluta fragilidad, desamparo y desmoralización, frente a los desmanes de la clase política y sus empresarios.

En este contexto, la Agenda Venezuela fue un plan de ajuste económico organizado que seguía de cerca los principales lineamientos del plan de ajustes de Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno; la propuesta fue presentada en abril de 1996¹⁵.

Con todo, existen algunas diferencias que valen la pena poner de bulto. En primer lugar, el gobierno se cuidó de hacerse de un piso de apoyo cuando las medidas fueron anunciadas en el marco de conversaciones entre las organizaciones empresariales, los partidos del estatus con presencia en el Congreso y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), una organización obrera de tendencia socialdemócrata muy cercana a Acción Democrática.

En segundo lugar y como un elemento más bien subjetivo, vale la pena mencionar que se trataba del gobierno del doctor Caldera, cuya presencia en Miraflores constituía una relativa garantía de manejo escrupuloso de los dineros de la nación, al menos esa

15 Las medidas contemplaban el aumento del precio de la gasolina y demás derivados de los hidrocarburos en el mercado interno; liberación de las tarifas de los servicios públicos; liberación plena del sistema de control de cambios, con la consiguiente devaluación del bolívar; incremento de las tasas de interés; aumento del porcentaje a pagar por el impuesto a las ventas; plan de privatización de empresas públicas; liberación de todos los controles de precios, quedando sólo controlados los precios de cinco artículos esenciales de la dieta del venezolano; creación de un fondo para la protección del sistema bancario; inicio de la discusión para la reforma del sistema de prestaciones sociales; programas sociales de enfoque focalizado para proteger a los sectores más vulnerables de la población (López 2005, pp. 29-30).

opinión estaba relativamente extendida socialmente y tuvo alguna perdurabilidad en el desempeño del gobierno. Esta especie de “autoridad moral” generada por la evidencia de contar con un presidente de avanzada edad, que a sus años no había estado envuelto personalmente en ningún escándalo de corrupción, del cual sus adversarios pudiesen sacar provecho, era manejada y explotada desde las más altas instancias del Estado. De ese modo se establecía una diferencia que en el imaginario social lo colocaba en las antípodas con respecto a la mala reputación que había acompañado a la anterior gestión neoliberal, la de Carlos Andrés Pérez.

El otro factor que hacía parte de una estrategia para darle credibilidad social al plan de ajustes, era que en este caso la vocería no la llevaría el presidente Rafael Caldera, sino uno de sus ministros, el de economía, Teodoro Petkoff, quien además mostraba fuertes convicciones, dignas de mejor causa a la hora de propalar la pertinencia de las medidas de ajuste estructural. Un personaje conocido por su pasada militancia en la izquierda, fundador del MAS.

Para aquellos años noventa, incluso ya estaba bastante extendida cierta creencia, especialmente en las capas medias, sobre la pertinencia de llevar adelante un proyecto general que supusiera la necesidad de hacer un Estado *eficiente, racional*; esto traducía necesariamente un Estado ocupado en funciones específicas de policía, resguardo de fronteras, seguridad interna y educación, pero sobre todo en los primeros niveles. Un Estado que además, a la luz de aquellas percepciones, alentara la competencia entre los ciudadanos, especialmente entre los pobres. Una competencia “natural”, sin *distorsiones* ejercidas por políticas interventoras. Expresaba en últimas una *nueva forma de aprendizaje* en sustitución de las dádivas a través de las cuales se habían tratado de justificar los gobiernos pasados del bipartidismo. En todo caso ya estaba funcionando socialmente cierta legitimidad sobre las virtudes relacionadas con privilegiar las lógicas del mercado, la desregulación social, el individualismo, la versión según la cual la globalización neoliberal representaba la única posibilidad para incorporarse al *bienestar*.

Las medidas anunciadas se comenzaron a implementar en un escenario signado por un moderado optimismo. Hubo un aumento de los precios del petróleo para 1997, además en ese año se logró recaudar más impuestos, al tiempo en que se actuó con cierta disciplina en el ámbito de gasto público. Los datos conocidos señalan un crecimiento del PIB en 5,12% y un descenso de la inflación en 50%, lo que significaba una mejora notable en comparación con los índices de inflación registrados en 1996, que giraban alrededor de 99% (IESA 2010).

Aunque, por ejemplo, algunos de estos datos se siguieron mostrando en 1998 –la inflación se calculó en 29,9%, incluso más baja que el año anterior–, la situación social y política tendió a empeorar. Hacia el final del período, la figura mediadora de Caldera, que tanto había contribuido a distender las relaciones entre sectores militares, dejó de verse con frecuencia y eso generaba todo tipo de rumores sobre su salud y la inminencia de pronunciamientos militares. Peor aún son las cifras que representan el incremento de la pobreza: 44% de las familias venezolanas no contaban con recursos suficientes para cubrir algunos requerimientos básicos para vivir, y cerca de 19% no podía consumir los alimentos necesarios para una dieta básica. Con respecto a los niveles de desempleo, ya la mitad de la población económicamente activa trabajaba en la economía informal, mientras que las cifras de desocupación abierta se ubicaban en 10% (ibíd., p. 98).

Esto ocurría mientras la población veía que desde el Congreso se hacían esfuerzos por restablecer los acuerdos partidistas entre unos actores ya supremamente cuestionados. Fue así como, producto de la debilidad de Convergencia en el Parlamento, se determinó la alianza con AD y luego con Copei, quienes representaban una importante cantidad de votos que le permitirían algún tipo de gobernabilidad a lo interno de las instituciones. Sin embargo, desde la perspectiva de las mayorías descontentas, estos movimientos le daban la razón a quienes estaban interesados en probar caminos más radicales.

De esta manera funcionó parcialmente la naturaleza pactista del régimen, al momento de detener algunas leyes orgánicas que

podían haber oxigenado a mediano plazo aquel sistema ya desfalleciente. Incluso en 1997, las causas por delitos de corrupción que tenían como principal responsable al ex presidente Jaime Lusinchi fueron anuladas como parte de los acuerdos entre las cúpulas partidistas. La selección de los miembros del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, se hizo con los procedimientos menos democráticos a través de los cuales se excluyó a fuerzas con presencia en la calle. Para 1998, un país, que ya había dado muestras de cambios en sus preferencias, observaba la conducta de los partidos del estatus y del gobierno, envueltos en una “alianza perfecta”, la misma que sin embargo iba a contribuir de manera determinante a un descalabro aún mayor.

El conflicto social expresado en las protestas populares fue una causa y al mismo tiempo una consecuencia del grado de deslegitimación que padecía el modelo democrático representativo. Estos movimientos de protesta expresaban tendencias que iban configurando la formación de sectores populares cada vez más beligerantes. Los “nuevos actores” tenían la peculiaridad de haberse constituido fuera de los márgenes del sistema político. Esta aseveración tiene varias implicaciones. Como se ha comentado anteriormente, los partidos políticos fueron casi exclusivamente las instituciones a través de las cuales se canalizaban las protestas y en general las demandas democráticas, sobre todo en las dos primeras décadas de vigencia de la democracia liberal. No obstante, fueron perdiendo esta capacidad, al punto de crecer su rechazo hacia esos partidos emblemáticos, ya que el contenido de los movimientos populares, digamos su personalidad política, era expresamente antipartidista e incluso, en algunos casos, abiertamente antiestatal¹⁶.

El punto de partida de esta situación de descontento habría que ubicarlo, no tanto en la implementación de las reformas neoliberales efectivamente instrumentalizadas, sino más bien habría que tomar en cuenta las subjetividades que pudieron

16 El único partido que logró encarnar las expresiones de protesta a mediados de la década de los noventa fue La Causa R.

removerse luego de que se tratara de “imponer” a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa una suerte de “nuevo trato” entre el Estado, las élites tecnocráticas que lo ocupaban y el resto de la sociedad. Pero además, y más evidente resultaba, producto de la baja en los precios del petróleo, un Estado que se encontraba neutralizado como agente principal de la distribución de la renta. En la relación de estos dos aspectos se podrían contextualizar las acciones de presión y de calle que se emprendieron en la década de los noventa, cuyo elemento distintivo lo constituía su carácter antiinstitucional. Aunque la mayor parte de estas acciones no se procesaban y no acontecían a través de canales de mediación, sí constituían formas legítimas de hacer política.

Esa connotación antipartidista y en algunos casos antiestatal dotaba a los agentes de la protesta popular de un carácter espontáneo y voluntarista, que le aportaba a la evolución de la protesta y a su accionar público cierta efectividad al momento de registrar los acontecimientos, al tiempo que los condenaba a constituirse como movimientos casi episódicos. Por otra parte, el rechazo a los partidos, y en general la cultura antiinstitucional que describía a estos movimientos, impidió una estructuración efectivamente nacional y más permanente en el tiempo.

En otro orden, existían razones más estructurales que ayudaron a entender el fenómeno, ya que como argumento de fondo la globalización neoliberal trajo consecuencias traumáticas para la sociedad venezolana (Coronil 2002). Sus efectos visibles se circunscriben entonces al sacudón de 1989, a los golpes de Estado frustrados de 1992, a la salida institucional del presidente Carlos Andrés Pérez en 1993, y a las transformaciones en las preferencias electorales descritas anteriormente. Todo este proceso entrañaba transformaciones culturales que objetivamente estaban ocurriendo. Veinte años de recesión económica y la ausencia de canales de mediación entre los sectores populares y el Estado generaron un malestar que se situó en la base de la deslegitimación del régimen. Los pobres respondieron con la organización de las protestas, de alguna forma se convirtieron en

los principales protagonistas, una vez que partidos y sindicatos se vieron debilitados en su intención de representarlos. Fue así como al final de la década de los noventa la protesta se generalizó hasta convertirse en un recurso utilizado por una pluralidad de sectores de distinta proveniencia social (Smilde y otros 2002).

La radical heterogeneidad de los sujetos inmersos en las protestas debería plantear una interrogante crucial que altere los análisis que desde la izquierda se hacen, situados en una versión digamos clásica del modelo dialéctico. Es claro, para el caso que nos ocupa, que la mayoría de quienes salen a la calle no son, en rigor, trabajadoras y trabajadores “formales”, al menos en el modelo dialéctico según el cual el sujeto de la revolución está circunscrito a la posición que ocupa en el proceso productivo, es decir, quienes se han visto forzados a vender al capitalista su fuerza de trabajo, porque no tienen otro recurso para vivir, están incorporados, sin embargo, a un proceso que al mismo tiempo que los rebasa, los coloca como actores centrales de una trama que terminará con el comienzo de un tiempo radicalmente igualitario. Para Marx, entonces, la historia del desarrollo capitalista está inscrita en lógicas de la producción. Esto es, su análisis pone como consideración fundamental la historia de un “sistema” de producción que garantiza la unificación de procesos lógicos y necesarios, donde trabajadores sumidos en relaciones de producción que los desfavorecen tratarán de cambiar la historia a su favor.

De esta forma, la clase trabajadora se constituía como un agente cardinal del cambio histórico inevitable, conforme se desarrollaran las fuerzas productivas. Para garantizar la unidad y coherencia teórica de esta propuesta, y en consecuencia del proceso histórico mismo, Marx sostuvo que el sistema capitalista en transición había creado otros grupos que estaban distanciados de esta *historia pura de la producción*. Estos grupos confirmarían la existencia de un adentro (sistema) donde transcurría la historia (Laclau 2004).

Mientras estos sectores *lumpenproletariado* no se correspondían propiamente al curso dialéctico de un tiempo progresista, unificado y necesario, el proletariado estaba destinado a constituirse en la clase que iba a fundar a través de la extensión de

sus valores democráticos, la sociedad sin clases, luego de que capturara el poder del Estado. En este sentido, Marx no se ahorra calificativos para advertir lo perjudicial que resultaría para los trabajadores la alianza con estas “clases marginales”. El lumpenproletariado en su carácter de expulsado de la historia aseguraba «la posibilidad de una interioridad pura, de una historia poseedora de una estructura coherente» (ibíd., p. 181).

La distancia del lumpenproletariado con respecto al proceso productivo constituía su expulsión de la historia, pero esta clase de *escoria* no sólo estaba formada por la pobrecía que llegaba de los campos a las ciudades, también a su modo, la aristocracia financiera como expresión de un capitalismo especulativo entraba en el contenido de la categoría (ibíd., p. 193). La idea que se quisiera sugerir, tomando como punto de referencia el texto de Laclau, *La razón populista*, es que precisamente los sectores que toman la calle en los años noventa, y luego con más vigor en los años siguientes, son las multitudes que no están dentro del concepto convencional de trabajadores. Por consiguiente, problematizar el concepto de clase social, determinado por su grado de vinculación existencial con la actividad productiva, produce de inmediato la aparición de una multiplicidad de actores interesados, bajo ciertas circunstancias, en la materialización de un nuevo orden. Esos actores son, para el caso que nos ocupa, el producto de las políticas de ajuste neoliberal.

Resulta entonces más sugerente analizar en este caso la sociedad como una instancia siempre en proceso de conformación, de ningún modo como una realidad a priori. Más aún, los procesos históricos no revisten de fines inevitables, sujetos a realidades incommovibles donde la creatividad humana tiene poco que hacer frente a una cartilla previamente escrita. En este contexto, vale la pena agregar el comentario de Laclau: «Los “pueblos sin historia” han ocupado el centro de la escena hasta el punto de destrozar la noción misma de una historicidad teleológica. Entonces, olvidemos a Hegel» (ibíd., p. 186).

La presencia de los sectores proletarios y trabajadores es modesta, y si bien también estarían descontentos no son los que

llevan el protagonismo de la protesta social. Además, una porción importante de los grupos de trabajadores organizados aún lo hacen en sindicatos controlados por los partidos o incluso neutralizados por prácticas clientelares que a la larga favorecen el mantenimiento del orden social.

Otra clase de protestas se encuentra en los movimientos de presión de las capas medias y su denuncia por “democratizar” al régimen de partidos. Si bien muestran algunas formas de organización, acaso más permanentes, sus demandas y la lectura que hacían del país –desde posturas ligadas a la defensa de la propiedad, la preservación de los espacios urbanos, prevenidos contra la invasión de sus urbanizaciones– los confinaba a sus estrechos marcos de acción de clase, interesados en resguardar sus conquistas y en general su estilo de vida (Lander 1995).

Otros son los sectores emergentes. En páginas anteriores se pudo constatar el crecimiento, particularmente sostenido, desde los primeros años de la década de los ochenta, del desempleo o del empleo informal. Este proceso empalmó con la migración pronunciada para la misma época de venezolanos que dejaban la pobreza del campo para luego hacer parte de la miseria en la ciudad, según se constató en capítulos precedentes. Por último, otro componente importante, la desindustrialización también cifrada en capítulos anteriores representó otro proceso que debió impactar en el crecimiento de sectores empobrecidos. De igual modo, para la época, el sistema de educación pública dejó de representar una vía de ascenso social para los jóvenes de las zonas marginales, lo que conllevó, relacionado siempre con una dinámica social general de empobrecimiento, a incrementar el fenómeno de la deserción escolar. En consecuencia, la desocupación pura y simple, la actividad comercial de los buhoneros, así como otras formas de supervivencias ejercidas fuera del ámbito “regulado” del sistema del trabajo y la producción tendieron a crecer.

Los informes anuales que publica el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) son una fuente básica para analizar las acciones colectivas de protesta y sus protagonistas, así como también la respuesta del Estado frente a

tales movilizaciones. Se puede observar su incremento a lo largo de la década considerada en las líneas siguientes. Mientras que desde octubre de 1989 hasta septiembre de 1990 las acciones de calle se contabilizaron en 675, hacia el final de la década (1999) aumentaron a 805. Los años de más protestas se ubican entre octubre de 1992 y septiembre de 1993 con 1.047 manifestaciones (Smilde y otros 2002). Lo más seguro es que este incremento se deba principalmente a los coletazos de los pronunciamientos militares de 1992 y al contexto signado por el aumento de la incertidumbre económica y financiera que se desató en 1994. Las formas como se evidenciaron esas protestas hacen parte de un abanico de alternativas que van desde marchas, tomas e invasiones, huelgas de hambre, saqueos a establecimientos, quemas de transporte público, disturbios, hasta cierre de calles y avenidas.

Hay un factor que se comenzó a instaurar concretamente a partir de las jornadas de protesta de febrero y marzo de 1989; se trata del fenómeno de la impunidad. Esta situación supone no solamente la existencia de un Estado incapaz de vehiculizar las demandas sociales, sino la suprema debilidad de unas instituciones que en el mejor de los casos se muestran desbordadas por el grado de insatisfacción social que movilizó a las capas sociales más postergadas. Más bien el crecimiento de las protestas implicó una respuesta represiva por parte del Estado, y el establecimiento de formas graves de impunidad. Un informe de Provea llamado *Una década de impunidad en Venezuela*, elaborado a finales de 1999, retrata la conducta parcial de unas instituciones que de forma sistemática terminaron amparando los excesos y los crímenes cometidos en contra de la población. Al mismo tiempo, el informe se atrevía a sugerir algunos correctivos especialmente pertinentes en aquel 1999, tiempo en que el país estaba comenzando a participar en el proceso constituyente:

La impunidad en Venezuela es posible gracias a una serie de mecanismos que se activan durante las diferentes etapas de la consumación de los hechos, así como durante los procesos de investigación tendientes a establecer responsabilidades, aplicar

sanciones y restablecer los derechos vulnerados. Para desactivar esos mecanismos, además de voluntad política, es necesario llevar adelante un proceso que pase por el ajuste de las leyes substanciales y la reestructuración del aparato del Estado, en particular del sistema judicial, del Ministerio Público y de los órganos del Estado encargados de velar por los derechos humanos. En este sentido, el Estado debe eliminar la aplicación del fuero militar en casos de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad; debe fortalecer el Ministerio Público y crear un Defensor del Pueblo con suficientes potestades preventivas, investigativas y de denuncia ante las instancias correspondientes.

El presente capítulo trató de cubrir un lapso relativamente prolongado. Comienza en el momento en que se tratan de aplicar sistemáticamente una serie de políticas que buscaban la reestructuración macroeconómica, pero también contemplaban reformas institucionales que iban a determinar cambios en el tipo de relación entre el Estado y la sociedad. Sin embargo, esa idea es más bien obvia, ya que el neoliberalismo entrañó objetivos que trascendían las preocupaciones puntuales de los venezolanos para aquel momento. Me refiero al intento por cercenar los procesos democráticos mundiales a través de diversas estrategias. Para ello se propuso revitalizar el ámbito del mercado como la instancia que espontáneamente “regularía” la vida de los individuos. Su objetivo más ambicioso era devolver al capitalismo su fortaleza, aunque esta parte del programa neoliberal no se verificó, su fortaleza estuvo en los cambios culturales que expandió y legitimó sobre todo entre las élites políticas y en algunas porciones de intelectuales. Si bien esto es cierto, no se puede exagerar sobre el alcance de estas consecuencias en la experiencia venezolana o latinoamericana. Las reformas neoliberales no contemplaron en ningún momento la construcción de alguna hegemonía.

Los intentos por instaurar un plan de ajustes trajeron implicaciones puntuales que se expresaron, en general, en la profundización de las dificultades del sistema de partidos. Golpes militares con acompañamiento civil, insurrección popular, crisis

financiera, transformaciones en las preferencias políticas-electorales, nuevos actores sociales y políticos; todo esto sucedía en un período relativamente breve, pero de gran intensidad. El resultado era evidente, entrada la década de los noventa. Se asistía al naufragio de la democracia de Punto Fijo, pero cundía una gran incertidumbre en relación con el escenario político que vendría. Muchos apostaron a una salida, de alguna manera consensuada, entre las fuerzas que encarnó Rafael Caldera en su segunda presidencia, y los factores sobrevivientes del bipartidismo. Con todo y la deriva neoliberal, el gobierno de Caldera representa a la luz de consideraciones históricas un tránsito pacífico entre los estertores del viejo régimen y la emergencia del chavismo.

En una entrevista realizada por la revista *Primicia* al entonces ministro de la Oficina Central de Coordinación y Planificación (Cordiplan), Teodoro Petkoff, el alto funcionario del saliente gobierno de Caldera, se lamenta del fin de un gobierno que en la mitad de su período optó por implementar reformas macroeconómicas y terminó sus días en medio de una impopularidad general. Sin embargo el Ministro ubica las causas del infortunio no como consecuencia de errores de determinadas políticas, sino de un escenario exterior que a última hora cubrió de sombras los alcances de la Agenda Venezuela:

Creo que existe un cambio en el clima psicológico del país con la baja de los precios del petróleo (...) No merecíamos este final luego del enorme esfuerzo hecho, no tanto por producir resultados inmediatos sino por desatar un proceso de cambios (1998, p. 13).

El chavismo

Aquella radical pluralidad de actores incursionando en protestas dentro de un contexto de malestar general con sus partidos más emblemáticos inmersos en un estado de desprestigio profundo, y un Estado incapaz de satisfacer las demandas de la mayoría de los sectores sociales preparó el escenario para la emergencia del chavismo. Las élites que desde los años ochenta ocuparon cargos de relevancia dentro de las funciones de dirección política del país eran vistas por la mirada general como grupos con intereses extraños a los de la nación, cuyas intenciones desembocaban, por ejemplo, en la entrega de los recursos nacionales.

Aquí resulta apropiado hacer una distinción. La propia formación del régimen puntofijista establecido, incluso constitucionalmente en la carta de 1961, disponía una estrecha articulación entre partidos del establecimiento y el Estado; la prueba de esta relación interdependiente la revela el hecho de que mientras la popularidad de los partidos de la derecha tendió a decrecer, también el Estado en su conjunto se vio afectado. La perturbación en la capacidad de distribución de la renta petrolera y la orientación neoliberal de las reformas que se tratan de implementar sistemáticamente en la década de los noventa, significan la profundización de los síntomas del malestar ya existente. ¿Pero de dónde nacería la salida a través de la cual iban a encarnar todo ese conjunto de demandas postergadas?

Las organizaciones políticas revelaban una debilidad patente, al tiempo que internamente en la propia dirección nacional de aquellos “aparatos”, pocos se atrevían a defender la experiencia que vivió el país desde el 23 de enero de 1958. No se puede afirmar que la izquierda, al menos la que se agrupaba en partidos, había sido el principal beneficiario de la crisis de la democracia liberal. El fin del *socialismo real* había afectado hasta a la propia idea de cambio social, de modo que los mensajes revolucionarios se desplegaban en un ámbito socialmente reducido por parte de algunos estudiantes universitarios y de algunos militantes sectarios. Otras organizaciones que alguna vez habían conservado una vocación popular concentraban ahora su actividad en las instancias que ofrecía el Estado (parlamento, gobernaciones, alcaldías, etc.), al tiempo en que progresivamente se habían vaciado de un contenido programático radical.

Los empresarios, banqueros y algunos dueños de televisoras también habían percibido la deslegitimación y en consecuencia pretendían controlar el poder político, esta vez sin la mediación de los partidos del establecimiento. Pero, en efecto, las propuestas claramente neoliberales nunca fueron susceptibles de conformarse en un programa de gobierno con apoyo popular. La posibilidad de simbolizar todas las demandas populares, e incluso ciertas solicitudes que provenían de sectores privados, no podían concretarse en forma de un programa político, ni mucho menos lo podía resumir alguna organización partidista. La fragmentación y la desestructuración social hacían difícil la elaboración de un programa dirigido a sectores específicos.

De modo que la convocatoria a la nación para emprender un proceso de cambios radicales que supusiera, en primera instancia, la superación del régimen vigente para ese momento, la realizó el mismo personaje que había protagonizado un alzamiento militar en 1992, Hugo Chávez Frías. Pero más concretamente, su discurso fue lo suficientemente amplio como para representar la aspiración de los sectores postergados, pero también lo suficientemente *polarizador* como para plantear una ruptura necesaria entre el debilitado régimen y la eventual posibilidad de forjar *otra historia*.

La gestación del movimiento militar

Los partidos hegemónicos del modelo bipartidista habían sido por un tiempo exitosos en su objetivo de ganarse la confianza de los militares. Así, Venezuela durante el siglo xix y buena parte del xx había asistido a la incursión de los militares en la dinámica política desde el comienzo de la etapa “independiente”, luego de una cruenta guerra por edificar la república y plantear la independencia del Estado español. Los militares tuvieron una relevancia crucial en el desarrollo posterior de la nación y tanto sus acciones como sus palabras contribuyeron a forjar una primera idea de comunidad nacional en un país exhausto socialmente: sin mayores recursos económicos, y en general fragmentado. Durante el siglo xx, la participación de los sectores militares siguió jugando un papel estelar, instaurando gobiernos dictatoriales o teniendo una incidencia determinante en los temas nacionales.

Pero en verdad, al menos hasta el 4 de febrero de 1992, los militares se habían constituido como un punto de apoyo importante al régimen bipartidista. Esta lealtad bien la demostraron las Fuerzas Armadas, cuando fueron llamadas a reprimir a las pobladas que protestaban desde el 27 de febrero de 1989. También el acercamiento con políticos del establecimiento supuso la incorporación de ciertos sectores castrenses a manejos clientelares y a complicidades de todo tipo como método para procurarse ascensos en la carrera de las armas.

La presencia de movimientos con aspiraciones políticas de cambio social se estableció como una muestra del proceso de deslegitimación que venía acusando el puntofijismo. Los esfuerzos de penetrar las Fuerzas Armadas por parte de sectores de izquierda constituye una historia que se remonta al menos a principios de los años sesenta. Una parte de los comandantes de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) provenían de las filas castrenses. Pero fundamentalmente la historia sobre la progresiva politización de grupos dentro de los cuarteles comienza con la inquietud que muestra el para entonces subteniente Hugo Chávez.

Este testimonio que ofrece Chávez es importante, en primer lugar porque su carrera militar entronca desde muy temprano

con la actividad de las fuerzas insurgentes activas aún en Venezuela durante los años ochenta, cuando el joven Chávez estaba incorporado a labores de contrainsurgencia rutinarias. En segundo lugar, pero acaso más determinante, porque marca su relación con una interpretación de la historia que bebe de un autor particular, Federico Brito Figueroa, quien reivindica el papel de algunos héroes populares durante las guerras civiles del siglo XIX:

Como subteniente me mandaron a Barinas, en La Marqueseña había un pelotón antiguerrillero del batallón Cazadores Manuel Cedeño, era un Teatro de Operaciones, el T03 (...) En otro momento encontré un carro perforado a balazos, que me dijeron que servía para enlace de guerrillas, le abrimos el maletero y tenía varios libros, recuerdo que uno era *El imperialismo. Fase superior del capitalismo* ¿de Lenin? Pero el que me interesó más fue *Tiempo de Ezequiel Zamora*, del profesor Brito Figueroa, que estaba en unos estantes que dejó el oficial a quien yo sustituí (Díaz 2006, pp. 39-40).

Luego de algunos intentos de organización, Chávez junto con Jesús Urdaneta Hernández y Felipe Acosta Carles crean el Movimiento Revolucionario 200 (MBR-200) en 1982. Ese mismo año, el 17 de diciembre, día de la muerte de Simón Bolívar, efectúa el juramento bajo el Samán de Güere en la ciudad de Maracay, estado Aragua, cuya idea era jurar por el rescate de la patria (López 2003). Quienes asistieron a la peculiar ceremonia fueron los ya mencionados arriba, además de Francisco Arias Cárdenas y Raúl Baduel. Aunque en principio se agrupan como círculo de estudios, pronto van a tener contactos con otros grupos fuera del estamento militar, pero también dentro con otros sectores con intenciones conspirativas similares. Por declaraciones del propio Chávez, su formación en términos organizativos se debió naturalmente a las enseñanzas que recibió en la carrera militar, pero también, aunque en una proporción menor, a la relación con la cultura organizativa de las organizaciones leninistas, como el Partido Comunista (Díaz 2006).

Las conexiones entre grupos de militares jóvenes y los civiles fue en primera instancia a través del hermano de Hugo Chávez, Adán Chávez, quien formaba parte del Partido de la Revolución Venezolana (PRV). Fue Adán quien le propuso un eventual encuentro con Douglas Bravo, personaje conocido en las filas de la izquierda insurgente (ídem). Luego vendrían otros intercambios con políticos emblemáticos, varios de ellos serían referencia importante para la formación de Chávez, como Alfredo Maneiro; Pablo Medina, de La Causa R; más tarde con miembros de la Liga Socialista, Bandera Roja (Garrido 2003). Incluso antes y luego del pronunciamiento militar del 4 de febrero, el MBR-200 y Chávez, particularmente, trabaron relaciones con intelectuales y personalidades políticas que desde algunas universidades públicas y otros espacios venían trabajando para impulsar transformaciones políticas desde una pluralidad de perspectivas, como José Vicente Rangel, Adina Bastidas, Luis Fuenmayor, Omar Meza, Manuel Quijada, Héctor Navarro, Luis Miquilena, Jorge Giordani, Trino Alcides Díaz (López 2003).

En un primer momento, las fuentes intelectuales que nutrieron al movimiento, algunas de las cuales conformaron la propuesta del “Árbol de las Tres Raíces”, las desagrega el propio Chávez como sigue:

En esa época nosotros comenzamos hablando de Bolívar, por supuesto, desde cadete, pero yo seguía estudiándolo, leí el libro de Carrera Damas sobre el culto a Bolívar, comencé a verlo distinto, no ese que la misma oligarquía y los sectores pudientes transformaron en algo que no era, conocí el de carne y hueso de Herrera Luque, el Bolívar antiimperialista de Pividal, el de Acosta Saignes y el de Liévano Aguirre, y fue así como el grupo de nosotros planteó que era necesario incorporar a otros pensadores y empezamos esa búsqueda a través de lecturas, estudios y discusiones, aparecieron los nombres de Guaicaipuro, de Sucre, de Miranda. Leímos mucho de sus obras: la *Colombeia*, se examinó su visión europea, que estuvo muy alejada de Venezuela. Fue así como surgió el nombre de Simón Rodríguez (...) Y luego, quizás por la influencia que yo tenía de Sabaneta, por los cuentos de la

abuela Rosa Inés, de las lecturas de Ruiz Guevara, de *Por aquí pasó Zamora*, de León Tapia, y otros libros, se afianzó esa figura, y por los años 85, 86 y 87 fue ese proceso, y fue surgiendo esta tesis de los tres pensadores en uno, la del árbol de las tres raíces con el tronco central que era Bolívar (Díaz 2006, p. 54).

Del análisis de la cita anterior se van prefigurando también nociones que influyeron en la cultura política que van adquiriendo desde temprano los bolivarianos. Estas nociones confluyeron en la organización de una percepción de la historia que es específica, a través de la cual la presencia de personajes relevantes, de líderes populares, tiene centralidad desde el primer momento. La trama de la historia vinculada a individuos que crean y conducen pueblos, y al mismo tiempo contribuyen de manera determinante a la realización de trascendentales aspiraciones colectivas, no toma en consideración la existencia de estructuras sociales y culturales fraguadas en el tiempo, cuya presencia “objetiva” organiza un contexto capaz de condicionar las decisiones tomadas por personalidades, movimientos, clases sociales, etc. Estas ideas se relacionaron pronto, producto sobre todo de la actividad conspirativa, con la fuerza del imaginario jacobino. Es muy probable que esto haya favorecido rasgos de voluntarismo político, presentes hasta hoy en la actuación del movimiento bolivariano.

La invocación permanente a las heroicidades de la independencia no implicó de ninguna manera un esfuerzo por conocer el proceso que da nacimiento a la nación. Las apelaciones retóricas a un pasado forjado por hombres sin manchas, perfectos, purificados por la intervención en las guerras, funcionan como lazos sociales que cohesionan al pueblo chavista. Ahí radica únicamente su *utilidad*. Desde un principio se va a experimentar entonces todo un proceso de socialización que no necesariamente deba ser en sí mismo revolucionario. Recrear los mitos liberales de la nación no tiene por qué involucrar la apuesta por necesarias rupturas simbólicas. Más bien la sociedad asistirá a una experiencia de retorno masivo a la escuela primaria.

Hechos históricos que en su momento obraron como motivo de inspiración tienen en el proceso de la Independencia ame-

ricana su punto de partida, pero también fueron reiteradas las enseñanzas que se obtuvieron como consecuencia del estudio de la Revolución Cubana (1959), el proceso de la Unidad Popular en Chile, liderado por Allende (1970-1973), la experiencia peronista en Argentina, el legado nacionalista del general Omar Torrijos en Panamá. También de la experiencia aportada por el general Juan Velasco Alvarado en Perú (López 2003). Con todo, es en la consideración de la matriz histórica del proceso de independencia americana, especialmente la liderada por Simón Bolívar durante las primeras décadas del siglo XIX, donde el proyecto ideológico bolivariano encuentra su fuerza simbólica. Esta característica fue clave desde el principio para comprender la progresiva vinculación afectiva que logró el comandante Chávez con los sectores populares. El discurso chavista, en síntesis, coloca al pueblo venezolano como el protagonista definitivo, junto con los patriotas de la independencia, en la tarea de librar las batallas que en suma son la continuidad de las que libró Bolívar para materializar la Independencia. La *devoción* por la epifanía de la Independencia conllevó a cierto desapego por la historia más contemporánea, especialmente la venezolana del siglo XX.

Como una experiencia que ha debido dejar consecuencias posteriores no habría que descartar las relaciones, si bien episódicas y signadas por el rigor normativo de la dinámica militar, que se establecieron entre la clase política puntofijista de entonces y los líderes del movimiento militar. Chávez es recurrente en sus discursos al destacar el desvío moral de personalidades, de presidentes, de funcionarios y funcionarias que ocuparon cargos de importancia en la estructura del Estado. Chávez mismo habría presenciado las “desviaciones” de varios presidentes, al momento de ejercer como militar en las instalaciones del gobierno.

La perspectiva del poder

Los acontecimientos que replantearon la perspectiva del poder en los miembros del movimiento bolivariano debieron ser las protestas suscitadas en la semana del 27 de febrero de 1989.

Entre otras cosas, porque la revuelta popular fue reprimida de forma desproporcionada por el Ejército. Varias implicaciones tuvieron para el país, y también para el movimiento en los cuarteles, estos acontecimientos anteriormente analizados.

Las Fuerzas Armadas cumplieron un papel de resguardo de las instituciones, al tiempo en que pusieron sobre el tapete la alta debilidad institucional del Estado en su conjunto. Pero además, esta actuación cuestionada por el pueblo y por varias organizaciones de derechos humanos supuso que el grado de debilitamiento y deslegitimación se profundizara con los años. Por otra parte, el modelo de Punto Fijo no se robusteció a mediano plazo, luego de la implementación de algunas reformas relacionadas sobre todo con el proceso de descentralización, aunque develaron para “un país” concentrado y asentado en su capital, la emergencia de una visión efectivamente más nacional. De otra manera, del proceso de descentralización también emergieron varios liderazgos de importancia nacional. Es probable entonces que lo que no implicó a mediano plazo la oxigenación del modelo político forjado desde 1959, sí contemplaría a más largo plazo la existencia de algunas transformaciones culturales significativas, como la evidencia de una cultura política menos centrada en preocupaciones provenientes de la capital.

Sin embargo, para los integrantes del movimiento bolivariano aquellas protestas de 1989 constituyeron un hecho “vergonzoso”; así lo recuerda Hugo Chávez:

A las dos semanas de estar ejerciendo normalmente mi trabajo, recuerdo que un grupo de oficiales de la misma casa militar de Carlos Andrés Pérez, a los que yo siempre veía en la puerta, de guardia, que no estaban siquiera en el movimiento, pero que sabían que había algo, me dijeron: mire mi Mayor, ¿es verdad lo del movimiento de los bolivarianos? Nosotros queremos saberlo, porque no estamos dispuestos a seguir matando gente. Era gente de la casa militar de Pérez, gente de confianza del gobierno. Eso es para darte una idea de cómo esa masacre del F-89 sensibilizó a muchos militares, especialmente a los más jóvenes que fueron los que vieron el terror de cerca (Blanco 1998, pp. 182-183).

También las protestas de febrero activaron las iniciativas de los movimientos de izquierda que pronto efectuaron reuniones con los bolivarianos que conspiraban en los cuarteles (Garrido 2000). Se ampliaban, de esta forma, las redes compuestas por pequeñas organizaciones que trataban de desarrollar una salida a la situación. Esto, naturalmente, supuso la germinación de contradicciones a lo interno de estos grupos creados en prácticas conspirativas con la llegada, por ejemplo, de políticos *profesionales*, algunos de los cuales ya se habían destacado desde el parlamento. Seguramente, durante un período relativamente prolongado, el liderazgo fundador del movimiento bolivariano haya sido objetado desde diversos sectores de esta misma organización en crecimiento, entre otras razones porque se incorporaban a la dinámica de poder nuevas lecturas para asumir las vías estratégicas de la transformación social.

Un momento crítico de este proceso fue el 4 de febrero de 1992. Como se sabe, ese día el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) intentó derrocar al gobierno neoliberal de Carlos Andrés Pérez. Aunque el grupo no acabó con el asentamiento de un nuevo gobierno, y en consecuencia casi la totalidad del movimiento insurreccional fue procesado por rebelión, las secuelas que quedaron para los bolivarianos, para el país, para el sistema político y para el propio Chávez fueron enormes. Algunas de esas implicaciones se examinaron en capítulos anteriores. Pero las contradicciones internas que venían generándose cuando la crisis se profundizó y se ampliaron las posibilidades de nuevos escenarios, también se expresaron ese 4 de febrero. Fue el caso de los sectores civiles, la mayoría de ellos, una vez desencadenadas las acciones militares, sencillamente no participaron (Blanco 1998). Ese mismo año, el 27 de noviembre de 1992, sucede otro pronunciamiento, esta vez con más acompañamiento civil. El comandante Chávez trató de orientar la rebelión militar desde la cárcel de Yare, ubicada en el estado Miranda, sin embargo el grado de descoordinación de las fuerzas insurgentes se hizo palpable.

Una expresión que da cuenta de las tendencias políticas de la población durante esta época en Venezuela fue la candidatura y

luego la presidencia de Rafael Caldera para el período de 1994-1999. Desde un primer momento Caldera proyectó su posición política como antineoliberal, de ahí que haya aglutinado a buena parte de la izquierda “electoral”. Si bien su administración terminó suscribiendo en lo fundamental las orientaciones neoliberales contenidas en su programa llamado Agenda Venezuela, este acontecimiento marcaba el tránsito hacia una metamorfosis cuyas coordenadas políticas aún no estaban claras. En tanto, en marzo de 1994, producto de una oferta electoral –la misma que todos los candidatos en 1993 se prometieron cumplir si llegaban a la presidencia–, el comandante Chávez salía de la cárcel de Yare.

Es importante mencionar esto, porque incluso antes de dejar la prisión ya se habían producido acercamientos entre Chávez y algunas personalidades del mundo político. Estas relaciones con sectores de diversa proveniencia dotaron al movimiento, al menos en un primer momento, de la capacidad de tener interlocutores en espacios empresariales y políticos, incluso en el ámbito internacional. No obstante, esta situación condicionaba inevitablemente los alcances revolucionarios que se habían planteado. Sin embargo, es necesario poner en claro que la integración cívico-militar del movimiento siempre formó parte de una idea estratégica (ibíd., p. 56).

La vía escogida para llegar al poder del Estado: las elecciones presidenciales de 1998 contemplarían transformaciones en la composición del movimiento, en el diseño de un programa político y en las ideas que identificarían al Movimiento Quinta República (MVR). En todo caso, este proceso atravesaría por tensiones de distinta naturaleza, cuyas formas más definitivas perduran aún difusas. Uno de los testimonios que describe esta situación es el de Nelson Sánchez, militar que hacía parte del movimiento bolivariano antes de las dos rebeliones militares de 1992:

Este es un punto donde es imprescindible detenerse. Chávez sale de la cárcel de Yare con nuevos amigos. Ya Chávez había recibido un fuerte apoyo de medios por la vía de José Vicente, quien le dio un respaldo importante a través de su influyente programa de televisión y de sus columnas periodísticas. Se encuentran

Miquilena, Luis Alfonso Dávila. En fin, mientras los comandantes todavía no habían superado sus divergencias en torno a los errores cometidos el 4-F y sobre cuál era la vía a seguir para la toma del poder, Chávez forma un nuevo grupo de compañeros de ruta, que se agregan a algunos de los viejos amigos que habían permanecido leales a su liderazgo. Rangel, Quijada, Miquilena pasan a ser las linternas de Chávez en el oscuro mundo de la democracia representativa formal (Garrido 2000, p. 67).

En términos ideológicos la clarificación del proyecto ha sido progresiva. Más bien para la época en que Chávez se mantuvo en prisión –incluso, luego de ocupar la presidencia y el chavismo convertirse en el movimiento político de las mayorías empobrecidas en Venezuela– su sentido ideológico y programático ha permanecido difuso. Esta característica, sin embargo, no podría considerarse necesariamente como un factor que entrañaba alguna deficiencia. En verdad, la única forma de enfrentar las aspiraciones de una sociedad heterogénea y, como se vio, desestructurada desde el punto de vista de la composición de sus clases sociales, fue a través de la elaboración de un discurso que permitió la convocatoria de toda la nación a partir de conceptos e ideas suficientemente amplias e incluso ambiguas.

Esta indeterminación, atribuida a la retórica chavista, puede además ser expresión y parte constitutiva de la propia realidad social, como sostiene Laclau cuando se pregunta sobre las lógicas de cómo operan los procesos populistas, y cómo la forma mediante la cual se crea una comunidad política. Se está hablando aquí de un proceso que apunta a la conformación de un pueblo, en este caso del pueblo chavista. Será entonces, a la luz de las confrontaciones con “la oligarquía” nacional y el gobierno norteamericano, como el proyecto bolivariano pueda conquistar una identidad más precisa. Pero con frecuencia Chávez, mucho antes de incursionar en alguna campaña electoral, cuando trataba de dar cuenta del contenido ideológico del chavismo, y al mismo tiempo tratar de crear una “voluntad general” como base de su movimiento, trazaba entonces una imprecisión:

Así como todo proyecto en lo económico, en lo político, en este campo ideológico, nosotros humildemente hemos hecho de reflexiones cuartelarias, de lecturas de madrugada, unas ideas que no están acabadas, y no pretenden estarlo, sino que las presentamos a nuestra generación y a nuestros compatriotas para el diseño de un proyecto de largo alcance, en el cual lo ideológico es fundamental, pero hay que desarrollarlo como todas las demás facetas o líneas del proyecto Simón Bolívar, que acepta experiencias de cualquier país, tendencia, cualquier época histórica, etc. Ese árbol tiene que ser una circunferencia, tiene que aceptar ideas de todo tipo, de la derecha de la izquierda, de las ruinas ideológicas de estos viejos sistemas capitalistas o comunistas, y hay elementos o ruinas que son gigantes y hay que tomarlos (2006, p. 295).

En 1996, los bolivarianos aportaron para el debate una serie de propuestas que llamaron *Agenda alternativa bolivariana. Una propuesta patriótica para salir del laberinto*. En efecto, el documento tenía la intención de controvertir en condiciones favorables para el chavismo con el programa que para ese momento hacía a la sociedad el gobierno de Rafael Caldera con su Agenda Venezuela. El documento chavista afirma estar en presencia del fin del Pacto de Punto Fijo, un nombre que aludía específicamente al sistema político vigente para el momento. Esto tenía la intención de confrontar no solamente con un gobierno determinado, sino con todo un modelo político, es decir, con sus partidos, con sus leyes, con sus líderes, sus tradiciones, sus formas de hacer política, sus instituciones, su cultura. Aquí lo importante no era tanto el discurso propositivo, sino la forma polarizadora de Hugo Chávez como condición previa para crearse una identidad política necesaria.

De hecho, en la presentación firmada por Chávez, se considera al modelo de “la cuarta república” como un todo unificado. Es decir, no sólo se hacía oposición al gobierno saliente y a sus contradictores puntuales, quienes disputaban el poder electoralmente, sino que se confrontaba de forma integral el sistema político, lo que permitió, entre otras cosas, su identificación plena, concreta, y al mismo tiempo distante. Chávez habla desde “un

afuera” que lo sitúa más allá del sistema político en los márgenes donde objetivamente están las mayorías empobrecidas. En este sentido la objetivación coyuntural de la cuarta república es entonces la *Agenda Venezuela*.

Chávez expone este nuevo programa de ajuste macroeconómico dejando en evidencia su carácter despojado de preocupaciones y orígenes nacionales. La Agenda Venezuela representaba la intención de fuerzas internacionales, una identidad nacional diluida, cuyo objetivo era perpetuar *un modelo de acumulación*:

El viejo modelo, sin embargo, se resiste a morir. A través de sus pensadores, escritores y argumentadores de todo género, trata desde hace varios años de esconder su realidad, elaborando y presentando planes o proyectos de “estabilización” y de “ajustes”, según los cuales bastarían unas cuantas medidas monetaristas y fiscalistas, además de las “incómodas pero necesarias políticas sociales” para superar la crisis. Claro que aquel viejo modelo y estos nuevos planes se inscriben dentro de todo un proyecto político trasnacional que, en alianza con poderosos sectores nacionales, arrecia su ofensiva en todo el continente con un discurso fetichista de libre mercado, libertad individualista y competencia, tras el cual se esconde la pretensión de recuperar y consolidar “por los siglos de los siglos” la hegemonía de un modelo de acumulación, amenazado desde varias décadas por una descendiente rata de utilización y beneficio (ibíd., pp. 4-5).

La Venezuela de finales de los años noventa es un país cargado de tensiones y problemas. Las evidencias dan cuenta de la presencia de una depresión económica y financiera que no se ha podido conjugar totalmente, pero sobre todo se evidencia una sociedad que formulaba alternativas ante la debilidad de las instituciones estatales y su incapacidad de darle viabilidad a sus problemas. En primer lugar, porque el modelo de Estado distribuidor desde los años ochenta no estaba dando respuestas, y en segundo lugar, porque los planes de ajuste neoliberales habían terminado por dismantelar o estaban modificando buena parte de los acuerdos que años antes había trabado su clase dirigente agrupada en los partidos del establecimiento y esas mismas mayorías. Sin

referentes políticos ni institucionales a los que acudir, lo único que pudo cautivar y convocar otra vez a la nación para realizar grandes tareas históricas fue el discurso de Hugo Chávez. Es probable que ese discurso no hubiera surtido el mismo efecto en la población si se hubiese producido, por ejemplo, en 1974. De ahí, lo determinante del componente contextual.

Las elecciones de 1998 y la deriva revolucionaria del proceso

Las elecciones presidenciales previstas para diciembre de 1998 representaban la última oportunidad para que la democracia de partidos se remozara con la llegada de nuevos actores con la intención de que contuvieran transformaciones sociales más radicales, o se diera paso a una transformación política que implantara nuevas reglas de juego. El candidato del Polo Patriótico (plataforma político-electoral que aglutinaba a partidos y a sectores ideológicamente disímiles, pero con mayoría en las izquierdas, como el MAS, PPT, MVR, PCV, MEP) no era la única opción para las elecciones de aquel diciembre de 1998. La agrupación de empresarios, intelectuales y políticos conservadores reunidos en torno a la reina de belleza Irene Sáez, quien se había destacado por hacer una gestión vistosa en la Alcaldía de Chacao, abroquelaba su movimiento bajo las siglas de una organización electoral descaradamente personalista, llamada Irene. Esta candidatura fue en un primer momento apoyada por el partido socialcristiano Copei.

Descendiente de las filas socialcristianas y con presencia en grupos empresariales, se distinguía la figura del ex gobernador del estado Carabobo, Enrique Salas Römer y su organización Proyecto Venezuela. Con la idea de intentar disputarle al candidato Hugo Chávez sus permanentes referencias retóricas, centradas en los héroes militares del siglo XIX, un trabajo periodístico, elaborado para exaltar la personalidad del candidato de Proyecto Venezuela por la revista *Primicia*, lo presenta como *el último prócer*: «Creo que soy la encarnación de algún General, de esos que hacían estrategias complicadas antes de una batalla; algún guerrero

de la independencia, quizás porque siempre digo que debemos volver a Carabobo» (1997, p. 11). Las políticas electorales para la campaña de diciembre de 1998 centraban sus esfuerzos en potenciar la personalidad del candidato, al tiempo que ocultaban sus organizaciones.

El partido Acción Democrática había salido a la contienda electoral con un viejo militante, que si bien estaba claro que no era una opción con posibilidades reales de ganar la presidencia, al menos aseguraba la unidad del partido para los difíciles tiempos venideros. La fórmula de Luis Alfaro Ucero, llamado *El Caudillo* por la militancia de la organización, reunía un liderazgo tan notable en el seno del partido como pobre en el resto de la sociedad. Fungía entonces como el padre de la familia adeca, más que como un candidato a la presidencia de un país.

La generalidad de las capas medias, así como buena parte de sus intelectuales, no pudieron ver en el movimiento que encarnaba Chávez algo más trascendental que un fenómeno político destinado a durar poco. Una parte de los intelectuales veía al chavismo como una multitud mal dirigida por un advenedizo irresponsable. Pocos en verdad captaron la naturaleza de un proceso que estaba revelando las divisiones sociales que se fueron erigiendo durante años. El chavismo en formación estaba convocando a una nueva mayoría haciendo énfasis en la puesta en vigencia de valores como la comunidad y las tradiciones históricas del pueblo. En las capas medias, sin embargo, se insistía en calificar la personalidad de Chávez como irrelevante, al tiempo que sucumbían ante una descripción epidérmica de la situación. En la cita siguiente, el filósofo Luis Castro Leiva no se resiste en hacer calificativos precipitados contra el personaje, al tiempo que le niega alguna posibilidad significativa a su liderazgo. También descarta todo principio de razón a los sectores que se identifican con el mensaje chavista:

[Chávez] Es el eterno hombre que está dispuesto a la audacia y que reparte las ilusiones de la transformación radical y total. Quiero enfatizar este punto, porque me parece muy importante

que cuando uno afirma el romanticismo político pudiera pensarse que se está hablando de algo así como folletinesco; no, esto es profundamente creído por la mayoría de los venezolanos. A lo largo de toda su historia el proceso por medio del cual basta un golpe de mano para cambiar la totalidad de una sociedad, la totalidad de una política, es sencillamente demencial, es un concepto pueril de la complejidad del mundo contemporáneo y de las relaciones sociales y políticas. Ninguna persona sensata, mínimamente estudiosa de estas complejidades, puede admitir que sea posible... (Rondón 1998, pp. 25-26).

Toda la gravedad del momento, según ciertas opiniones, no podía tomarse tan en serio, porque a fin de cuentas se trataba de “venezolanos”, es decir, individuos de poca monta. Aquí el análisis desfallece ante el lugar común, la banalidad y la subestimación:

Ahora el punto es, y aquí es donde yo apuesto a esta característica bocona, chambona, criollamente irresponsable, esa laxitud caribeña que nos hace no ser suizos, ni siquiera suizos de la otra Suiza de América del Sur. Por ejemplo, celebro profundamente que nuestro ejército no sea prusiano, celebro profundamente que no sea argentino, ni uruguayo, porque si tomaran en serio esas vainas, con el debido respeto, entonces efectivamente tendríamos una amenaza seria en ciernes, pero estos hombres son exactamente iguales a todos nosotros, chimbos y más o menos románticos (ibíd., pp. 26-27).

El carácter fundamental del neoliberalismo no estuvo, como ya se vio, en la revitalización del sistema capitalista, sino en la expansión de un tipo específico de pensamiento que, ante todo, le daba pocas posibilidades a la simple idea del cambio social. Así como la globalización constituía un acontecimiento innegable, y el cuestionamiento de su desarrollo y de sus implicaciones representaba un hecho casi irracional, así también era inevitable trabar algún acuerdo con los poderes fácticos internacionales personificados en el Fondo Monetario Internacional. Analistas políticos como Luis García Mora sostenían en 1998 que esta “realidad” iba a terminar por domesticar a la revolución:

En 1999 tendremos una crisis económica espectacular, donde él (Hugo Chávez) se verá obligado, ya no sólo como Pérez, porque el ajuste económico tendrían que haberlo hecho ya y no lo han hecho precisamente por no radicalizar más la penuria del pueblo venezolano. Ya él está amarrado, primero obligado en el 99, si gana, a amarrarse a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a un ajuste económico y a los cambios estructurales (ibíd., p. 35).

Pero frente al hecho de que el advenedizo amaneciera de pronto presidente, resultaba imperativo rodearlo para que se sintiese “entre los mejores”. Si ya habían comprado a todos los políticos en el siglo xx, Chávez no iba a ser la excepción. Al menos así lo creyó Rafael Poleo, sobre la misión *patriótica* que estaba cumpliendo Jorge Olavarria, tratando de *amansar al monstruo*:

La misión del cortesano. A él lo manda la Casa Boulton a que sea al lado de Chávez lo que Diego Arria fue al lado de Carlos Andrés Pérez (...) Y en esa misión esta Jorge Olavarria, al lado de Chávez y de su esposa, haciéndoles ambiente social y tratando de hacer una misión que de repente puedes llamarla hasta patriótica, que es ablandar al monstruo, amansar al monstruo, hacer de él lo que hicieron con Cipriano Castro: “venga acá comandante, la vida es bella, para qué va a estar usted con esa matazón”, “mire cómo hay mujeres bonitas en la sociedad caraqueña”, “mire las piernas de esa muchacha”, “mire aquella lo elegante que es”. Van a hacerse amigas de su señora para que la lleve a París, como se llevaron a Cecilia Matos, gente de la sociedad caraqueña en diciembre del año 74 –no voy a mencionar quiénes, porque algunos son hasta amigos míos– y la llevaron a todas las casas de modas importantes, a Cartier, y le compraron las joyas más fabulosas, y amansaron a Carlos Andrés. Así quieren amansar a Chávez, ese es un proceso. Y si no lo amansan estamos metidos en una jaula con un tigre (ibíd., pp. 61-62).

Abundaron para el momento los exaltados que no se ocupaban siquiera de guardar algún tipo de autocontrol. A pocos meses de realizarse las elecciones corrió el rumor según el cual el candidato

del Polo Patriótico había sostenido a través de un discurso la conveniencia *de freír las cabezas* a los miembros de AD. Este rumor de campaña fue tomado al pie de la letra por algunos políticos emblemáticos del régimen. Lo cierto es que varios que hacían parte del conglomerado dominante de entonces, entre ellos el empresario y político Carmelo Lauría, con bastante frecuencia mostraban pánico ante la eventualidad de que Chávez se convirtiera en Presidente de la República. Lo que sí revelaban de fondo esta clase de *argumentos* era que en Venezuela no se estaba disputando sólo la Presidencia de la República, sino quién controlaría efectivamente el poder durante una parte del siglo XXI:

Los adecos parecen acoquinados por las encuestas, y además también que el enemigo se da cuenta que ha despertado el monstruo adeco, porque yo tengo 12 hijos y 24 nietos, a mí Chávez no me va a freír gratis la cabeza en aceite, porque antes de que él me la fría yo intentaré freírsela a él con todos los hierros, porque si él es guapo, aunque yo no soy guapo, tengo instinto de conservación, a mí no me va a agarrar emparaguao [sic] Chávez, si Chávez quiere freírme a mí, yo también tengo un sartén para freírle la cabeza a él, yo no tengo ningún interés en hacerlo, pero sí tengo el propósito de defenderme en cualquier terreno (Rondón 1998, p. 191).

Luego de que los partidos tradicionales presionaran a la institución electoral para que se adelantaran las elecciones regionales en un mes, con el objeto de tener una idea del panorama real que iba a acontecer en diciembre de 1998 en las elecciones presidenciales, tales organizaciones lideradas por los gobernadores de los estados (las direcciones nacionales de esas organizaciones no quisieron asumir el costo político de la medida) abandonaron a sus respectivos candidatos presidenciales para intentar cambiar el resultado. Copei dejó a la reina de belleza con su partido Irene a un lado, y Acción Democrática plantó al caudillo Alfaro Ucero. Ambas organizaciones a una semana de las elecciones apoyaron al segundo en las encuestas, a Enrique Salas Römer. Así fue como el 6 de diciembre de 1998, el candidato del Polo Patriótico venció

al de Proyecto Venezuela en una proporción de 56% contra 39% del universo de ciudadanos que acudieron a votar (Rey 2009).

La voluntad política de cambio sin pactar con el establecimiento de la cuarta república, la mostró el presidente Chávez el 2 de febrero de 1999, durante su discurso de toma de posesión a la presidencia. En ese escenario sorprendió al país con el anuncio unilateral de elaborar ese mismo día un decreto para convocar a la nación a referendo. Se refería al procedimiento para refrendar si en verdad era conveniente o no la realización de un proceso constituyente. En la exposición de motivos que luego modificó la Corte Suprema de Justicia de entonces se puede leer:

El sistema político venezolano está en crisis y las instituciones han sufrido un acelerado proceso de deslegitimación. A pesar de esta realidad, los beneficiarios del régimen, caracterizado por la exclusión de las grandes mayorías, han bloqueado, en forma permanente, los cambios exigidos por el pueblo. Como consecuencia de esta conducta se han desatado las fuerzas populares que sólo encuentran su cauce democrático a través de la convocatoria del Poder Constituyente Originario. Además, la consolidación del Estado de Derecho exige de una base jurídica que permita la práctica de una Democracia Social y Participativa (Decreto N°3, 1999).

Frente al declive de las organizaciones políticas y al problema estructural de las instituciones públicas de proporcionarle prontas salidas a las demandas de la sociedad, el discurso presidencial se convirtió desde entonces en un instrumento político eficaz que al mismo tiempo en que muestra al presidente como el principal promotor de las protestas y movilizaciones, auspiciando la organización popular para la defensa del proyecto bolivariano, es el primer denunciante de las contradicciones del Estado. De ahí que logró constituirse como un liderazgo de naturaleza heterodoxa, según el cual, al tiempo que es Jefe de Estado, y por consiguiente responsable de su marcha, también es su primer contradictor y denunciante.

En los discursos presidenciales, el pueblo excluido, sin mediaciones en términos de formas organizativas susceptibles de representarlo, es el principal actor del proceso. Haber hecho visible a los sectores marginales, sobre todo en su condición de portadores de soberanía, fue un recurso que potenció comprensiblemente el liderazgo presidencial de Hugo Chávez. A fin de cuentas, el carácter esencialmente pacífico de la revolución venezolana implicó la necesidad de un proceso de transición legal de envergadura, ya que, al contrario de otras revoluciones conocidas durante el siglo xx, la venezolana intentó con resultados desiguales preservar el marco legal, incluida la celebración de procesos electorales.

La Constitución Bolivariana y su proceso

Este lapso comprende desde la instalación del gobierno en diciembre de 1998 hasta la expedición por parte del Poder Ejecutivo de las leyes habilitantes. Al final del período considerado se destaca el paro general del 10 de diciembre de 2001, convocado por una alianza entre la máxima cúpula empresarial, Fedecámaras y la Confederación Trabajadores de Venezuela (CTV), para ensayar así las acciones que se materializarían luego durante los primeros meses de 2002. Queda en evidencia en esta coyuntura el esfuerzo del presidente Chávez y del resto de los sectores políticos que protagonizaron la experiencia constituyente por conducir al país a la elaboración y luego a la edificación de nuevas reglas de juego.

Lo que se quiere destacar en este aparte se vincula con el examen del proceso bolivariano, pero no visto simplemente como el despliegue de un proceso político pensado previamente. En el transcurrir de los acontecimientos y de los enfrentamientos políticos se fue configurando el contenido de un proyecto social potencialmente antihegemónico. El evento que anuncia el carácter que progresivamente tomó el proceso fue representado por las 49 leyes habilitantes manifestadas por el Poder Ejecutivo. Varias de estas disposiciones, como se verá, significaron en su momento la intención de poner en práctica otras reglas sobre la mesa que

implicaban, por ejemplo, la vigorización del papel del Estado en el diseño de los planes económicos.

En los múltiples discursos presidenciales, Chávez plantea la conveniencia de encauzar la revolución de la mano de una Asamblea Nacional Constituyente *originaria*, como la forma más sensata, sostiene, para evitarle a la sociedad los rigores de una revolución violenta, típicamente jacobina. De esta forma, el Presidente se convierte en el principal interlocutor de unas aspiraciones populares que hasta el momento no tenían cauce institucional.

Es patente el esfuerzo por colocar la noción de soberanía popular como norte de todas las acciones del período. La soberanía y el actor depositario de este derecho, el pueblo, el *soberano*, se establecen como el recurso inapelable para conducir las transformaciones. Chávez, en el curso de su estrategia deslegitimadora, hace esfuerzos por presentar la erosión de todas las instituciones de la cuarta república: la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, el Poder Judicial, incluso el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, la acción gubernamental en esta primera etapa, referida al conjunto de las instituciones del Estado, no se muestra pujante en la respuesta a los enormes problemas sociales. Es palpable que muchas de las reformas que se pretenden adelantar desde el Poder Ejecutivo se quedan atrapadas en la retórica voluntarista del Presidente de la República. Desde la llegada al poder del chavismo, el resto de las instituciones o al menos una parte permanece bajo el control de grupos formados al calor de las nociones del viejo régimen. Con todo, no se pueden desdeñar las acciones del nuevo gobierno, consideradas estratégicas entre otras cosas porque tendrán en breve una trascendencia particular, tal como sucedió con la II Cumbre de la OPEP, celebrada en Caracas en septiembre del 2000.

Los caminos escogidos para conquistar la transformación institucional tenían que estar signados, especialmente en esta primera fase, por la confrontación pacífica, derivada de la utilización de mecanismos legales. Para viabilizar el cambio que en una primera etapa debía ser institucional se impulsó el proceso constituyente. Se buscaba asentar nuevos cimientos sobre los

que ahora se fundamentaba la nación. Con el objeto de que los cambios propuestos contaran con una legitimidad democrática irrefutable, el proceso constituyente abrió posibilidades de participación a todos los sectores y grupos interesados en incidir en el debate público. El objetivo político inmediato, pero no por ello menos trascendental, era ampliar el principio de soberanía, reducida en los hechos a los partidos políticos tradicionales y a sectores empresariales en alianza con los primeros. Se trataba, en suma, de trasladar la potestad de decisión de las minorías privilegiadas sobre asuntos nacionales, y colocarla en el espacio de la nación. Todo esto supone, sin duda, que el proceso de cambios se estaba conduciendo desde unas coordenadas claramente legales. En rigor, esta ha sido una característica estructural de la experiencia vivida hasta el momento, es decir, la permanente invocación a la legitimidad de las leyes y de las instituciones estatales como el “procedimiento” para encarar la “revolución”.

El marco legal que produjera el proceso constituyente debía responder a los intereses nacionales. Esto supone que al pacto social expresado en la Constitución de 1999 le correspondía ser no sólo consecuencia de una *voluntad general* renovada, sino que la Constitución Bolivariana pudiese garantizar mecanismos de participación política, reconociera con rango constitucional los derechos humanos tantas veces burlados, dejara en claro la jurisdicción del Estado sobre los recursos naturales y energéticos, sancionara la existencia de una sociedad política y culturalmente plural, y dejara asegurado constitucionalmente un objetivo regularmente invocado: la contribución en la edificación de un sistema mundial caracterizado por la igualdad, la justicia y el respeto a los derechos de independencia de los pueblos. Este programa o más bien conjunto de aspiraciones liberales no es más que la renovación del discurso que surgió y se hizo hegemónico a partir de 1945 en el sistema-mundo, luego del trauma que representó la Segunda Guerra Mundial. Correspondía garantizar la consecución de tales principios en un Estado social de derecho y de justicia, surgido de la Constitución, así como de la propia sociedad venezolana, en una relación de corresponsabilidad.

La intervención, en esta primera fase, de los sectores de oposición en el proceso constituyente fue muy débil, en parte porque las formaciones que representaban esa opción contaban para ese entonces con un apoyo electoral muy por debajo del que reunía las fuerzas del Polo Patriótico. Otra porción de la oposición se limitó a establecer una estrategia que denunciaba las eventuales intenciones del presidente Chávez de hacerse de una Constitución que le asegurara su continuidad en el poder.

La primera fase de este período culmina cuando se sanciona en votación universal la Carta de 1999, y por consiguiente todo el montaje institucional de la quinta república. También se pone de manifiesto la elaboración del grupo de leyes habilitantes, aprobadas en noviembre de 2000, que le dan más protagonismo al Estado nacional en general en materias tan importantes como el petróleo, la intención de regular el régimen de propiedad de las tierras, así como intervenir y proteger a los sectores débiles en la dinámica comercial¹⁷. Estas intenciones plasmadas en la nueva Constitución subrayan el objetivo de contravenir las políticas que en las décadas de los ochenta y los noventa llevaron adelante el grueso de los gobiernos latinoamericanos, movidos por el objetivo de implementar planes neoliberales.

Durante la mayor parte de esta etapa, la oposición se mostró desarticulada, debilitada y limitada frente a una vigorosa presencia, sin embargo, en los medios de comunicación, quienes actuaron como factores políticos de primera línea. En ese sentido, al final del período mostró una mayor coherencia y presencia en la calle; el paro nacional del 10 diciembre de 2001, que sirvió como globo de ensayo. La oposición durante esta fase del proceso fue acumulando más poder y proyección social, sobre todo en las capas medias, al tiempo que se deterioraron las relaciones del gobierno venezolano con Estados Unidos.

En este contexto, la aprobación de las 49 leyes habilitantes se sitúa aquí como el comienzo de la ruptura que sucederá más

17 Para una revisión de estas leyes, pero analizadas desde una perspectiva contraria al proyecto bolivariano, véase: De Valera (2002).

adelante. En todo caso, este enfrentamiento estalla especialmente con la puesta en funcionamiento de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, una disposición que si bien tenía la intención de superar el latifundio, preveía mecanismos legales que amparaban de alguna forma al propietario de la tierra. La Ley de Hidrocarburos Líquidos trata de recuperar el protagonismo del Estado en el diseño de la política petrolera, después que los gobiernos anteriores hubiesen impulsado proyectos que buscaban la privatización de la empresa de petróleos del país, Pdvsa, así como la Ley de Pesca y Acuicultura, cuyas disposiciones generales contemplaban privilegiar, bajo algunas condiciones, la pesca artesanal (Medina 2003).

Un análisis más detenido puede comprobar que la intención de aquellas leyes habilitantes no era revolucionaria, al menos en el sentido como lo hacían ver los grupos opuestos al proyecto; sin embargo, la reacción suscitada desde los sectores opositores creaba la impresión de que el país estaba asistiendo a la implementación de iniciativas legales para dismantelar al capitalismo.

El 11 de septiembre de 2001, grupos antiestadounidenses hicieron estrellar aviones comerciales contra estructuras emblemáticas del poderío financiero y de defensa del imperio norteamericano: las Torres Gemelas y el Pentágono. Esto trajo como consecuencia una eventual respuesta de carácter político-ideológico y militar unilateral contra toda fuerza considerada hostil a los designios norteamericanos en el mundo. Las consecuencias de esta política implicaron entonces varias guerras que Estados Unidos emprendió fuera de su territorio, la casi implosión del sistema legal internacional con el desprestigio aún mayor de la ONU, la despolitización de los conflictos internacionales y, en consecuencia también de los conflictos locales en todo el mundo. A partir de ese momento asistimos al fin, esta vez explícito y sin poses, del principio liberal de la soberanía de los Estados nacionales¹⁸.

18 Tras los ataques del 11 de septiembre en Nueva York, la administración de George W. Bush dotó a los Estados Unidos de un enemigo externo –el

Como trasfondo, lo que estaba ocurriendo era la profundización de la crisis del sistema capitalista, la consecuente decadencia del poderío de Estados Unidos, y el agotamiento advertido anteriormente de la ideología liberal, vista acá como la ideología hegemónica del sistema capitalista mundial (Wallerstein 2005). No obstante, la oposición venezolana no leyó bien lo que estaba ocurriendo; por el contrario, creyó que había llegado el momento de deshacerse del incómodo experimento chavista. Estos acontecimientos fueron determinantes para activar una movilización popular que acompañó durante estos primeros años las intenciones de cambio planteadas, y contribuyó de forma determinante a proveer al proyecto chavista de tendencias cada vez más radicales.

terrorismo internacional— y, con ello, de un nuevo sentido de misión civilizadora, un elemento ausente en los años de la post Guerra Fría. Desde un primer momento, el gobierno de los Estados Unidos habló de este evento como una declaración de guerra y desde este trágico acontecimiento se considera como una nación en guerra. En suma, el 11 de septiembre resultó un factor contingente clave para explicar la aceleración de un impulso imperial preexistente que obedece, en gran medida, a un factor sistémico, la necesidad de fortalecer la unipolaridad económica y militar estadounidense (Contreras 2011, p. 249).

Reflexiones finales

Este trabajo cubre un período de 27 años de historia. Se examina un tiempo que podría considerarse relativamente breve, si pensamos que a la luz del examen de otros procesos ocurridos en otros contextos las transformaciones advertidas no son de la contundencia que revela el caso venezolano. La propia percepción sobre Venezuela, generada por personas que por diversas razones han tenido que mirar “desde afuera” con alguna atención lo que nos ha acontecido, registran mutaciones importantes, antes de que el despliegue de la Revolución Bolivariana termine de implantar un nuevo orden social. Ese observador “distanciado”, sin embargo, puede suscribir la opinión según la cual la metamorfosis se concentra, sobre todo durante el lapso que envuelve esta investigación, en el ámbito de las instituciones. Y sin duda esa es parte de la verdad, para el momento en que culmina este trabajo (2001), la *Constitución Bolivariana* ha sido aprobada en referendo popular, y desde el Poder Ejecutivo se diseña una estructura legal que identificará la orientación popular del proyecto bolivariano en las leyes habilitantes aprobadas en el año 2000. En general, se puede afirmar que el proyecto que encarnaba la democracia de partidos, el puntofijismo, ha sido históricamente desplazado. Aquella imagen construida, según la cual el país era una región armónica y sin mayores conflictos, cedió ante tantas evidencias, varias de ellas examinadas en esta investigación.

Los acontecimientos que se van a suceder inmediatamente después del 2001 confirmarán también esta aseveración. Me refiero a las confrontaciones sociales y políticas gigantescas que acontecieron al menos hasta el Referendo Revocatorio del 2004. Ese período inmediatamente posterior no fue abordado aquí. Con todo, vale la pena reiterar que para el instante de la instauración del Gobierno Bolivariano y del proyecto constituyente, ya existía una experiencia previa, signada por una movilización popular permanente desde finales de los años ochenta. Más aún, antes de que se desataran las contradicciones que llegaron a movilizar a grandes sectores de la población para defender al Gobierno Bolivariano o para adversarlo, en varios procesos electorales se habían constatado transformaciones dentro de las preferencias políticas. En algún momento, iniciándose la década de los ochenta, el cansancio hacia todo lo que significara partidos se fue incrementando. El proceso de empobrecimiento ocurría al mismo tiempo en que se fue vaciando el apoyo al sistema de Punto Fijo. La sociedad fue literalmente sacudida por una crisis de legitimidad general cuya comprensión a cabalidad contribuye a su vez al conocimiento de los alcances derivados del examen de la Revolución Bolivariana.

Pero ¿a qué alude el título de esta investigación cuando se menciona un acontecimiento tan conclusivo, concretamente el declive de la democracia liberal de partidos? Durante el siglo xx la democracia fue asociada al liberalismo. Las palabras democracia y liberalismo fueron naturalizadas y percibidas como dos conceptos casi idénticos, o, mejor, complementarios. Esto no siempre fue de esa forma. La asociación de estas dos palabras no es producto de un proceso espontáneo. Expresa el triunfo del liberalismo como la ideología hegemónica del sistema capitalista mundial, tanto es así que el resto de las ideologías que emanan de esta historia específicamente moderna, igualmente se colocaron como reproductoras de las premisas propias del liberalismo, en una posición subalterna. En todo caso habría que constatar que el resto del libreto hegemónico lo manejamos prácticamente de memoria: soberanía popular, ciudadanía; pero en los marcos de

las sociedades estatales, elecciones libres, libertad de expresión, derechos humanos, ciudadanía, partidos políticos, separación de poderes, la idea de un progreso inevitable y progresivamente racional. Todas estas palabras empleadas innumerables veces hicieron parte constitutiva hasta hace muy poco del sentido común de lo político.

En Venezuela estas ideas se plantearon y calaron con fuerza, legitimadas en este caso con ayuda del imaginario que contribuyó a producir la distribución petrolera. Lo que se quiere problematizar en esta investigación es que con el fin del siglo xx, con el desplazamiento histórico del Pacto de Punto Fijo, también murió esa asociación automática entre liberalismo y democracia. Es decir, la política restringida a los partidos “democráticos”, desarrollada preferentemente en los parlamentos, la política como asunto privativo de los políticos profesionales, la centralidad del voto como la herramienta exclusiva para expresarse, elegir y participar, el modelo de la *representación* establecida como la regla señera a través de la cual se pronuncian las mayorías en democracia, la inevitabilidad del progreso, la idea ingenua de que la libertad de opinión es en verdad la libertad de todos y no la de un grupo de empresarios interesados en posesionar una versión específica de su verdad, etc. Todo este *credo* ha estado colocándose, por parte de los movimientos populares, en el centro de los cuestionamientos. En esta parte del mundo, en América Latina, igualmente las mayorías han llegado a expresar por distintas vías lo limitado de esta noción liberal, políticamente correcta, de asumir la lucha por la transformación del mundo. En ese sentido, Venezuela ha sido el territorio latinoamericano donde comenzó la búsqueda de otros caminos más plenos para construir el futuro.

Empero, no creo que el conjunto de los análisis contenidos aquí encuentren pertinencia únicamente porque anuncian la inminencia de otras transformaciones “más radicales”. En sí mismo el período que nos ocupa, como se vio, muestra tendencias fundamentales y episodios cruciales, cuyo estudio desde una pluralidad de perspectivas inscritas en las ciencias sociales aún espera por dar cuenta de una realidad compleja. Sobre todo porque

una de las conclusiones más sugerentes es aquella según la cual la respuesta que dio la sociedad encarnada en la emergencia del chavismo ha podido ser en definitiva otra. A mediados de los años noventa, por ejemplo, parecía que el descontento social se encaminaba a situar como opción popular al proyecto creado por Alfredo Maneiro, La Causa R, pero como es sabido su destino fue bien distinto, cuando al final de la década el partido se divide: una de las partes forma entonces Patria Para Todos (PPT) y decide apoyar la fórmula del Polo Patriótico en las elecciones de 1998.

Esta investigación analizó el momento en que el modelo liberal de partidos gozaba de apoyo social. El primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) muestra la estabilización de un sistema que incluso estaba dando cuenta de formas de autonomía, en parte producto, como se vio, de la subida de los precios del petróleo, pero también de las expectativas que aún generaba el llamado para ese entonces Tercer Mundo. En ese momento el país se estaba imponiendo la tarea, aparentemente sencilla, si se tiene en cuenta que existían enormes recursos que financiaran esa aventura, de industrializarse. Pronto se pudo constatar lo alucinante que se había mostrado el proyecto de la Gran Venezuela. El otro momento en que la investigación se detiene, plantea examinar el agotamiento de la democracia de Punto Fijo, y al calor de las disyuntivas, la emergencia del chavismo.

Pero el interés de este recorrido no culmina en el esfuerzo por entender las especificidades y continuidades de esos dos momentos de esplendor y desenlace del proyecto puntofijista, vistos como un minuto fastuoso y al mismo tiempo decadente, relacionado luego con la consiguiente terminación de ese ciclo histórico a finales de la década de los noventa. También interesa mirar con atención el transcurso, el recorrido de un proceso, entre otras cosas porque en ese transcurrir se pueden captar la naturaleza y los elementos más perdurables del lapso considerado. Por ejemplo, desde esta perspectiva, para los años setenta se hace énfasis en un conjunto de factores que se fueron produciendo mientras una parte del país sucumbía al encanto de los petrodólares, a la estabilidad modélica, a una situación de paz relativa, al estable-

cimiento del bipartidismo, etc. Me refiero a la expansión de los partidos al mismo tiempo en que se perfeccionan sus mecanismos burocráticos de dominio, de corrupción y de autoritarismo. Al momento en que caen los precios del petróleo y el Viernes Negro de 1983 ofrece una primera alerta, estos rasgos comienzan a percibirse de forma más transparente, pero ya estaban presentes con anterioridad en el organismo de la nación. Al mismo tiempo, cuando se profundiza y se hacen continuas las cifras de decrecimiento económico a través de estos años, se hacen también más patentes las severas limitaciones de un modelo de desarrollo fundado exclusivamente en la economía rentista.

No se trata de evaluar los proyectos de desarrollo y en especial los procesos económicos como situados o limitados a actuar en esa región de la realidad. Es acertado considerar la capacidad de estos procesos de extenderse hacia ámbitos propiamente sociales, institucionales o culturales. Ahora se sabe que estas separaciones conceptuales no se expresan en la realidad, tal como se pensaba. Estas separaciones son a lo sumo formas de organizar el pensamiento. En este sentido, varias investigaciones han insistido en las derivaciones políticas o culturales cimentadas en la estructuración social, cuyos rasgos provienen de estructuras de producción específicas de la economía de extracción mineral.

El momento de surgimiento del chavismo sucedía en un contexto de desprestigio casi general de las instituciones del sistema de partidos. Al final de la década de los noventa, el país no tenía referencias institucionales y políticas relativamente estables, por ello, incluso desde la campaña electoral que tuvo como ganador a Rafael Caldera en 1994, pero con mucha más fuerza durante los procesos electorales de 1998, todos los candidatos, absolutamente todos, reprodujeron pautas para la constitución de liderazgos marcadamente personalistas.

El propósito del programa neoliberal estaba en el centro de los cuestionamientos populares como consecuencia de los fracasos que tuvieron los dos intentos sistemáticos por implantarlo, durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y la segunda presidencia de Caldera (1994-1999). De modo que no

era probable que la nueva hegemonía que iba a establecerse para las primeras décadas del siglo XXI se nutriera de tales imaginarios, al menos no resultaba conveniente hacerlos explícitos. En consecuencia, los anhelos populares los terminó personificando Hugo Chávez, cuyas formas de conducta controversiales no reproducían las convenciones culturales del conglomerado dominante.

Casi al mismo tiempo, estos acontecimientos sucedían restringidos por otras realidades, los proyectos de cambio social y de superación del capitalismo habían sucumbido aparentemente con el experimento del llamado *socialismo real*. También los ensayos neoliberales ayudaron, de alguna manera, a legitimar socialmente la idea relativa de que fuera de las lógicas del capital no era posible organizar el mundo de manera racional. En Venezuela, una parte de estas disyuntivas se *resolvieron* al calor de las confrontaciones con sectores conservadores y con el gobierno norteamericano en los años posteriores a la llegada de Chávez a la presidencia.

Ahora vale la pena ensayar conclusiones desde perspectivas temporalmente más amplias. Desde este enfoque, las transformaciones que han registrado los análisis expuestos aquí, tienden a evaluarse en términos más relativos. Hacia la segunda mitad del siglo XX venezolano, los movimientos políticos y sociales que venían expresándose al menos desde 1928, en el contexto de los rigores de la dictadura gomecista, lograron controlar definitivamente las instancias más importantes del Estado para, desde allí, iniciar todo un proceso de modernización notable. Esta situación se fue haciendo viable porque las aspiraciones por implementar reformas más o menos radicales fueron significativamente reducidas en nombre de la estabilidad y de procurar no volver a perder el poder político, tal como ocurrió en la experiencia fallida del “trienio adeco” (1945-1948).

Para ello los liderazgos históricos, especialmente Rómulo Betancourt, no tuvieron inconvenientes en dividir su propio partido para defenestrar a la izquierda, apartar a los comunistas del proyecto que nacía, implementar una política represiva más masiva y agresiva que la desplegada por la propia dictadura militar de Pérez Jiménez, y establecerse como un aliado estraté-

gico para los gobiernos de Estados Unidos en el escenario de un mundo que ya se había ordenado en las lógicas de la Guerra Fría.

Luego de que el proyecto puntofijista se sobrepuso y logró derrotar las tentativas insurreccionales planteadas por la izquierda y algunos “ensayos” nostálgicos de la pasada dictadura militar, la democracia de partidos atravesó una coyuntura que contribuyó a dotarla de una estabilidad momentánea. Nuestra modernidad petrolera tuvo un incremento sin precedentes de sus posibilidades expansivas legitimantes durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979). Aunque para aquel momento los proyectos desarrollistas ya estaban centrados en las pautas de la economía de extracción mineral –y como ahora se sabe, al final no fue posible conquistar el desarrollo–, este período le imprimió a la sociedad unas características peculiares que en buena medida aún conserva.

Los gobiernos venezolanos, incluido el proyecto chavista, han cifrado sus esperanzas de bienestar y democracia en la profundización de unos rasgos que se desprenden directamente de nuestra condición de país petrolero. En consecuencia, aquí, más que transformaciones, se aprecia una continuidad estructural que atraviesa el desempeño de todos los gobiernos venezolanos durante el siglo xx, pero con especial relevancia durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y la experiencia de la Revolución Bolivariana.

La izquierda chavista debería impugnar este legado de la modernidad capitalista y entenderla como parte constitutiva de la geocultura liberal mundialmente hegemónica. Continuar con los mismos patrones de desarrollo, alojados además en nuestro propio sentido común, supone seguir contribuyendo a cimentar la forma en que económicamente el mundo se organizó entre países suministradores de materias primas y países que captan la mayor parte de la plusvalía producida por el resto del mundo.

Será prácticamente imposible transitar senderos distintos durante el siglo xxi, si al menos no se problematiza nuestra condición estructural de proveedores de materias primas que surte regularmente insumos para el funcionamiento de la economía mundial capitalista. Esta continuidad supone la reproducción de

la división internacional del trabajo, cuya forma de organización y lógicas de funcionamiento han permitido conformar históricamente un orden mundial signado por la acumulación incesante de capital, de suyo polarizado y desigual. Cualquier programa revolucionario, interesado en alcanzar objetivos emancipatorios, debería tratar de desestabilizar esta situación. En todo caso debe quedar claro que el aspirado postcapitalismo comienza en la superación del papel que ha jugado Venezuela a lo largo del siglo xx como parte constitutiva del engranaje de la economía mundial.

Sin duda que esta aspiración no se logra de forma inmediata, pero en momentos de crisis sistémica del capitalismo mundial, este escenario es bastante probable o más bien inevitable. En todo caso, involucra para el chavismo o la izquierda antisistémica tomar decisiones éticas, políticas y morales apremiantes. Concentrar los análisis sobre cómo se organizó históricamente el sistema mundial capitalista permite llegar a conclusiones sugerentes desde la perspectiva que ha propuesto Immanuel Wallerstein para pensar el funcionamiento del capitalismo histórico como un sistema mundial específico. Como por ejemplo, se precisa saber que una situación de subdesarrollo no se organiza como la antecala para ingresar al concierto de las naciones desarrolladas. Esta patraña ideológica liberal aún la mantiene con fuerza el proyecto chavista. Esta relación de interdependencia subordinada entre países centrales (desarrollados) y periféricos (los llamados subdesarrollados) es la propia condición para que existan pequeñas regiones del mundo, capaces de acumular la mayor parte de plusvalía producida por las regiones deprimidas del planeta.

Una parte de la potencia del proyecto chavista descansa en la revalorización proyectada sobre el concepto de nación. La vigo-rización de mitos y ritos alrededor de la idea de *comunidad nacional*, del pasado heroico, implicó ciertamente la renovación de lazos sociales que determinaron la existencia de una intensa sociabilidad, cuyo contenido esta vez parece anunciar el horizonte de una república más igualitaria, donde se ponen de presente las luchas de las mayorías a través de su historia. En este aspecto, el chavismo ha encarnado un proceso de liberación nacional.

Pero la nación y su estado nacional, así como el producto de sus construcciones sociales y simbólicas, hacen parte constitutiva del funcionamiento de la economía-mundo capitalista.

Se debe concebir globalmente a los estados como partes de una red interestatal históricamente jerarquizada y relacional, organizada como una división del trabajo internacional cuya función estructural es el logro de la acumulación incesante de capital asegurado a través del intercambio desigual. Enclaustrar el cambio social, es decir la revolución, exclusivamente al espacio de la nación y en la captura del poder del estado, supone naturalmente el fortalecimiento de la red interestatal cuya organización funcional le sirve al capitalismo histórico como instrumento estructural para subsistir. Aunque se realicen esfuerzos por hacer ver a cada estado nacional como expresión de particularidades culturales inmutables y esenciales, cuyas presuntas raíces proyectan la esencia de determinado *ser nacional*, la formación de las naciones modernas es el producto histórico y estructural del capitalismo mundial. Esto no hay que olvidarlo.

La lucha entonces debe replantearse con más fuerza en la certeza según la cual el sistema capitalista es en efecto un sistema mundial, de modo que los esfuerzos más apremiantes de los movimientos antisistémicos deberían estar orientados a desactivar todo el engranaje institucional-cultural que le ha permitido hacerse efectivamente global. Para llevar adelante este ambicioso objetivo las estrategias antisistémicas centradas exclusivamente en el nacionalismo pueden ser un obstáculo que impide evaluar las opciones históricas abiertas que ya están presentes en el siglo XXI, producto de la crisis estructural del capitalismo (Wallerstein 1988).

Los diversos movimientos antisistémicos que acumularon impresionantes victorias a partir de 1945, en una variedad de regiones del planeta, al calor, sin embargo, de una expansión económica del capitalismo sin precedentes, si bien, por un lado, lograron ofrecer formas de bienestar a sus pueblos, en general y a mediano plazo, paradójicamente, fortalecieron sus estructuras estatales y así contribuyeron a estabilizar la economía-mundo.

Lista de referencias

«Acta Constitutiva de Gobierno de Emergencia Nacional» (1998). *En Golpes Militares en Venezuela 1945-1992. Actas y Decretos de los vencidos y de los vencedores*. Caracas: El Centauro Ediciones.

«Agroplan. Basado en la Canasta Normativa de Alimentos y de Bienes y Servicios» (2000). En Edgardo Lander (comp.), *Neoliberalismo, sociedad civil y democracia. Ensayos sobre América Latina y Venezuela*. Caracas: Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela.

Anderson, Perry (1999). «El despliegue del neoliberalismo y sus lecciones para la izquierda». En Renán Vega Cantor (ed.), *Marx y el siglo XXI. Una defensa de la historia y del socialismo*, pp. 373-388. Bogotá: Ediciones Antropos.

Aniyar de Castro, Lolita (1992). *El guante de terciopelo*. Maracaibo: Universidad del Zulia.

Baptista, Asdrúbal (2006). *Bases cuantitativas de la economía venezolana 1830-2002*. Caracas: Fundación Empresas Polar.

Battaglini, Óscar (2011). *Ascenso y caída del puntofijismo (1958-1998)*. Caracas: Galac.

Blanco Muñoz, Agustín (1998). *Habla el comandante*. Caracas: Centro de Estudios de Historia Actual, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela.

Blaser, Liliane (1990). *Venezuela 27 de febrero. De la concertación al desconcierto*. [Documental]. Venezuela: Instituto de Formación Cinematográfica Comunidad de Trabajo e Investigación, Cotrain.

____ (2010, 28 de febrero). «Venezuela febrero 27: de la concertación al desconcierto». *La clase.info* [periódico en línea]. Recuperado el 4 de febrero del 2012 de <http://laclase.info/nacionales/video-venezuela-febrero-27-de-la-concertacion-al-desconcierto>

Caballero, Manuel (1988, noviembre-diciembre). «Para una radiografía del pensamiento reaccionario». *Nueva Sociedad* [revista en línea]. Recuperado el 28 de marzo del 2010 de http://www.nuso.org/upload/articulos/1707_1.pdf

____ (2009). *Las crisis de la Venezuela contemporánea (1903-1992)*. Caracas: Alfadil.

Cabrujas, José Ignacio (2009a). «El país según Cabrujas». En *El mundo según Cabrujas*, pp. 132-133. Caracas: Editorial Alfa.

____ (2009b). «El Congreso». En *El mundo según Cabrujas*, p. 183. Caracas: Editorial Alfa.

Caldera, Rafael (1993). *Mi carta de intención con el pueblo de Venezuela*. Manuscrito no publicado. Fundación Escuela Venezolana de Planificación, Caracas.

____ (s/f). «Discurso en la sesión conjunta del Congreso de la República». *Analítica.com* [página en línea]. Recuperado el 15 de marzo del 2010 de <http://www.analitica.com/bitblo/caldera/4f.asp>

Castro Guillén, Pedro Vicente (2000). *Apertura y globalización. Tensiones nacionalistas en el 2° gobierno de Carlos Andrés Pérez 1989-1993*. Caracas: Fondo Editorial de Humanidades y Educación-UCV.

Comité de familiares de las víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989, Cofavic (s/f) [página en línea]. Recuperado el 27 de marzo del 2010 de <http://www.cofavic.org/>

Contreras Natera, Miguel Ángel (2011). *Una geopolítica del espíritu. Leo Strauss: La filosofía política como retorno y el imperialismo estadounidense*. Caracas: Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.

Coronil, Fernando (2002). *El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela*. Caracas: Nueva Sociedad.

Decreto N° 3. Decreto emanado del Poder Ejecutivo llamando a Referendo Consultivo para convocar una Asamblea Nacional Constituyente (1999, febrero). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela* N° 36.634, Caracas, 2 de febrero de 1999.

Defensoría del Pueblo y Fundación Juan Vives Suriá (2011). *El 27-F para siempre en la memoria de nuestro pueblo*. Óscar Bataglini (ed.). Caracas: Autores.

Díaz Rangel, Eleazar (2006). *Todo Chávez. De Sabaneta al socialismo del siglo XXI*. Caracas: Planeta Venezolana.

Diccionario de Historia de Venezuela (1997). Caracas: Fundación Polar.

Duno, Pedro (1975). *Los doce apóstoles. Proceso a la degradación política*. Valencia, Venezuela: Vadell Hermanos.

El Mundo (1976, diciembre). Caracas.

El Nacional (1974, 13 de marzo). Caracas, p. 8.

____ (1974, febrero-marzo). Caracas.

____ (1987, febrero). Caracas.

____ (1994, 12 de diciembre). Caracas.

El Observador. «Caracazo, 27 de febrero de 1989 (imágenes sin editar). Parte 3/6». (2009, 25 de junio) *Youtube* [página en línea].

Recuperado el 11 de marzo del 2010 de <http://www.youtube.com/watch?v=b7DfJv2bJd4&feature=related>

Elías, Norbert (2000). *Sobre el tiempo*. México: Fondo de Cultura Económica.

Ellner, Steve (1992). *De la derrota guerrillera a la política innovadora*. Caracas: Monte Ávila Latinoamericana Editores.

____ (2005). *Neoliberalismo y antineoliberalismo en América Latina: el debate sobre las estrategias*. Caracas: Fondo Editorial Tropykos.

____ (2011). *El fenómeno Chávez: sus orígenes y su impacto*. Caracas: Fundación Centro Nacional de Historia.

Ellner, Steve y Daniel Hellinger (2003). «Introducción. En la búsqueda de explicaciones» En *La política venezolana en la época de Chávez: clases, polarización y conflicto*, p. 27. Caracas: Nueva Sociedad.

Garrido, Alberto (2000). *La historia secreta de la Revolución Bolivariana*. Mérida: Editorial Venezolana.

____ (2003). *Guerrilla y Revolución Bolivariana*. Documentos. Caracas: Ediciones del Autor.

Giordani, Jorge (1992). *La propuesta del MAS*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

Granier, Marcel (1984). *La generación de relevo vs. el Estado omnipotente*. Caracas: Publicaciones Seleven, C.A.

Harvey, David (2007). *Breve historia del neoliberalismo*. Madrid: Akal.

Hayek, Fridrich (1990). *Camino a la servidumbre*. Madrid: Alianza Editorial.

Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA (2000). «Indicadores económicos». *Autor* [página en línea]. Recuperado el 4 de abril del 2011 de <http://www.iesa.edu.ve/macroeconomia/scripts/macroeconomia>

Izard, Miguel (2012). *El poder, la mentira y la muerte. De El Amparo al Caracazo*. Caracas: Comisión presidencial para la conmemoración del vigésimo aniversario de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992.

«La Unidad de las izquierdas» (1978, 9 de abril). *El Nacional*, Caracas.

Laclau, Ernesto (2004). *La razón populista*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Lander, Edgardo (1995). «Movimientos sociales urbanos, sociedad civil y nuevas formas de ciudadanía en Venezuela». *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, (2-3), pp. 174-175.

Lander, Luis E. (2006). «Presentación. A treinta años de la nacionalización petrolera». *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, (1), p. 103.

«Ley Orgánica que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos» (1975, 21 de agosto). *Pdvsa* [página en línea]. Recuperado el 1° de enero del 2010 de http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenu.tpl.html&newsid_obj_id=163&newsid_temas=6

López Maya, Margarita (2003). «Hugo Chávez Frías, su movimiento y presidencia». En Steve Ellner y Daniel Hellinger (eds.), *La política venezolana en la época de Chávez: clases, polarización y conflicto*, pp. 99-102. Caracas: Nueva Sociedad.

____ (2005). *Del Viernes Negro al Referendo Revocatorio*. Caracas: Alfadil.

Maneiro, Alfredo (1980a). «Ante la situación nacional y el descontento de la izquierda». En *Alfredo Maneiro. Escritos de filosofía y política*, p. 155. Los Teques: Fondo Editorial A.L.E.M.

____ (1980b). «Escrito con la izquierda». En *Alfredo Maneiro. Escritos de filosofía y política*, p. 172. Los Teques: Fondo Editorial A.L.E.M.

Manzano, Osmel (2009). «Venezuela y su petróleo. El origen de la renta». En *Temas de formación sociopolítica*, p. 62. Caracas: Fundación Centro Gumilla.

Martínez, Pedro José (1980). «La unidad de las izquierdas». *Revista Politeia*, Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, (9), pp. 311-394.

Medina, Medófilo (2003). «Venezuela al rojo entre noviembre de 2001 y mayo de 2002». En *Venezuela: confrontación social y polarización política*, pp. 17-36. Bogotá: Ediciones Aurora.

Mendoza Pottelá, Carlos (2006). «Vigencia del nacionalismo petrolero». *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela Caracas, Caracas, (1), p. 184.

Moleiro, Moisés (1993). *El MAS: un proyecto político para el cambio o la conservación*. Caracas: Fondo Editorial Tropykos.

Mommer, Bernard (2003). «Petróleo subversivo». En Steve Ellner y Daniel Hellinger (eds.), *La política venezolana en la época de Chávez: clases, polarización y conflicto*, p. 168. Caracas: Nueva Sociedad.

Movimiento V República (1996). *Agenda Alternativa Bolivariana. Una propuesta patriótica para salir del laberinto* [folleto]. Caracas: Autor.

Navas Blanco, Alberto (2012). *Hacia una recomprensión del tiempo histórico venezolano*. Caracas: Heródoto-Universidad Central de Venezuela.

Ojeda Olaechea, Alonso (1999). *Dos nombres. Una vida de acción y pasión*. Caracas: Monte Ávila Editores.

«Pacto de Punto Fijo» (2013, 27 de agosto). *Venezuela analítica* [página en línea]. Recuperado el 27 de abril del 2010 de http://www.analitica.com/bitblo/venezuela/punto_fijo.asp

Pérez, Carlos Andrés (1974, 13 de febrero). «Discurso completo». *El Nacional*, Caracas, p. D-12.

____ (1975). «Discurso del presidente Carlos Andrés Pérez con motivo de la ley de nacionalización del petróleo». *Analítica.com* [página en línea]. Recuperado el 1° de enero del 2010 de http://www.analitica.com/Bitblo/cap/nacionalizacion_petroleo.asp

____ (1989). *Discurso pronunciado al tomar posesión como Presidente Constitucional de la República de Venezuela*. Manuscrito no publicado. Caracas.

Pergolis, Juan Carlos (2002). *Ciudad, memoria y recorrido*. Mérida: Centro de Investigaciones en Ciencias Humanas de la Universidad de Los Andes.

Petkoff, Teodoro (1976). *Proceso a la izquierda: o de la falsa conducta revolucionaria*. Caracas: Planeta.

Primicia (1997). Caracas, (5), p. 5-11.

____ (1998). Caracas, (41), p. 13.

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea (1999). «Informe Especial: Estado de derecho sin fronteras. Una década de impunidad en Venezuela». *Autor* [página en línea]. Recuperado el 10 de agosto del 2011 de <http://>

www.derechos.org.ve/proveaweb/wpcontent/uploads/informe_especial2.pdf

Ramírez, Keber (1998). «Programa nacional de ejecución inmediata para el rescate y fortalecimiento de la dignidad nacional (programa de emergencia) 1992». En *Golpes militares en Venezuela 1945-1992. Actas y Decretos de los vencidos y de los vencedores*. Caracas: El Centauro Ediciones.

Rangel, Carlos (1991). *Del buen salvaje al buen revolucionario*. Caracas: Monte Ávila Editores.

Revista de Revistas (1969). Caracas, (3).

Rey, Juan Carlos (1999). «El sistema de partidos venezolano». En *12 textos fundamentales de la ciencia política venezolana*. Caracas: Instituto de Estudios Políticos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela.

____ (2009). «El sistema de partidos venezolano, 1830-1999». En *Temas de formación sociopolítica*. Caracas: Centro Gumilla.

Rico, Rodolfo y otros (2008, 25 de octubre). «Masacre de El Amparo: veinte años de impunidad». *Vimeo* [página en línea]. Recuperado el 10 de julio del 2011 de <http://vimeo.com/2061314>

Roberts, Kenneth (2003). «Polarización social y resurgimiento del populismo en Venezuela». En Steve Ellner y Daniel Hellinger (eds.), *La política venezolana en la época de Chávez: clases, polarización y conflicto*, pp. 80-81. Caracas: Nueva Sociedad.

Rodríguez, Argenis (2012). *Febrero*. Caracas: Comisión para la conmemoración del vigésimo aniversario de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992.

Romero, Aníbal (1986). *La miseria del populismo*. Caracas: Ediciones Centauro.

Rondón, César Miguel (1998). *País de estreno. 37 entrevistas antes que el destino nos alcance*. Caracas: Editorial CEC. SA.

Smilde, David, Keta Stephany y Margarita López Maya (2002). *Protesta y cultura en Venezuela. Los marcos de acción colectiva en 1999*. Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela.

Solórzano, César (1984). *El socialismo y la democracia: una opinión desde el MAS*. Caracas: Editorial Testimonios.

Stambouli, Andrés (1980). «La campaña electoral de 1978. Análisis de las estrategias de comunicación masiva». *Revista Politeia*, Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, (9).

____ (2005). *La política extraviada. Una historia de Medina a Chávez*. Caracas: Fundación para la Cultura Urbana.

Subcomandante Insurgente Marcos (1999). «El neoliberalismo enemigo de la tierra, de la historia y de la cultura. Palabras del Subcomandante Marcos del EZLN». En Renán Vega Cantor (ed.), *Marx y el siglo XXI. Una defensa de la historia y del socialismo*. Bogotá: Ediciones Antropos.

Tarre Murzi, Alfredo (1974, 15 de marzo). «Palco de sombra». *El Nacional*, Caracas, p. C-3.

Tilly, Charles (1995). *Las revoluciones europeas (1492-1992)*. Barcelona: Editorial Crítica.

«Todos contra Teodoro. Simpatizamos con el eurocomunismo» (1978). *Revista Momento*, Caracas, (1.123), p. 16.

Urbaneja, Diego Bautista (2007). *La política venezolana desde 1958 hasta nuestros días. Temas de formación sociopolítica*. Caracas: Fundación Centro Gumilla.

Uzcátegui, Rafael (2008, 20 de noviembre). «Venezuela: masacre de El Amparo; aniversario de un montaje protegido por la justicia militar». *Radio Ecos* [página en línea]. Recuperado el 22 de marzo del 2010 de <http://radioecos.radioteca.net/leer.php/121662>

De Valera, Irene (ed.) (2002). *Leyes habilitantes del 13/11/2000 y sus decretos leyes*. Caracas: Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

Vive (2007, 29 de abril). «Chávez 4 de febrero de 1992». *Youtube* [página en línea]. Recuperado el 23 de mayo del 2010 de <http://www.youtube.com/watch?v=dV1fKQscgSQ&feature=related>

Wallerstein, Immanuel (1988). *Utopística, o las opciones históricas del siglo XXI*. México: Siglo XXI.

____ (1997). «El EspacioTiempo como base del conocimiento». *Revista Análisis Político*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, (32), pp. 1-15.

____ (2001). *Después del Liberalismo*. México: Siglo XXI.

____ (2005). *La decadencia del poder estadounidense. Estados Unidos en un mundo caótico*. Santiago de Chile: LOM.

Índice

Introducción	9
El contenido sustantivo del Pacto de Punto Fijo: el acuerdo como fetiche	21
El primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, la <i>Gran Venezuela</i>	
Democracia con petróleo, la danza de los millones	
La “nacionalización” petrolera, disimulos, rendijas y paradojas	
Desconcierto y deslinde en la izquierda	
Inventamos... y erramos	
El instante del Movimiento al Socialismo (MAS)	
Las elecciones presidenciales de 1973, la participación del MAS	
La conquista de un orden específico	61
Las elecciones de 1978 y la situación política de la izquierda	
La izquierda o el persistente archipiélago <i>progresista</i>	
La centralidad del partido-aparato	
El primer golpe, el Viernes Negro (1983)	
La expansión neoliberal	85
Trayectoria y principios neoliberales	
Sondeos neoliberales en Venezuela	
El marzo merideño (1987) y la masacre de El Amparo (1988)	
La fase final del Puntofijismo	111
La aplicación de las políticas de ajuste	
El 27 de febrero de 1989, la irrupción de los pobres	
Los componentes de la crisis	
El 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, la fisura irreparable	
El naufragio de la democracia “puntofijista”	

El chavismo	165
La gestación del movimiento militar	
La perspectiva del poder	
Las elecciones de 1998 y la deriva revolucionaria del proceso	
<i>La Constitución Bolivariana</i> y su proceso	
Reflexiones finales	191
Lista de referencias	201

El declive de la democracia liberal de partidos en Venezuela (1974-2001)
se terminó de editar en el mes de enero de 2016.

El período que se va a examinar contiene una parte importante de las transformaciones operadas a finales del siglo XX venezolano. Se han querido detectar los momentos a través de los cuales la democracia de partidos gozó de más apoyo popular, seguramente durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez (1974-1978), y el desenlace del sistema gestado desde 1958, cuyos instantes decisivos se materializaron entre la asunción del chavismo al poder desde 1999, y las confrontaciones que presenció el país a partir de la aprobación de las leyes habilitantes del año 2000, cuando se empieza a consolidar la orientación popular del proceso bolivariano.

La disertación aborda los aspectos más definitivos y fundamentales de la democracia puntofijista, en el momento cuando se detiene en el examen sobre los componentes que desembocaron en el agotamiento del modelo liberal y el surgimiento del chavismo, convertido en una alternativa potencialmente revolucionaria.

Leonardo Bracamonte es historiador. Profesor de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela. Miembro del Grupo de Trabajo sobre Ruptura, Transición y Transformación en la Venezuela del siglo XXI, coordinado por la Fundación Rosa Luxemburg y el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.



Gobierno
Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la **Cultura**



RIE: G-20008198-8